



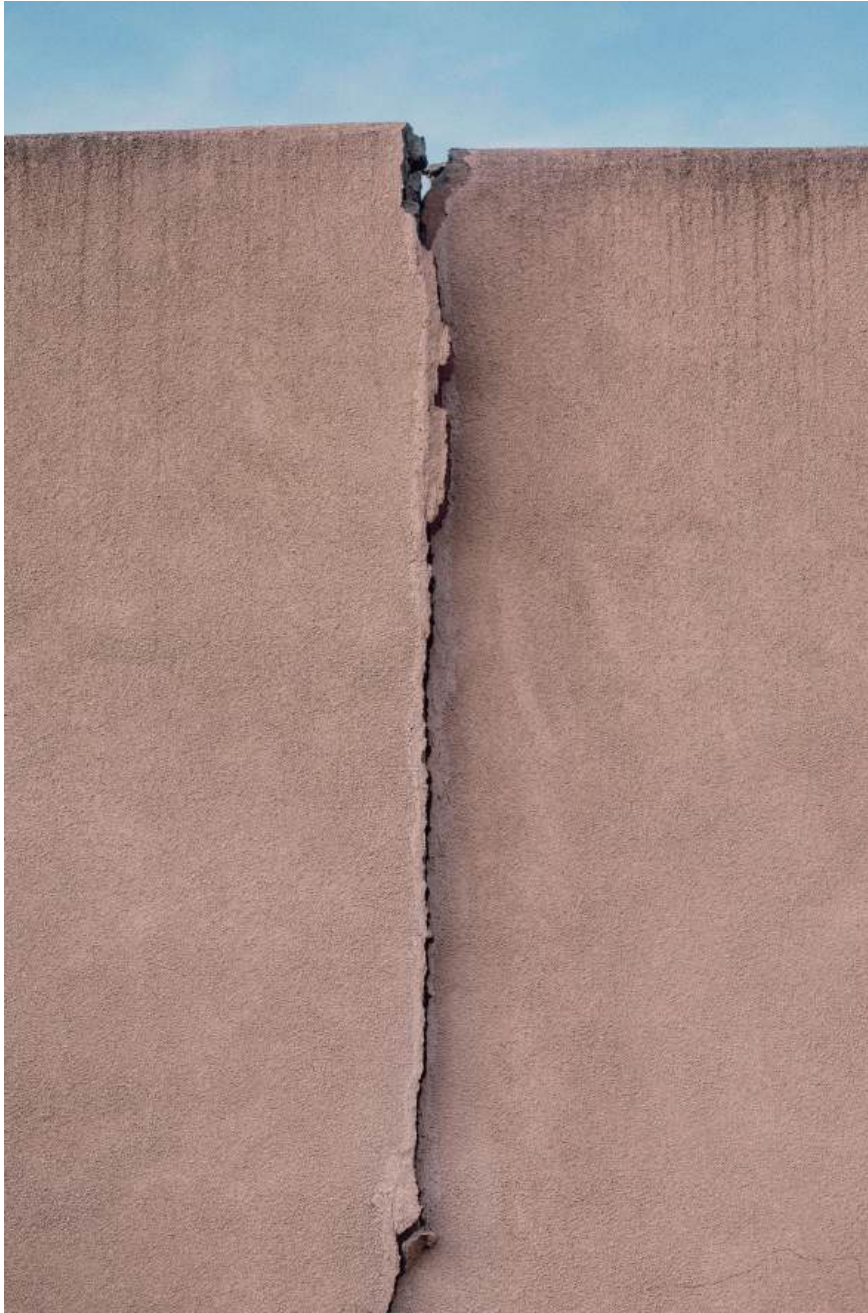
EL RETO

DE LA PALABRA

LA EROSIÓN SILENCIOSA

DEL DIÁLOGO

JORGE
WOODBIDGE
GONZÁLEZ



Woodbridge González, Jorge.

El Reto de la Palabra:

La Erosión Silenciosa del Diálogo

1a Edición. Colección Costa Rica: Reto Siglo 21

Alajuela, Costa Rica. 2026

168 pp. Ediciones JWG.

Libro de conversaciones - Programa Reto Siglo 21.

Autor: Jorge Woodbridge González



STUDIO HOTEL

Boutique

Agradecimiento especial a Studio Hotel, Santa Ana



Diseño, diagramación y concepto editorial:

Juan Diego Otalvaro Ortega - jd@theroversquest.org

theroversquest.org



Grabación y Filmación de Entrevistas:

Amanda Agüero - framefilmscr@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin la autorización del autor.

Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción y difusión de los contenidos de este libro para fines educativos u otros no comerciales, siempre que se reconozcan los créditos de la obra en las citas y referencias.



El Reto de la Palabra: La Erosión Silenciosa del Diálogo

Por: Jorge Woodbridge González

PRÓLOGO

Hay libros que nacen de una pregunta y otros que nacen de una preocupación. Este libro nace de ambas. De la pregunta por el país que estamos construyendo y de la preocupación por el país que podríamos dejar de ser.

Costa Rica ha cultivado durante generaciones una imagen de sí misma asociada a la paz, al diálogo, a la convivencia y a una institucionalidad capaz de resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia. Esa imagen no pertenece únicamente a los discursos oficiales ni a los folletos turísticos. Forma parte de una memoria colectiva: la idea de que, aun cuando pensamos distinto, existe una mesa a la cual podemos sentarnos para intentar encontrar un punto de encuentro.

Pero toda sociedad cambia. Y algunas transformaciones no ocurren con estruendo. Se producen lentamente, casi sin que las percibamos, hasta que un día descubrimos que aquello que considerábamos normal ya no lo es.

Ese es precisamente el territorio que Jorge Woodbridge se propone explorar en *El Reto de la Palabra: La erosión silenciosa del diálogo*.

El libro no pretende únicamente describir una coyuntura política. Su mirada va más allá. Intenta comprender cómo hemos llegado a un momento en el que el desacuerdo parece convertirse con demasiada facilidad en enemistad; donde el argumento es sustituido por la descalificación y donde la conversación pública, en lugar de acercarnos, puede terminar encerrándonos en trincheras cada vez más profundas.

El recorrido comienza con una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de confiar en los espacios y las personas que durante décadas sirvieron de mediadores entre el ciudadano y el poder? El autor observa el desgaste de los partidos políticos, de las instituciones religiosas y del movimiento sindical, no para idealizar el pasado, sino para señalar la pérdida de aquellos espacios intermedios que alguna vez ayudaron a transformar el conflicto en negociación. El resultado es una ciudadanía progresivamente más sola, más vulnerable y más expuesta a liderazgos que ofrecen respuestas simples a problemas extraordinariamente complejos.

A partir de allí, el libro entra en uno de los escenarios más determinantes de nuestro tiempo: el universo digital. Las redes sociales modificaron radicalmente la manera en que nos informamos, discutimos y construimos nuestras propias certezas. La conversación política dejó de depender exclusivamente de periódicos, periodistas, partidos, instituciones y otros filtros tradicionales. Ahora puede ocurrir directamente entre un gobernante y millones de ciudadanos, entre una persona y su teléfono, entre familiares y vecinos. En ese nuevo territorio, la indignación, el miedo y la burla encuentran con frecuencia un camino mucho más rápido que la reflexión.

Pero el argumento de Woodbridge no termina en las redes. El libro se adentra en una cuestión todavía más delicada: qué sucede con una democracia cuando sus contrapesos pierden autoridad, cuando las instituciones comienzan a ser presentadas como obstáculos y cuando la concentración del poder deja de provocar alarma porque la ciudadanía, agotada y frustrada, empieza a percibirla como una posible solución. El análisis conduce entonces hacia la relación entre poder, impunidad, Estado de derecho, prensa, justicia y reglas constitucionales. Sin embargo, sería injusto leer estas páginas únicamente como una advertencia institucional.

Una de las ideas más importantes del libro es precisamente que el deterioro democrático no puede explicarse sin mirar las condiciones materiales que lo alimentan. El miedo, la inseguridad, la desigualdad,

la falta de oportunidades, las dificultades en la salud y las fracturas educativas no son asuntos secundarios frente a la discusión política. Son parte del mismo problema. Una democracia que no consigue responder a las necesidades concretas de sus ciudadanos termina dejando un vacío que otros discursos están dispuestos a ocupar.

Por eso este libro no debería leerse como una defensa automática de un determinado sector político ni como una condena sencilla de otro. Su propuesta más profunda exige algo mucho más difícil: recuperar la capacidad de escuchar incluso aquello con lo que no estamos de acuerdo.

En este sentido, resulta significativo que, hacia el final de su recorrido, el propio libro se detenga para reconocer los matices y las razones de quienes observan la realidad desde otra perspectiva. El autor entiende que defender la democracia también implica resistir la comodidad de creer que únicamente nosotros poseemos la verdad. Escuchar al otro no significa darle la razón. Significa reconocer su derecho a formar parte de la conversación.

Y es allí donde aparece el verdadero sentido del título.

El Reto de la Palabra no es solamente el reto de hablar. Es el reto de volver a utilizar la palabra como instrumento de encuentro y no como arma. Es recuperar la conversación como una forma de ciudadanía. Es comprender que una democracia no se sostiene únicamente en las leyes, las elecciones o los edificios institucionales, sino también en la manera cotidiana en que sus ciudadanos se miran, se escuchan y aceptan la posibilidad de estar equivocados.

El libro que el lector tiene ahora entre sus manos recorre, por momentos, un paisaje inquietante. Habla de fracturas, de pérdida de confianza, de polarización, de poder y de soledad ciudadana. Pero su propósito último no parece ser conducirnos hacia el pesimismo. Al contrario: después del diagnóstico viene la responsabilidad. Después de señalar las heridas

aparece la pregunta inevitable por aquello que cada uno puede hacer para no profundizarlas.

Porque quizá el mayor peligro para una democracia no sea que existan ciudadanos que piensen diferente. El peligro comienza cuando dejamos de considerar al que piensa diferente como parte de la misma comunidad.

Leer este libro exige, por ello, algo más que seguir sus argumentos. Exige detenernos de vez en cuando y preguntarnos de qué manera participamos nosotros mismos en esa erosión silenciosa que aquí se describe. En nuestras conversaciones. En nuestras redes. En nuestras familias. En la manera en que compartimos una noticia, juzgamos al adversario o reaccionamos ante una opinión contraria.

Al final, la democracia también ocurre allí.

Y quizá sea precisamente por eso que el reto de Costa Rica no sea encontrar una palabra más fuerte, sino recuperar una palabra capaz de volver a unirnos.

***Ese es el desafío que Jorge Woodbridge coloca frente al lector.
Ese es, también, el Reto de la Palabra.***



NOTA EDITORIAL

Este libro existe porque hay momentos en la vida de un país en los que guardar silencio deja de ser una opción.

No lo escribí porque crea tener todas las respuestas. Tampoco porque piense que mi manera de entender Costa Rica sea la única posible. Lo escribí, precisamente, porque tengo demasiadas preguntas. Porque observo lo que ocurre a nuestro alrededor y siento que algunas conversaciones que antes éramos capaces de tener hoy se han vuelto difíciles, incómodas, incluso imposibles.

Y cuando una sociedad deja de hablar, algo comienza a romperse.

Vivimos tiempos en los que resulta mucho más fácil escuchar aquello que confirma lo que ya pensamos. Nos rodeamos de personas que comparten nuestras opiniones, seguimos las voces que nos dan la razón y rechazamos, muchas veces antes de escucharlas, aquellas palabras que nos incomodan. Hemos convertido el desacuerdo en una amenaza y la crítica en una ofensa.

Pero una democracia no puede sobrevivir únicamente con palabras agradables.

A veces necesitamos escuchar precisamente aquello que no queremos escuchar.

Necesitamos que alguien nos diga que podemos estar equivocados. Que una institución que criticamos puede estar cumpliendo una función necesaria. Que el adversario político no necesariamente es nuestro enemigo. Que un gobierno que nos representa también debe ser vigilado. Que las leyes que

hoy nos parecen un obstáculo pueden convertirse mañana en la protección que necesitamos. Y que defender la democracia significa defender incluso el derecho de otros a cuestionar nuestras propias certezas.

Este libro nace de esa convicción.

No pretende ofrecer una fotografía definitiva de Costa Rica. Pretende abrir una conversación. Una conversación que considero urgente porque muchas de las cosas que aquí se examinan no ocurren de un día para otro. La erosión de una democracia rara vez comienza con un acontecimiento espectacular. Puede comenzar con algo mucho más pequeño: acostumbrarnos al insulto, justificar la mentira cuando la pronuncia alguien de nuestro lado, celebrar que se silencie al adversario, desconfiar de toda institución que contradiga nuestras preferencias o aceptar que el poder no tenga límites cuando creemos que está siendo utilizado para alcanzar aquello que nosotros deseamos.

Ese es el verdadero peligro.

Porque las democracias no pertenecen a los gobiernos. Tampoco pertenecen a los partidos, a los jueces, a los empresarios, a los sindicatos, a los periodistas ni a quienes ocupan temporalmente una posición de poder. La democracia nos pertenece a todos. Y, por lo mismo, su deterioro también puede ser responsabilidad de todos.

He escrito estas páginas desde la preocupación, pero no desde la desesperanza.

Creo profundamente que Costa Rica conserva una capacidad extraordinaria para encontrarse consigo misma. Nuestra historia demuestra que hemos sido capaces de sentarnos en una misma mesa con personas que pensaban radicalmente distinto y buscar acuerdos aun cuando ninguno obtenía exactamente lo que quería. Esa cultura del encuentro fue una de nuestras mayores fortalezas.

Quizá hoy necesitamos recordarla.

No para regresar al pasado. El pasado no vuelve. Las instituciones cambian, las sociedades cambian, la tecnología cambia y también cambian las formas en que los ciudadanos se organizan y participan. El desafío consiste en encontrar nuevas maneras de construir comunidad, de ejercer ciudadanía y de conversar en una época en la que una pantalla puede acercarnos a millones de personas y, al mismo tiempo, aislarnos profundamente de quienes tenemos al lado.

Por eso estas páginas no fueron escritas para quienes piensan como yo.

Fueron escritas también —y quizá especialmente— para quienes no piensan como yo.

Porque si solamente escuchamos las palabras que nos gustan, dejamos de conversar. Y cuando dejamos de conversar, dejamos de reconocernos como parte de una misma sociedad.

Sé que algunas de las ideas que aparecen aquí pueden incomodar. Algunas pueden provocar desacuerdo. Otras quizá despierten críticas. Espero que así sea.

Un libro sobre el diálogo no tendría sentido si pretendiera cerrar la conversación.

Lo que quisiera es exactamente lo contrario: que estas páginas sean una invitación a abrirla.

A escuchar antes de responder. A preguntar antes de condenar. A dudar antes de afirmar. A defender nuestras convicciones sin convertirlas en trincheras. Y, sobre todo, a recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir: la posibilidad de sentarnos frente al otro y reconocer que, aunque pensemos diferente, seguimos compartiendo la misma casa.

Costa Rica necesita volver a hablar.

Pero para hacerlo, primero tendremos que aprender a escuchar aquellas palabras que no queremos escuchar.

Este libro nace de esa urgencia.

ÍNDICE GENERAL

6

Prólogo

12

Nota Editorial

18

Presentación

24

Capítulo 1:
EL POPULISMO TICO
Y LA MAQUINARIA
DEL DESPRESTIGIO

40

Capítulo 2:
EL COLAPSO
DE LOS MEDIDORES

54

Capítulo 3:
GOBERNAR
SIN FILTROS

68

Capítulo 4:
LA MAQUINARIA
DEL PODER

82

Capítulo 5:
EL ASEDIO
A LOS CONTRAPESOS

96

Capítulo 6:
**MÁS ALLÁ
DE LAS URNAS**

108

Capítulo 7:
**EL TERRITORIO
FRACTURADO**

120

Capítulo 8:
**EL DESMANTELAMIENTO
DEL ESTADO SOCIAL**

132

Capítulo 9:
**BALANCE
DE LA CRISIS**

144

Capítulo 10:
**RESPONSABILIDADES
DEL PODER Y EL VALOR
DEL DIÁLOGO**

156

Capítulo Final:
**LA RESISETENCIA
CIUDADANA Y LOS
GUARDIANES DE
LA DEMOCRACIA**

Hay libros que buscan explicar una época. Otros intentan convencer al lector de una idea. Y hay algunos, más incómodos, que aparecen para detenernos un momento y obligarnos a mirar aquello que preferiríamos no ver.

Este libro pertenece a esa última categoría.

PRESENTACIÓN

Hay cosas que un país deja de decir.

Quizá una de las cosas más inquietantes que le puede ocurrir a una sociedad no sea que deje de estar de acuerdo, sino que llegue a un punto en el que ya no pueda conversar. Que la diferencia deje de ser una posibilidad de encuentro y se convierta en una amenaza. Que una opinión distinta despierte sospecha, rabia o desprecio. Que el insulto resulte más fácil que el argumento y que la burla termine ocupando el lugar que alguna vez tuvo la propuesta.

Eso es, en el fondo, lo que este libro viene a preguntarnos. ¿Qué nos está pasando?

No solamente en la política. No solamente en las instituciones. Nos está pasando en nuestras conversaciones, en nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo, en las redes sociales, en la manera en que miramos a quien votó diferente, piensa diferente o simplemente no comparte nuestras certezas.

Porque la democracia no desaparece únicamente cuando se rompen las leyes. También comienza a vaciarse cuando dejamos de creer que el otro merece ser escuchado; cuando aceptamos que quien ganó una elección tiene derecho a gobernar sin límites; cuando las instituciones solo nos parecen valiosas mientras coinciden con lo que pensamos; cuando dejamos de indignarnos ante aquello que ayer nos habría parecido inaceptable.

Jorge Woodbridge nos invita a mirar ese proceso sin la comodidad de las respuestas fáciles. No se limita a señalar culpables. Intenta comprender de dónde nace el descontento, por qué tantos ciudadanos han perdido confianza en las estructuras que durante décadas sostuvieron nuestra convivencia y cómo el vacío dejado por los antiguos mediadores puede ser ocupado por nuevas formas de poder, de propaganda y de confrontación.

Pero este no es solamente un libro sobre una crisis.
Es, sobre todo, un libro sobre una posibilidad.

La posibilidad de que todavía podamos recuperar algo que parecía tan sencillo que dejamos de comprender su verdadero valor: sentarnos frente al otro y hablar.

Hablar cuando estamos en desacuerdo. Escuchar cuando lo que escuchamos nos incomoda. Reconocer que podemos estar equivocados. Entender que ninguna mayoría es dueña permanente del país y que quienes hoy gobiernan mañana podrían estar en la oposición. Recordar que Costa Rica, en sus momentos decisivos, no construyó su convivencia destruyendo al que pensaba distinto, sino encontrando espacios donde incluso quienes estaban enfrentados podían sentarse a la misma mesa.

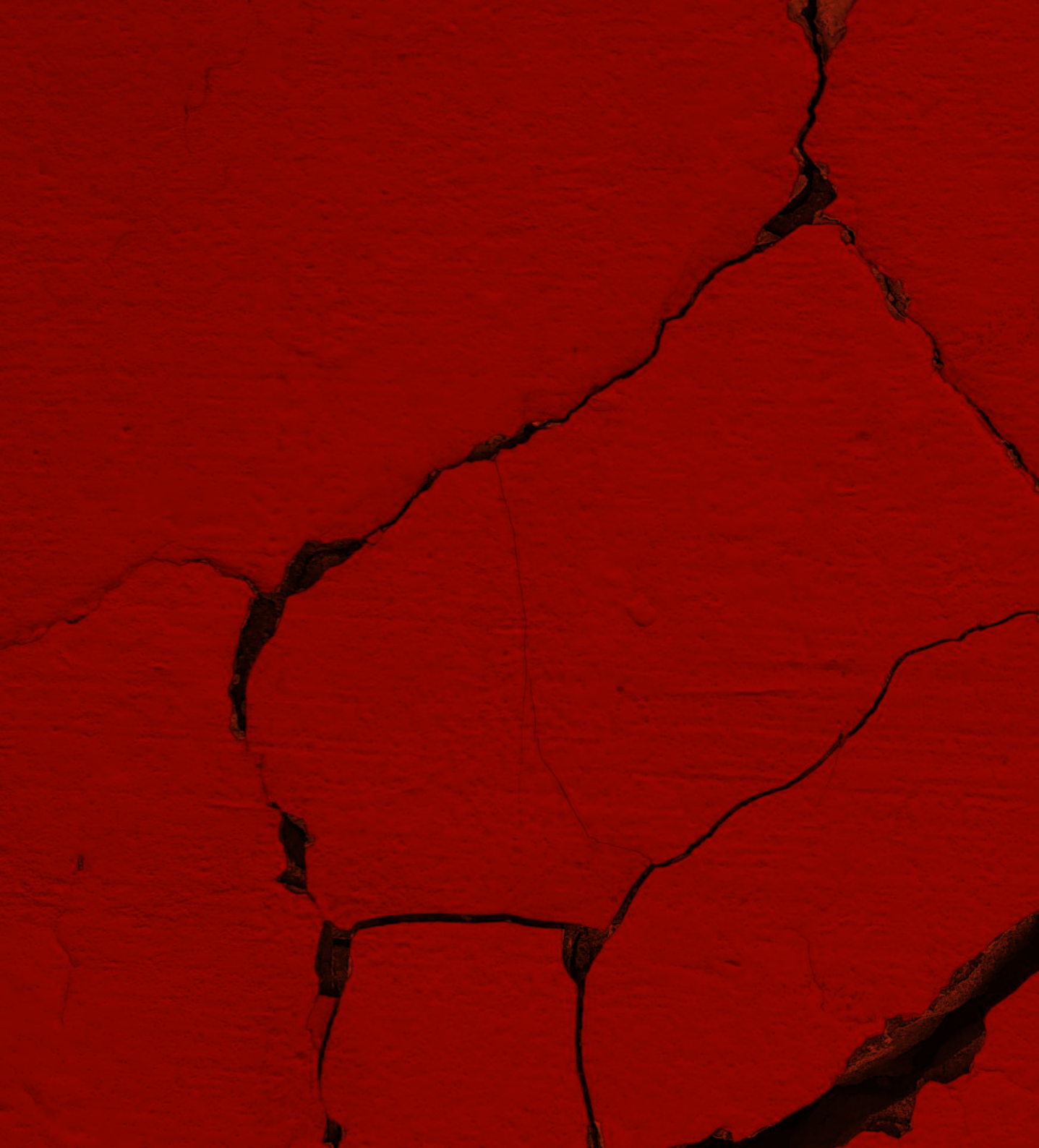
Tal vez por eso estas páginas resulten incómodas.

Porque algunas de las palabras que aquí aparecen no fueron escritas para darnos la razón, sino para quitarnos, por un instante, la comodidad de tenerla.

Y quizá ese sea precisamente el momento en que un libro comienza a ser verdaderamente necesario.

Lea estas páginas sin prisa. No necesariamente para estar de acuerdo. Léala para escuchar. Para recordar. Para preguntarse qué hemos perdido, qué estamos permitiendo y, sobre todo, qué todavía podemos recuperar.

Porque un país no deja de ser democrático el día en que pierde su voz. Empieza a perderla el día en que sus ciudadanos dejan de escucharse.





*“Quizá no pensemos igual, pero todavía
podemos reconocernos como parte de la
misma casa.”*

Jorge Woodbridge González

Capítulo 1

EL POPULISMO TICO Y LA MAQUINARIA DEL DESPRESTIGIO

Hay un silencio nuevo en la mesa de las familias costarricenses. Quienes peinamos canas recordamos un país donde el domingo, alrededor del café chorreado y el pan dulce, la política era un tema de conversación apasionado, a veces ruidoso, pero casi siempre inofensivo. Podíamos defender banderas distintas, colores contrarios, y al final de la tarde seguíamos siendo hermanos, primos, vecinos. La política era algo que hacíamos juntos para organizar nuestra convivencia. Hoy, sin embargo, muchos han optado por callar. Se evita hablar del acontecer nacional en las reuniones familiares o en los pasillos del trabajo por un temor sutil, casi imperceptible: el miedo a que una simple opinión distinta nos convierta, a los ojos del otro, en un enemigo. Ese silencio, esa prudencia dolorosa que nos hemos autoimpuesto para no perder amistades de toda la vida, es el síntoma más claro de que algo profundo se ha roto en el alma de nuestra democracia.



No llegamos a este punto de inflexión de la noche a la mañana. La erosión de nuestro diálogo no fue un accidente repentino, sino el resultado de un largo desencuentro. Para comprender cómo la polarización echó raíces en nuestro suelo, un suelo históricamente fértil para la paz y el entendimiento, primero debemos tener la valentía y la honestidad de mirar de frente el dolor de nuestra gente. Porque el descontento que hoy respira Costa Rica es profundamente real, y está justificado. Durante décadas, nos acostumbremos a mirar el país a través del espejo reluciente de las cifras macroeconómicas. Nos enorgullecíamos frente al mundo por nuestro crecimiento sostenido, por la llegada de grandes inversiones extranjeras y por nuestros envidiables indicadores internacionales. Y era cierto, ese país de éxito existe, pero no es la casa en la que habitan todos los costarricenses.

Mientras el país de los grandes números celebraba, había otra Costa Rica que se iba quedando atrás, invisible a los ojos de quienes tomaban las decisiones en el centro de la capital. Pensemos en el agricultor que ve cómo el fruto de su trabajo pierde valor frente a sus ojos, atrapado en un sistema que no lo protege. Pensemos en la madre de familia que debe madrugar a las tres de la mañana para hacer una fila a la intemperie, rogando por una cita médica para su hijo en un sistema de salud que parece haber olvidado su vocación de servicio. Pensemos en el joven de nuestras costas o de nuestras zonas rurales que, con su título de colegio bajo el brazo, descubre que las oportunidades de un empleo digno no cruzan las montañas de la Gran Área Metropolitana.

Esa brecha entre la Costa Rica que sale en los folletos turísticos y la Costa Rica que cuenta las monedas para pagar el autobús a fin de mes, fue creciendo ante la mirada indiferente de una clase política tradicional que se volvió predecible, lenta y, en demasiadas ocasiones, ensimismada en sus propios privilegios. Los partidos políticos que durante la segunda mitad del siglo veinte fueron grandes motores de movilidad social, grandes mediadores de los sueños del pueblo, comenzaron a perder el tacto. Dejaron de caminar los barrios de tierra y se quedaron en las oficinas con aire acondicionado. El ciudadano común comenzó a sentir que, sin importar por quién votara, su vida cotidiana no mejoraba. Los problemas

estructurales de empleo, de seguridad en las calles y de infraestructura se fueron acumulando como el agua detrás de una represa descuidada.

Es en este terreno de frustración, de promesas rotas y de esperanza marchita, donde nace la semilla del populismo contemporáneo. Cuando un pueblo se siente abandonado por quienes debían protegerlo, su corazón se vuelve tierra fértil para cualquiera que levante la voz con suficiente fuerza. Y así, en el ciclo político que comenzó a gestarse alrededor del 2022 y que se ha consolidado profundamente en nuestros días, vimos emerger un fenómeno inédito en nuestra historia republicana. No llegó vistiendo los ropajes de las viejas ideologías de izquierda o de derecha, que ya poco le decían al ciudadano de a pie. Llegó, más bien, disfrazado con el traje del sentido común.

Este nuevo estilo de liderazgo entendió, con una astucia innegable, que no necesitaba proponer planes técnicos complejos para ganarse el favor popular. Le bastaba con señalar a los culpables del dolor ciudadano. Se presentó a sí mismo como la voz solitaria del pueblo llano, levantándose valientemente frente a una élite privilegiada que había capturado las instituciones en su propio beneficio. El discurso era tan sencillo como seductor:

El sistema está podrido, las instituciones no sirven, los políticos de antes te han robado el futuro, y yo, que vengo de afuera, soy el único capaz de limpiar la casa.

Para un ciudadano que lleva décadas esperando que le arreglen la calle de su barrio o que le atiendan su dolor físico en un hospital, escuchar a un líder hablar con ese nivel de contundencia y aparente franqueza es un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, esa Costa Rica olvidada sintió

que alguien estaba regañando a los poderosos en su nombre. Y esa identificación emocional es la fuerza más grande de este fenómeno. El populismo no inventó el malestar costarricense, simplemente supo canalizarlo magistralmente. Le dio a la frustración un rostro a quien culpar y un héroe en quien confiar.

Pero aquí es donde radica el gran peligro, la trampa silenciosa en la que hemos ido cayendo como sociedad. Para que este relato del “salvador contra el sistema” funcione y se mantenga vivo, necesita alimentarse constantemente de la confrontación.

Si el líder es la encarnación de la voluntad del pueblo, entonces cualquiera que lo cuestione, cualquiera que intente ponerle un límite legal o pedirle cuentas, deja de ser visto como un ciudadano ejerciendo su derecho democrático y pasa a ser etiquetado inmediatamente como un enemigo de la patria.

Comenzamos a ver entonces cómo la forma de gobernar se transformó en una campaña electoral permanente. La herramienta más poderosa de este nuevo estilo no fue la firma de leyes ni la construcción paciente de acuerdos, sino la instalación de un espectáculo comunicacional.

Vimos nacer el ritual de las conferencias de prensa semanales, diseñadas no para informar a la población sobre el estado de la nación, sino como un escenario de confrontación, casi como un tribunal público donde se dicta quién es el “patriota” y quién es el “privilegiado”.

Semana a semana, desde el atril del poder, se fue tejiendo una narrativa binaria, de blancos y negros, que no admite matices. En este relato, de un lado está el gobierno luchando incansablemente por los más humildes, y del otro lado están todos los demás: los periodistas que hacen preguntas incómodas, los técnicos que revisan los presupuestos, los expertos que advierten sobre los riesgos legales de una decisión. A todos ellos se les agrupó bajo la misma sombra de la sospecha.

Este lenguaje confrontativo tiene un efecto devastador en nuestra convivencia ciudadana. Cuando desde la tribuna más alta del país se utiliza el sarcasmo, la burla y el señalamiento directo contra quienes piensan distinto, se envía un mensaje muy claro a la sociedad: la agresión verbal está permitida. Y así, el tono beligerante bajó desde las esferas del gobierno hasta permear nuestros teléfonos celulares, nuestras redes sociales y, finalmente, nuestras mesas familiares. El ciudadano que apoya fervientemente al nuevo proyecto político comienza a ver a su vecino, que quizás tiene dudas razonables sobre el rumbo del país, no como un

hermano costarricense con una opinión diferente, sino como un defensor de la corrupción del pasado.

Es una ilusión peligrosa creer que podemos destruir la reputación de nuestras instituciones y salir ilesos como sociedad. El proyecto de “refundación” del Estado, que tanto resuena en los discursos oficiales, se ha sostenido sobre la estrategia deliberada de convencer a la población de que todo lo construido antes de ellos está insalvablemente corrompido. La lógica es implacable:

Si logro que el pueblo desprecie a las instituciones encargadas de fiscalizarme, cuando esas instituciones intenten frenarme por un exceso de poder, el pueblo me aplaudirá a mí y las repudiará a ellas.

Esta es la paradoja más dolorosa que enfrentamos hoy en Costa Rica: cuanto más se debilita nuestra institucionalidad, cuanto más se insulta a quienes intentan ejercer los contrapesos naturales de una democracia, más se fortalece, a los ojos de un sector de la población, la legitimidad de quienes provocan ese desgaste. Se percibe el choque

institucional no como una señal de alarma de que las reglas del juego se están rompiendo, sino como una prueba heroica de que el liderazgo está “peleando contra los malos”.

Debemos detenernos a reflexionar, con mucha calma y con el corazón en la mano, sobre el precio que estamos pagando por este estilo de liderazgo. Entendemos y abrazamos la necesidad de sacudir las viejas estructuras ineficientes.

Compartimos el anhelo urgente de que el Estado funcione para el campesino, para la madre soltera, para el joven sin oportunidades. Pero demoler la confianza entre nosotros no construirá una sola casa, no acortará una sola lista de espera en los hospitales, ni traerá más seguridad a nuestros barrios.

Un país no es una suma de trincheras. Un país es, ante todo, un pacto de respeto mutuo. Cuando permitimos que nos convenzan de que la mitad de Costa Rica es enemiga de la otra mitad, estamos entregando el tesoro más valioso

que nos legaron nuestros abuelos: la paz social. Ese “pura vida” que nos define no es una simple frase para el turismo; es un profundo pacto de no agresión, es la certeza de que siempre podemos sentarnos a conversar, mirarnos a los ojos y encontrar un punto medio. Hoy, frente a la tentación de los gritos y la promesa de las soluciones fáciles, nuestro mayor reto es recordar que ningún líder, por carismático que sea, vale más que el abrazo sincero entre dos costarricenses.

Para entender a plenitud la magnitud del desafío que enfrentamos, debemos despojarnos de una vieja ilusión. Crecimos creyendo que las amenazas a la paz y al orden democrático siempre llegaban anunciadas por el estruendo de las botas militares, por el cierre repentino de un congreso a medianoche o por la irrupción violenta en los palacios de gobierno, tragedias que, por gracia y sabiduría de nuestros antepasados, logramos evitar en Costa Rica. Pero en el siglo veintiuno, las instituciones rara vez se derrumban de un solo golpe. Su caída es mucho más silenciosa. Se desmoronan a través de un desgaste paulatino, como una filtración de agua que avanza oculta tras la pared y que solo se hace evidente cuando los cimientos ya están irremediabilmente podridos.

Esa filtración silenciosa tiene un nombre y un método: la campaña de desprestigio sistemático. No estamos frente a exabruptos ocasionales o enojos pasajeros de un líder bajo presión; estamos siendo testigos de un mecanismo fríamente calculado para deslegitimar a cualquier figura, entidad o proceso que intente ejercer su función de control. Quienes promueven este estilo de liderazgo entienden una premisa fundamental de la psicología humana:

Si logras convencer a la multitud de que el árbitro del partido ha sido comprado, podrás cometer todas las faltas que desees en el terreno de juego, y en lugar de recibir el abucheo de la gradería, recibirás su aplauso ensordecedor.

En la política, esos árbitros son nuestras instituciones de control, nuestros tribunales, nuestras contralorías y nuestra prensa. Y la estrategia para anularlos ha sido despojarlos de su autoridad moral frente a los ojos del ciudadano.

Semana tras semana, de manera metódica y perseverante, se ha ido instalando en el imaginario colectivo la idea de que todos los poderes tradicionales están corroídos por el privilegio, que los expertos solo buscan proteger sus propios intereses y que la prensa independiente es una enemiga jurada del progreso del país.

El vehículo para sembrar esta desconfianza ha sido una innovación comunicacional que alteró por completo la cultura cívica costarricense. Lo que antes era una herramienta republicana para rendir cuentas — la conferencia de prensa oficial— se transformó en un formato fijo de entretenimiento político, una especie de plaza pública televisada donde no se busca informar con sobriedad, sino movilizar emociones. En este nuevo escenario, el gobernante asume el papel de un conductor de espectáculo que domina los tiempos, elige a quién señalar con el dedo, expone a sus críticos al escarnio público y cierra el telón sin someterse jamás a un interrogatorio profundo o a un debate en igualdad de condiciones.

Pensemos por un momento en el efecto acumulativo de este ritual sobre el alma de nuestra sociedad. Cuando nos sentamos frente a la pantalla y vemos a la máxima autoridad del país utilizar la burla y la humillación para referirse a un periodista, a un diputado o a un juez, algo muy delicado se rompe en nuestro tejido social. El ciudadano, agobiado por sus propios problemas cotidianos, puede sentir una satisfacción fugaz al ver a las figuras de autoridad tradicionales siendo reprendidas públicamente; es una catarsis ante tanta frustración acumulada. Pero el costo de ese aplauso momentáneo es altísimo. Se está normalizando la idea de que el poder no necesita responder a los argumentos técnicos o legales, sino que le basta con destruir la reputación de quien hace la pregunta.

Hablemos del periodismo y su papel en esta dinámica. Es cierto, y debemos reconocerlo con total honestidad, que la prensa no es infalible. A lo largo de los años, los medios de comunicación han cometido errores, han tenido puntos ciegos y, en ocasiones, han estado desconectados de las realidades de la Costa Rica profunda. Ese es un reclamo ciudadano legítimo. Sin embargo, utilizar esas imperfecciones como excusa para declarar a la prensa como “el enemigo” es un salto al vacío que ninguna

sociedad libre debería permitirse.

Cuando el liderazgo político descalifica sistemáticamente a quienes investigan y publican, no está castigando a un medio de comunicación; está castigando el derecho del ciudadano a conocer la verdad. Si destruimos la credibilidad de quienes tienen la labor de fiscalizar al poder, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente la versión oficial, la verdad dictada desde el púlpito del gobierno.

La historia universal nos ha enseñado, con lecciones escritas en dolor y lágrimas, que cuando el poder logra el monopolio absoluto de la verdad, el ciudadano queda completamente indefenso. Una democracia sin una prensa que incomode, que pregunte y que exija evidencias, es un cuerpo sin sistema inmunológico, listo para enfermar de autoritarismo ante la primera infección.

Pero la maquinaria del desprestigio no se detiene en los medios de comunicación; avanza, con igual ferocidad, sobre el conocimiento técnico y científico. Costa Rica es un país construido por visionarios que confiaron en la ciencia, en los datos y en el profesionalismo. Nuestros hospitales, nuestra red eléctrica, nuestras reservas naturales y

nuestro sistema electoral no fueron producto de discursos encendidos, sino del trabajo silencioso y riguroso de técnicos, ingenieros, médicos y abogados que pusieron su conocimiento al servicio del bien común.

Hoy, ese rigor técnico está bajo asedio. Si una institución encargada de cuidar las finanzas públicas advierte que un proyecto de ley es inviable o que un contrato no cumple con la ley, la respuesta ya no es un debate sobre los números o las cláusulas legales. La respuesta es un ataque directo a la moralidad del funcionario que firmó el documento. Se acusa al técnico de ser un “burócrata que frena el desarrollo”, de pertenecer a una “casta que odia al pueblo”. Esta sustitución del argumento por el insulto personal es, quizás, la herramienta más destructiva del populismo moderno.

Imaginemos que decidimos construir una casa para nuestra familia. Contratamos a un maestro de obras carismático, que nos promete el castillo más hermoso en un tiempo récord y a un costo bajísimo. Pero un día, el ingeniero estructural llega a la obra, revisa los planos y nos advierte

que el terreno es inestable y que los cimientos no soportarán el peso. ¿Qué haríamos si el maestro de obras, en lugar de corregir los cimientos, se dedica a gritarle al ingeniero, a burlarse de su título y a decirnos que ese profesional solo quiere arruinar nuestro sueño? El sentido común nos diría que debemos detener la obra, porque la ley de la gravedad no obedece a discursos ni a la popularidad.

Sin embargo, en la conducción del Estado, estamos permitiendo exactamente eso. Estamos aplaudiendo al maestro de obras que insulta al ingeniero. Cuando el hecho comprobable deja de importar, cuando las matemáticas y las leyes son tratadas como simples opiniones que pueden ser descartadas si no nos gustan, entramos en el peligroso terreno de la post-verdad. En este terreno, la realidad ya no importa; lo único que importa es qué tan fuerte se grita la mentira o qué tanta indignación logra generar un mensaje en nuestros teléfonos celulares.

De esta erosión institucional se desprende, casi de manera natural, la semilla de una ambición mayor: la idea de la “refundación”. Al convencer a buena parte del electorado de que el Congreso, los tribunales, los partidos y las entidades de control están fundamentalmente podridos, el liderazgo prepara el camino para argumentar que las viejas reglas del juego ya no sirven. Se empieza a coquetear, abierta o sutilmente, con la idea de que necesitamos una nueva república, unas nuevas leyes diseñadas a la medida de quienes hoy prometen salvarnos.

Pero debemos recordar que las reglas de nuestra Constitución no fueron escritas para amarrar al Estado, sino para proteger al ciudadano de la tentación natural que tiene todo poder de volverse absoluto. Esos frenos institucionales, esos tediosos trámites de revisión, esas asambleas donde todo se discute lentamente, no son un error del sistema; son el sistema mismo defendiéndose de la tiranía. Demoler esos contrapesos porque hoy nos parecen lentos o porque estamos enfadados con la clase política tradicional, es el equivalente a dismantelar el techo de nuestra casa porque estamos molestos con la gotera. Cuando venga la tormenta verdadera, descubriremos con horror que ya no hay nada que nos cubra.

El reto que enfrentamos no es simplemente defender a una institución por su nombre o su edificio. El reto es defender el principio de que nadie, absolutamente nadie, sin importar cuántos votos haya recibido o qué tan aplaudidas sean sus conferencias, está por encima de la ley. La maquinaria del desprestigio busca dejarnos solos frente al poder, convenciéndonos de que las instituciones son nuestras enemigas y que solo el líder nos protege.

Pero la sabiduría de nuestra historia nos enseña lo contrario:

La erosión puede ser silenciosa, pero nuestra respuesta ciudadana no tiene por qué serlo. Reconocer cómo funciona este mecanismo de división y desprestigio es el primer paso indispensable para desactivarlo, no con odio, no con más gritos, sino con la serena firmeza de un pueblo que se niega a cambiar su legado de paz institucional por el espejismo de la confrontación permanente.

El poder es efímero, las promesas de los hombres pasan y las popularidades se desvanecen. Lo único que nos asegura que mañana seguiremos siendo libres, que nuestros hijos podrán opinar sin miedo y que nuestros derechos serán respetados, es la solidez de nuestras instituciones y el respeto reverencial por la palabra compartida.

Este espectáculo del desprecio institucional, sin embargo, no lograría su objetivo si se quedara confinado a las conferencias de prensa o a los discursos oficiales. Para que la semilla de la polarización germine verdaderamente en el corazón de un país, necesita llegar hasta el espacio más íntimo del ciudadano.

Y lo ha logrado a través del dispositivo que todos llevamos en el bolsillo. Hoy, el campo de batalla donde se disputa el futuro de nuestra democracia ya no es la plaza pública, ni siquiera la urna electoral; es la pantalla de nuestro teléfono celular.

En el silencio de nuestras habitaciones, en la pausa del trabajo o en el trayecto del autobús. Es allí, donde el tejido social costarricense se está deshilachando, mensaje a mensaje, video a video.

Debemos comprender, con suma urgencia, cómo ha cambiado la forma en que conversamos como nación. Hasta hace no mucho tiempo, la sociedad costarricense compartía una misma realidad básica. Leíamos los mismos periódicos, escuchábamos los mismos noticieros en la radio o veíamos los mismos canales de televisión. Podíamos discrepar apasionadamente sobre las soluciones que el país necesitaba, podíamos discutir si una medida económica era justa o injusta, pero al menos partíamos de los mismos hechos. Sabíamos, juntos, si la pobreza había subido o bajado, porque los datos eran el punto de partida de nuestra conversación. Hoy, esa realidad compartida se ha fracturado en miles de pedazos.

Las redes sociales, que alguna vez soñamos como puentes para unir a la humanidad, se han convertido con demasiada frecuencia en muros que nos aíslan. El diseño invisible de estas plataformas no busca informarnos, ni educarnos, ni mucho menos hacernos reflexionar; su único objetivo comercial es mantener nuestra atención atrapada el mayor tiempo posible. Y quienes estudian el comportamiento humano han descubierto que nada atrapa la atención humana con más fuerza que la indignación, el miedo y la rabia. En este nuevo ecosistema digital, el análisis pausado de un problema complejo resulta aburrido y es rápidamente sepultado. En cambio, el insulto ingenioso, la descalificación cruel o el video editado para ridiculizar al adversario viajan a la velocidad de la luz.

El liderazgo que se basa en la confrontación ha encontrado en estas redes su vehículo perfecto. Un contralor que emite un informe técnico de cien páginas explicando por qué una obra pública incumple la ley, jamás podrá competir en el mundo digital contra un video de quince segundos donde se le acusa, a gritos, de ser un enemigo del pueblo. La asimetría es monumental. La verdad, por su propia naturaleza, requiere contexto, tiempo y paciencia; la desinformación populista, en cambio, es ágil, emocional y no requiere pruebas. Cuando un líder político gobierna a través de estas emociones virales, no necesita pasar por el filtro de una entrevista exigente o por el análisis de los expertos; le habla directamente a los instintos más primarios de sus seguidores, esquivando cualquier intento de rendición de cuentas institucional.

Pero el daño más profundo no ocurre en las plataformas abiertas donde todos pueden opinar, sino en la penumbra de nuestras conversaciones privadas. En Costa Rica, el verdadero vehículo de la post-verdad han sido los grupos familiares y vecinales de mensajería instantánea. Pensemos en ese chat del teléfono donde están nuestros tíos, nuestros primos, los compañeros de la escuela o los vecinos del barrio. Cuando una noticia falsa, un audio difamatorio o una captura de pantalla manipulada llega a través de ese canal, no viene de un extraño; viene reenviada por alguien a quien amamos y en quien confiamos.

Esta es la genialidad perversa de la desinformación moderna: secuestra nuestros afectos. Si un medio de comunicación publica una falsedad, podemos exigirle una rectificación. Pero si la mentira sobre un magistrado, sobre un político de oposición o sobre una institución llega a nuestro teléfono enviada por nuestro propio hermano, la barrera del escepticismo se derrumba. Esos mensajes cerrados, que circulan por millones en la privacidad de nuestros hogares, son imposibles de rastrear y desmentir a tiempo por parte de los periodistas o los analistas. Para cuando la verdad sale a la luz, la mentira ya ha contaminado la mesa familiar, dejando tras de sí un rastro de rencor y duda.

Al adentrarnos en este régimen de la post-verdad, el hecho verificable ha dejado de ser el árbitro supremo de nuestro debate público. Hemos llegado a un punto de ceguera donde ya no nos preguntamos si una afirmación es cierta o falsa, sino a qué bando pertenece quien la pronuncia.

Si un dato técnico confirma nuestras creencias o ataca a quienes detestamos, lo aplaudimos y lo compartimos sin dudar; si el mismo dato contradice nuestro relato, la reacción instintiva ya no es revisar la evidencia, sino intentar destruir a la institución que lo publicó.

Cuando una sociedad pierde la capacidad de ponerse de acuerdo incluso en los hechos más elementales, el diálogo constructivo muere por inanición. Ya no hay debate democrático posible; solo quedan trincheras desde las cuales nos disparamos consignas que nadie escucha.

Quienes sufren con mayor crudeza los efectos de esta erosión silenciosa son nuestros jóvenes. Pensemos en esa nueva generación de costarricenses que se asoma a la vida adulta. Ellos no vivieron la guerra civil del 48, no presenciaron los grandes pactos sociales que fundaron la Segunda República, ni experimentaron los años dorados donde nuestras instituciones construyeron la clase media más sólida de Centroamérica. Su primera experiencia con la política nacional está ocurriendo hoy, a través de plataformas digitales que reducen el destino del país a un espectáculo de confrontación y entretenimiento fugaz.

Para un joven que se informa a través de videos de treinta segundos en su celular, la lentitud de los procesos democráticos resulta incomprensible y frustrante. Están creciendo en un entorno que les enseña que el diálogo es debilidad, que el que grita más fuerte es el que tiene la razón, y que destruir al adversario en público es una muestra de liderazgo. Corremos el gravísimo peligro de que esta generación herede un país donde la negociación política sea vista como una traición, y donde la destrucción de los contrapesos institucionales no les cause ninguna alarma, simplemente porque nadie les explicó a tiempo por qué esa lentitud y esos controles eran la única garantía de su propia libertad. No podemos juzgarlos ni culparlos; es nuestra responsabilidad como adultos, como padres y como abuelos, traducirles el valor incalculable de la paciencia democrática, no con regañones, sino con el ejemplo de nuestra propia medida.

Frente a esta gigantesca maquinaria de polarización, frente a la post-verdad que viaja en nuestros bolsillos y frente a la erosión de las instituciones que alguna vez nos cobijaron, podríamos sentir la tentación del desaliento. Podríamos pensar que el dique finalmente se ha roto y que la corriente de la historia nos arrastrará hacia el mismo abismo de autoritarismo en el que han caído, con tanto dolor, muchos de nuestros países hermanos. Pero ese fatalismo es, en sí mismo, la victoria final de quienes desean vernos divididos.

El destino de Costa Rica no está escrito en piedra, ni está condenado a repetir los fracasos de otras latitudes. La respuesta a este desafío monumental no pasa por responder al fuego con más fuego, ni por

construir una maquinaria de insultos que compita con la de quienes nos atacan.

Si combatimos la descalificación con descalificación, si respondemos a la burla con más desprecio, habremos perdido nuestra esencia y el país entero se convertirá en un campo de cenizas donde nadie podrá gobernar en paz.

El verdadero reto que tenemos frente a nosotros es, en el sentido más puro y profundo, el reto de la palabra. Recuperar la palabra significa tener la valentía cívica de hacer una pausa antes de reenviar un mensaje cargado de

odio, preguntándonos si estamos construyendo patria o destruyendo puentes. Significa tener el coraje de sentarnos a conversar con el vecino que votó distinto, reconociendo que detrás de su enojo hay una esperanza genuina por un país mejor, la misma esperanza que nos mueve a nosotros. Recuperar la palabra exige que los líderes, tanto los que gobiernan como los que hacen oposición, abandonen el micrófono del agravio y vuelvan a la mesa del entendimiento, entendiendo que gobernar para todos significa, irremediablemente, ceder.

Nuestra democracia no es un ente abstracto que vive en los pasillos de los ministerios o en las salas de los tribunales. Nuestra democracia respira en la forma en que nos tratamos los unos a los otros en la calle, en la fila del supermercado, en el chat de la familia. Defender nuestras instituciones no requiere de actos heroicos ni de grandes sacrificios épicos; requiere de la disciplina cotidiana de no ceder ante la ira colectiva. Requiere recordar que detrás de cada uniforme de policía, detrás del escritorio de cada maestro de escuela, detrás de cada enfermera y de cada técnico de nuestro Estado, hay un costarricense que también forma parte de nuestra gran familia ciudadana.

El deterioro ha sido silencioso, es cierto, pero la restauración de nuestro pacto social puede comenzar hoy mismo, con el sonido humilde de una conversación dispuesta a escuchar. El agua de la corriente es fuerte y amenaza nuestros cimientos, pero el dique de nuestra institucionalidad no está hecho de concreto, está hecho de la voluntad inquebrantable de

cada ciudadano. Si logramos rescatar el diálogo constructivo del pantano de la polarización, si logramos devolverle a la palabra su poder para unir en lugar de herir, Costa Rica no solo sobrevivirá a esta tormenta, sino que saldrá de ella con una democracia más madura, más consciente y profundamente más humana.

Capítulo 2

EL COLAPSO DE LOS MEDIADORES

Existe una profunda soledad en el ciudadano de nuestro tiempo. Cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades, cuando esperamos bajo la lluvia en una parada de autobús, o cuando revisamos con angustia el recibo de la luz al final del mes, a menudo sentimos que estamos librando la batalla de la vida completamente solos. El Estado, esa maquinaria gigantesca que debería protegernos, se percibe con demasiada frecuencia como una entidad lejana, fría e inalcanzable. Entre el individuo y el poder supremo del gobierno hay una distancia abismal, un vacío que el ser humano, por su propia naturaleza frágil y comunitaria, no fue diseñado para transitar en solitario.



Para que una sociedad viva en paz, para que el peso del Estado no aplaste al individuo y para que el grito del ciudadano no se pierda en el viento, la civilización inventó los puentes. A estos puentes, en la arquitectura de una democracia, los llamamos cuerpos intermedios o mediadores sociales. Son los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos y las asociaciones comunales. Durante gran parte de nuestra historia costarricense, estas instituciones funcionaron como el gran tejido protector de nuestra nación. Actuaban como los amortiguadores de un vehículo: cuando la sociedad atravesaba un terreno lleno de baches, desigualdades y crisis económicas, estos cuerpos intermedios absorbían el golpe, canalizando la frustración y transformándola en diálogo antes de que el malestar ciudadano se convirtiera en confrontación directa con el poder de turno.

Pero hoy, esos amortiguadores están rotos. Y cuando un vehículo pierde su capacidad de amortiguar, cada piedra en el camino amenaza con quebrar los huesos de sus pasajeros. Para comprender la vulnerabilidad en la que se encuentra Costa Rica en esta tercera década del siglo veintiuno, debemos observar con valentía cómo permitimos que se desmoronaran las columnas que sostenían el techo de nuestra convivencia cívica, empezando por el colapso histórico de nuestros partidos políticos.

Hubo un tiempo en que pertenecer a un partido político en Costa Rica era mucho más que emitir un voto cada cuatro años; era una forma de identidad, una extensión de la familia y de la comunidad. Las dos grandes corrientes políticas que nacieron de las cenizas de la guerra civil de 1948, la socialdemocracia y el socialcristianismo, estructuraron la vida de nuestros abuelos y nuestros padres. Esos partidos, con todas las fallas humanas que indudablemente tuvieron, compartían algo invaluable: una misma cultura política basada en el respeto por el adversario, en la negociación de las cúpulas y en la construcción de mayorías a través de acuerdos pacientes.

En aquella Costa Rica, el partido político era un mediador vivo. Si un barrio necesitaba una escuela, si un grupo de agricultores requería un camino vecinal, acudían al dirigente local, quien llevaba esa voz a la asamblea, y de la asamblea al ministerio. Existía una escalera por la

cual el ciudadano común podía subir sus sueños y sus urgencias hasta las más altas esferas del poder. Ese sistema bipartidista funcionó como un milagroso estabilizador que le ahorró a nuestra patria los golpes de Estado, las dictaduras militares y los derramamientos de sangre que desgarraron a nuestros hermanos centroamericanos durante décadas.

Sin embargo, como ocurre con las grandes casonas de adobe que no reciben mantenimiento, las grietas comenzaron a aparecer. Con el paso de los años, las cúpulas de estos partidos históricos comenzaron a padecer de una ceguera gradual. Poco a poco, fueron sustituyendo la sensibilidad de la calle por la frialdad de las hojas de cálculo. Se volvieron tecnócratas, gestores de la administración pública que hablaban un idioma incomprensible para el trabajador, para la costurera y para el peón agrícola. La ambigüedad tecnocrática se apoderó de sus discursos; dejaron de proponer grandes visiones de país para limitarse a administrar lo existente, sin resolver los problemas de fondo que carcomían la esperanza de las nuevas generaciones: la falta de empleo digno, la violencia en los barrios y la desigualdad hiriente que separa al centro del país de nuestras zonas costeras y fronterizas.

El ciudadano, al verse ignorado, comenzó a sentir que aquellos partidos ya no eran su casa. Sintió, con un dolor silencioso pero profundo, que las dos grandes fuerzas tradicionales se habían vuelto intercambiables, una especie de club cerrado donde los rostros cambiaban pero las soluciones nunca llegaban al humilde plato de su mesa. En un intento desesperado por encontrar un nuevo hogar político, el pueblo costarricense apostó en las últimas décadas por promesas de renovación, partidos emergentes que prometieron romper el viejo molde y gobernar con una ética distinta. Pero esas promesas, tras alcanzar la cumbre del poder, también tropezaron con sus propias contradicciones, terminando sus ciclos vitales en un desgaste acelerado y desapareciendo de la relevancia con la misma rapidez con la que alguna vez despertaron ilusiones.

Esta profunda decepción acumulada, esta orfandad cívica, fue preparando el terreno para la ruptura que presenciamos desde las elecciones de 2022 y que terminó de consolidarse en el actual ciclo político de 2026. Lo que los

libros de historia registrarán no fue simplemente un cambio de gobierno, sino la ruina literal y absoluta del sistema de partidos que conocimos. Aquellas maquinarias históricas que alguna vez movieron el alma nacional quedaron reducidas a cenizas estadísticas; unas sobreviviendo con bancadas minúsculas, apenas simbólicas, y otras borradas por completo del mapa legislativo. El centro político, ese espacio donde tradicionalmente se tejían los grandes acuerdos nacionales, colapsó sobre su propio peso, dejando un vacío inmenso en el corazón de nuestra democracia.

La naturaleza humana aborrece el vacío. Cuando el centro se desmorona y pierde su credibilidad, cuando las voces moderadas son percibidas como ineficaces o cómplices del estancamiento, el ciudadano asustado y frustrado migra inevitablemente hacia los extremos. Y eso es exactamente lo que presenciamos hoy. Por un lado, vimos el ascenso avasallador de un nuevo vehículo oficialista que, sin historia previa, capturó la mayoría del electorado prometiendo refundar el Estado con un estilo confrontativo. Por el otro lado, vimos el crecimiento y la consolidación de la izquierda tradicional, que se erigió como la principal fuerza de oposición dispuesta a resistir, según sus propias palabras, desde la trinchera de la calle.

No debemos juzgar con dureza al ciudadano que ha migrado hacia estos polos. Su comportamiento no es el de un extremista irracional, es el de un ser humano sediento de certezas. La gente, cansada de discursos grises y de políticos que nunca dicen nada claro para no ofender a nadie, comenzó a premiar a aquellos líderes que les ofrecían relatos combativos, respuestas sencillas y villanos reconocibles.

Pero aquí es donde debemos encender la luz de alerta para nuestra convivencia ciudadana. Una democracia fragmentada en polos opuestos, sin un centro fuerte que sirva de puente, es una sociedad condenada a vivir en guerra permanente.

*Cuando el moderado te ignora,
el radical que te presta atención
se convierte rápidamente en tu
salvador.*

Cuando los partidos políticos dejan de existir como mediadores estructurados, el terreno queda dolorosamente despejado para que la política se reduzca a una relación casi mística y directa entre un líder solitario y las masas. Ya no hay negociación pausada; ya no hay espacios intermedios donde limar asperezas. Solo queda el mandato directo, el aplauso incondicional de un bando y el rechazo absoluto del otro.

Al perder nuestros partidos políticos, perdimos mucho más que unas siglas o unas banderas de colores; perdimos el taller donde se fabricaba la paciencia democrática. La historia de nuestro desarrollo nos enseña que las grandes conquistas sociales no se lograron gritándole al adversario desde la otra acera, sino sentándose con él en la misma mesa, tragando frustraciones y cediendo partes de la propia verdad para construir una verdad más grande que cobijara a todos.

Hoy, ese ciudadano huérfano de representación política busca desesperadamente a quién aferrarse. Y al no encontrar cobijo en la política tradicional, su mirada, cargada de necesidad y de búsqueda de sentido, se ha volcado hacia otros actores sociales y morales que también han sufrido sus propias transformaciones silenciosas. Porque la crisis de representación en Costa Rica no se detuvo en las urnas; penetró también en el alma espiritual de nuestras comunidades y en los lugares donde nos ganamos el pan de cada día, erosionando los otros dos grandes faros que alguna vez nos guiaron en medio de la oscuridad.

Cuando el ciudadano descubre que la casa política que habitó durante décadas tiene el techo roto y las puertas cerradas, su instinto de supervivencia lo empuja a buscar refugio en otro lugar. El ser humano no tolera vivir a la intemperie; si el Estado le falla, si los partidos políticos lo ignoran y si el modelo económico lo excluye, buscará desesperadamente una comunidad que lo escuche, que lo abrace y que le devuelva el sentido de pertenencia. Y en la Costa Rica profunda, ese refugio histórico siempre ha estado ligado a lo sagrado, al ámbito de la fe y la moral compartida.

Para entender la magnitud del vacío en el que nos encontramos hoy, debemos detenernos a observar el desplazamiento silencioso que ha

ocurrido en el alma espiritual de nuestra nación. Desde la propia fundación de la Segunda República, la cultura pública costarricense descansó sobre un pilar que, por ser tan evidente, rara vez cuestionábamos: la Iglesia Católica. Su presencia no se limitaba a un artículo en la Constitución; estaba inscrita en la geografía misma de nuestra identidad. No hay pueblo, por pequeño que sea, que no se haya construido alrededor de la misma plaza, con la escuela a un costado y el templo católico al frente.

Durante la mayor parte del siglo veinte, esa institución funcionó como el gran paraguas moral bajo el cual se cobijaba el país entero. El sacerdote del pueblo no era solamente un guía espiritual; era el consejero de las familias, el mediador en las disputas vecinales y el interlocutor respetado ante el alcalde o el diputado. A nivel nacional, la jerarquía católica tenía el poder milagroso de convocar a sectores diametralmente opuestos — empresarios y trabajadores, políticos de izquierda y de derecha— y sentarlos a dialogar bajo un lenguaje simbólico que todos respetaban. Era, en esencia, nuestro árbitro moral de última instancia. Cuando la política fracasaba y la tensión social amenazaba con desbordarse, una palabra de prudencia desde el arzobispado solía ser suficiente para calmar las aguas y devolver la cordura al debate público.

Sin embargo, ese faro unificador comenzó a perder intensidad. El desgaste de los años, los tropiezos humanos de la institución y los profundos cambios culturales de una sociedad cada vez más moderna y diversa, fueron alejando a las nuevas generaciones de los atrios. Las cifras nos cuentan una historia de éxodo: en poco más de una década, la institución tradicional perdió a una quinta parte de sus feligreses. Pero el costarricense no dejó de creer en Dios; lo que ocurrió fue que la fe, al igual que la esperanza política, comenzó a migrar buscando lugares donde sintiera más calor humano y menos distancia institucional.

Mientras los grandes templos del centro del país veían disminuir su asistencia, un fenómeno extraordinario estaba floreciendo en los márgenes de nuestra sociedad. En las zonas rurales más alejadas, en las costas olvidadas y en los anillos de pobreza que rodean a la Gran Área Metropolitana, comenzaron a multiplicarse por miles las iglesias

evangélicas, particularmente en su rama pentecostal. Para el analista frío que solo mira estadísticas desde una oficina en San José, esto podría parecer un simple cambio de preferencias religiosas. Pero si caminamos por los barrios donde el asfalto no llega y donde la patrulla de policía rara vez entra, comprenderemos que se trata de un fenómeno de supervivencia humana profundamente conmovedor.

En esos territorios donde el Estado costarricense ha brillado por su dolorosa ausencia —donde no hay suficientes clínicas, donde los programas sociales no alcanzan y donde el narcotráfico acecha a los jóvenes en cada esquina—, la pequeña iglesia evangélica de barrio llenó el vacío. El pastor local no es un burócrata lejano; es el vecino que visita al enfermo a la medianoche, es la congregación que reúne víveres para la madre soltera que se quedó sin trabajo, es el grupo de apoyo que abraza al joven atrapado en las garras de la adicción y le ofrece una segunda oportunidad cuando la sociedad entera ya lo había desahuciado.

Ese trabajo de proximidad, de sudar las angustias cotidianas junto al más humilde, es la clave que explica por qué este movimiento religioso creció con tanta fuerza. El ciudadano marginado encontró en esos templos sencillos, a menudo contruidos con latas y madera donada, exactamente lo que los partidos políticos tradicionales dejaron de darle: una red de protección, una familia extendida y la dignidad de ser llamado por su nombre.

Como era natural, esa inmensa fuerza comunitaria y moral no tardaría en traducirse en fuerza política. Una congregación que está unida por la fe y por la solidaridad cotidiana, fácilmente se convierte en un bloque electoral disciplinado y leal. Lo vimos con claridad desde las elecciones de 2018, cuando banderas explícitamente confesionales sacudieron el tablero nacional, movilizandoo a cientos de miles de ciudadanos en defensa de sus valores más íntimos. Aquellas agrupaciones demostraron que el voto evangélico ya no era un actor secundario, sino una fuerza capaz de decidir elecciones en provincias enteras, especialmente en las zonas periféricas del país.

Pero el verdadero drama para nuestro equilibrio democrático, la vuelta de tuerca que ha dejado a nuestra sociedad aún más desprotegida frente a la polarización, ocurrió en el ciclo político que atravesamos en 2026. El nuevo modelo populista, caracterizado por su pragmatismo implacable, comprendió que no necesitaba competir contra esa inmensa fuerza religiosa; le bastaba con absorberla.

En un movimiento estratégico que desdibujó las fronteras entre la fe y el cálculo electoral, vimos cómo liderazgos pastorales y voces del sector conservador fueron incorporados directamente a las filas del oficialismo. El discurso de la defensa de la familia y la moral, que durante años había tenido un espacio propio e independiente en el debate nacional, terminó siendo integrado como un engranaje más dentro de la maquinaria de un proyecto populista de naturaleza muy distinta. A cambio de espacios concretos de poder y promesas de influencia, buena parte de ese movimiento diluyó su propia identidad para cobijarse bajo la sombra del nuevo liderazgo personalista.

Aquí debemos detenernos y hacer una pausa reflexiva, no para emitir condenas sobre la fe de nadie, sino para lamentar lo que hemos perdido como país en esta transacción. Cuando la fe abraza el poder político de turno por conveniencia electoral, corre el gravísimo riesgo de perder su autoridad moral a largo plazo. Una iglesia que se convierte en apéndice de un partido político o de un líder confrontativo, pierde su capacidad de actuar como faro independiente. Si el día de mañana los intereses del gobierno dejan de coincidir con los de la congregación, o si el gobierno comete injusticias que claman al cielo, ese liderazgo religioso que entregó su autonomía se encontrará atado de manos, incapaz de alzar una voz profética libre de compromisos.

Y así, tras este desplazamiento y esta absorción política, Costa Rica se encuentra hoy frente a una realidad desoladora. Las encuestas de confianza institucional, que son un espejo de nuestra alma colectiva, nos muestran que ni la Iglesia Católica ni el movimiento evangélico gozan ya del prestigio indiscutido que alguna vez tuvieron para mediar en nuestros conflictos. No se trata de que una religión haya derrotado a la otra; la

verdadera tragedia es que la autoridad moral misma se ha encogido.

Hemos perdido a los grandes árbitros. Si mañana estallara una crisis social profunda que paralizara nuestras calles, ¿a quién acudiríamos para que sirviera de garante en una mesa de negociación? Al colapsar los partidos tradicionales y al debilitarse o politizarse nuestras instituciones espirituales, el terreno ha quedado atterradoramente despejado. Y en un terreno sin mediadores, sin puentes y sin árbitros morales reconocidos por todos, el líder populista no encuentra ninguna resistencia institucional sólida entre su voluntad y el pueblo.

El ciudadano moderno costarricense se encuentra hoy en una soledad doble: huérfano de representación política que le asegure su pan material, y huérfano de un faro moral independiente que lo guíe en medio de la tormenta. Pero la vida de una sociedad es compleja, y el ser humano no solo se organiza para orar o para votar; también se organiza para trabajar. Fue en el ámbito laboral donde existió nuestro tercer gran mediador histórico, aquel que tenía la fuerza para equilibrar la balanza entre el capital y la necesidad: el movimiento sindical. Sin embargo, al igual que los partidos y las iglesias, este escudo social también sufriría, víctima de sus propios errores y de una economía implacable, un desgaste que terminaría por dejar al trabajador costarricense más vulnerable que nunca.

El trabajo es mucho más que el medio a través del cual nos ganamos el sustento; es el espacio donde el ser humano forja su dignidad, donde aporta al mundo y donde construye el futuro de sus hijos. A lo largo de la historia, el trabajador siempre supo que frente a la inmensa maquinaria del capital o frente a la autoridad del Estado, su voz individual era apenas un susurro inaudible. Un peón agrícola, una costurera o un oficinista, por sí solos, no tenían la fuerza para exigir un salario justo o condiciones humanas de labor. Fue a partir de esa necesidad vital de protección mutua que nacieron los sindicatos, el tercer gran pilar de nuestra mediación social.

En la Costa Rica que heredamos de las grandes reformas de los años cuarenta, el movimiento sindical, apoyado en las Garantías Sociales, se

convirtió en un escudo protector formidable. Existía un pacto no escrito pero profundamente respetado: el trabajador daba su sudor para levantar el país, y a cambio, el Estado y la sociedad le garantizaban que no sería explotado. Los sindicatos y las organizaciones de base fueron, durante la segunda mitad del siglo veinte, protagonistas indiscutibles de nuestros grandes acuerdos nacionales. Tenían la capacidad real de sentarse en la mesa con presidentes y empresarios, y contaban con la fuerza disuasiva necesaria para frenar cualquier medida que amenazara el bienestar de la mayoría trabajadora. Eran, con todas sus virtudes y defectos, un contrapeso social indispensable frente a los abusos del poder.

Sin embargo, así como observamos el desgaste en los partidos políticos y en las iglesias, el escudo sindical también comenzó a oxidarse. Y, con dolor debemos admitirlo, gran parte de ese óxido se generó desde adentro. Con el paso de las décadas, ciertas cúpulas del movimiento laboral —particularmente aquellas vinculadas a instituciones del Estado— comenzaron a perder el contacto con el asfalto, con la calle y con el dolor del trabajador de a pie. La lucha justa por los derechos de las mayorías se fue transformando, a los ojos de la ciudadanía, en la defensa obstinada de privilegios corporativos, convenciones colectivas desproporcionadas y beneficios que resultaban incomprensibles para el ciudadano común que batallaba por sobrevivir en la empresa privada.

Esa desconexión tuvo un precio altísimo. El sindicato dejó de ser visto como el defensor de los pobres y pasó a ser percibido, por un sector amplio de la población, como una élite más que cuidaba su propia parcela. Las encuestas de confianza institucional que nos alertaron sobre el descrédito de los políticos, también revelaron una realidad amarga para los gremios: la confianza ciudadana en los sindicatos se desplomó, ubicándolos entre las instituciones peor valoradas del país. Y cuando un escudo pierde la simpatía del pueblo al que jura defender, se vuelve sumamente vulnerable ante cualquier ataque del poder político.

Ese ataque llegó, y lo hizo combinando la fuerza de la ley con la fuerza de una economía cambiante. En el plano legal, las grandes huelgas del año 2018 abrieron la puerta a una reforma que cambiaría para siempre

las reglas del juego. Argumentando la necesidad de proteger los servicios esenciales y evitar los abusos, se aprobó una legislación que restringió severamente el derecho a la huelga, prohibiéndola en sectores vitales como la salud y la seguridad, y estableciendo la rebaja salarial automática para quienes participaran en movimientos declarados ilegales por los tribunales.

Para el trabajador, el mensaje fue paralizante. Ir a una huelga ya no significaba marchar un par de días para luego sentarse a negociar; ahora significaba poner en riesgo el plato de comida de sus hijos al final de la quincena. El resultado fue inmediato y dramático: la capacidad de movilización del sindicalismo costarricense se redujo casi a cero. Aquel actor social que en décadas pasadas podía paralizar el país para forzar un diálogo directo con el gobierno, quedó silenciado, despojado de su principal herramienta de presión y atado de manos por el miedo a la sanción económica.

Pero la estocada final al movimiento sindical no vino de los tribunales ni de la Asamblea Legislativa; vino de la implacable transformación de nuestra economía. Hoy, al mirar nuestras calles, vemos a una nueva clase trabajadora que no encaja en las viejas leyes laborales. Pensemos en el joven que cruza la ciudad en motocicleta bajo aguaceros torrenciales para entregar comida a domicilio. Pensemos en la mujer emprendedora que vende manualidades por internet para sostener a su familia, o en el profesional independiente que enlaza contratos temporales sin ninguna seguridad social.

Esta es la Costa Rica de la economía informal, una realidad que atrapa a cientos de miles de nuestros compatriotas, representando a cerca del cuarenta por ciento de nuestra fuerza laboral. Para todos ellos, el concepto de un sindicato es una fantasía de libros de historia. No tienen un patrono visible al cual reclamarle, no tienen aguinaldo, no conocen las vacaciones pagadas y, por supuesto, no tienen la más mínima posibilidad de sindicalizarse. Un movimiento sindical diseñado para proteger al empleado de planilla fija en una institución pública tiene, estructuralmente, muy poco que ofrecerle al ciudadano que se juega la

vida día a día en la economía informal.

Es aquí, en este escenario de desamparo absoluto, donde confluyen los tres grandes derrumbes que hemos analizado en este capítulo. Detengámonos a contemplar el paisaje humano de la Costa Rica contemporánea. Tenemos frente a nosotros a un ciudadano moderno que está trabajando más duro que nunca, muchas veces en condiciones precarias, y que se encuentra profundamente solo. Ya no tiene un partido político local que escuche sus necesidades comunitarias; ya no cuenta con una autoridad moral o espiritual unificadora que medie por él en los momentos de crisis nacional; y ya no tiene un gremio o un sindicato que lo defienda frente a los abusos del sistema económico.

Esta “orfandad ciudadana” es la verdadera tragedia de nuestro tiempo. Al vaciarse las instituciones intermedias, al romperse los amortiguadores de nuestra sociedad, hemos dejado al individuo completamente expuesto frente al abrumador poder del Estado y frente a la seducción de los liderazgos personalistas. Cuando el ciudadano grita y descubre que nadie a su alrededor lo está defendiendo, su desesperación lo impulsa a entregarle toda su confianza a la única persona que, desde una pantalla, le promete acabar con sus problemas usando mano dura y decisiones implacables.

Al populismo no le estorba esta soledad; al contrario, se alimenta de ella. Un liderazgo que busca concentrar el poder necesita imperiosamente que no existan asociaciones fuertes, gremios combativos, ni comunidades organizadas. Necesita que el ciudadano dependa única y exclusivamente de la voluntad del líder. Por eso, el colapso de nuestros mediadores sociales no es un simple accidente sociológico; es el terreno perfectamente allanado para que el autoritarismo eche raíces, presentándose no como un tirano, sino como el supuesto padre protector de una sociedad que ha olvidado cómo protegerse a sí misma.

El inmenso reto que se asoma ante nosotros no es intentar resucitar los partidos del pasado, ni obligar a las nuevas generaciones a asistir a templos que ya no les hablan, ni forzar un modelo sindical que no responde a la economía del siglo veintiuno. El pasado, con todas sus glorias, ya no volverá.

Una democracia no puede sobrevivir si está compuesta únicamente por millones de individuos aislados, asustados y conectados solo a través del odio en sus teléfonos celulares. Necesitamos volver a encontrarnos. Necesitamos volver a confiar en el vecino, en el compañero de trabajo y en la capacidad creadora de la comunidad organizada.

Esa soledad física y emocional del ciudadano, sin embargo, pronto encontraría un falso sustituto.

Al perder las plazas, los sindicatos y las asambleas, el costarricense buscó desesperadamente un nuevo lugar donde alzar su voz y sentirse parte de algo más grande.

Y ese nuevo lugar no estaba construido con ladrillos, sino con algoritmos. Entramos, sin darnos cuenta, en un ecosistema donde gobernar y convivir ya no requería mediadores humanos. Nos sumergimos en el océano de las redes sociales, un mundo que nos prometió conectarnos con el mundo entero, pero que terminó por encerrarnos en jaulas de cristal donde la post-verdad y el ruido ensordecedor terminarían por asfixiar nuestra capacidad de dialogar. Ese es el abismo que debemos explorar a continuación.

El verdadero reto es cómo vamos a inventar nuevas formas de estar juntos. ¿Cómo vamos a reconstruir el tejido de nuestras comunidades? ¿Cómo crearemos nuevas asociaciones vecinales, nuevas redes de apoyo mutuo y nuevos espacios de diálogo que devuelvan al ciudadano el calor de la compañía cívica?

Mientras sigamos siendo islas solitarias frente al vendaval del poder, seremos presas fáciles de quienes prometen salvarnos a cambio de nuestra libertad.

Capítulo 3

GOBERNAR SIN FILTROS

Cuando las puertas de los viejos partidos políticos se cerraron, cuando las plazas sindicales se vaciaron y cuando las iglesias dejaron de ser el único punto de encuentro de nuestras comunidades, el ciudadano costarricense no se quedó en silencio. El ser humano, por su propia naturaleza social, tiene una necesidad irreprimible de expresarse, de buscar a sus pares y de tratar de entender el mundo que le rodea. Al quedar huérfanos de nuestros espacios físicos tradicionales, migramos masivamente hacia una nueva plaza pública, una que no está construida con adoquines ni rodeada de bancas bajo la sombra de los árboles, sino que brilla intensamente en la palma de nuestras manos: la pantalla de nuestros teléfonos celulares.



Al principio, esta gran migración digital nos llenó de una esperanza deslumbrante. Soñamos con que el internet y las redes sociales serían la herramienta democratizadora definitiva. Creímos que, al darle un micrófono a cada ciudadano, las injusticias quedarían expuestas al instante, la sabiduría popular se multiplicaría y los gobernantes tendrían que escuchar, por fin, la voz genuina del pueblo sin distorsiones. Era una promesa hermosa: la tecnología nos permitiría construir una aldea global donde todos seríamos iguales y donde la buena voluntad viajaría de un extremo a otro del país en cuestión de segundos.

Pero la realidad, como suele ocurrir con las promesas desmedidas, resultó ser mucho más compleja y oscura. Descubrimos, con un asombro que pronto se transformaría en angustia, que esta nueva plaza pública no era un espacio neutral. Detrás de nuestras pantallas no hay un parque abierto donde todos podemos conversar en paz; hay una arquitectura invisible, una maquinaria matemática diseñada por grandes corporaciones tecnológicas con un único propósito: mantener nuestros ojos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Y quienes diseñaron esta maquinaria descubrieron un secreto perturbador sobre la psicología humana: nada atrapa nuestra atención con tanta fuerza, ni nos hace reaccionar tan rápido, como la indignación, el miedo y la rabia.

En este nuevo ecosistema, el algoritmo —esa mano invisible que decide qué publicaciones vemos y cuáles nos oculta— actúa como un editor perverso. Si un ciudadano escribe un mensaje reflexivo, lleno de matices, invitando a la calma y proponiendo una solución técnica a un problema del país, ese mensaje viajará lentamente y morirá en el olvido, porque la calma no genera adicción. En cambio, si ese mismo ciudadano, o un político, lanza un insulto fulminante, una acusación sin pruebas o un grito de guerra contra un supuesto enemigo, la maquinaria digital lo premiará, multiplicando su alcance y llevándolo a las pantallas de cientos de miles de personas en cuestión de minutos.

El odio y la burla viajan en ascensor, mientras que la verdad y la prudencia suben por las escaleras.

Para el liderazgo político de corte populista, este entorno digital no es un problema; es un regalo caído del cielo, la herramienta perfecta que habían estado esperando durante décadas. Históricamente, cualquier presidente o aspirante al poder en Costa Rica tenía que atravesar una serie de filtros inevitables para que su mensaje llegara a la ciudadanía. Tenía que sentarse frente a periodistas incisivos que cuestionaban sus datos; tenía que debatir con diputados de la oposición en el plenario legislativo; tenía que escuchar a las cámaras empresariales y a los representantes de los trabajadores. Cada uno de estos filtros imponía disciplina. El político sabía que una mentira flagrante o una promesa absurda sería rápidamente desmentida en el periódico de la mañana siguiente. El líder no podía gobernar desde un monólogo; estaba obligado a dialogar con la realidad.

Pero las redes sociales desmontaron, pieza por pieza, ese sistema de filtros republicanos. Hoy, quien ejerce el poder puede construir, sostener y defender su relato sin necesidad de pasar jamás por una entrevista verdaderamente exigente, sin someterse a una réplica en igualdad de condiciones y esquivando cualquier cuestionamiento técnico. Puede encender la cámara de su teléfono o transmitir una conferencia en vivo y hablarle directamente a millones de personas, dictando el tono de la conversación, eligiendo los temas a su antojo y bloqueando o ignorando a cualquier interlocutor que se atreva a contradecirlo.

A esto le llamamos gobernar sin filtros. Y aunque a simple vista pueda parecer un ejercicio de cercanía y transparencia con el pueblo, esconde una trampa mortal para la democracia. Cuando el gobernante se comunica directamente con las masas a través de una pantalla que premia la indignación, el mensaje político deja de buscar la comprensión ciudadana y se enfoca casi exclusivamente en la movilización emocional. El objetivo ya no es explicar cómo se va a resolver la crisis de las pensiones o cómo se financiará un puente, porque esos temas son áridos y aburridos. El objetivo pasa a ser, semana a semana, señalar a un nuevo culpable, ridiculizar a un adversario o declarar una nueva guerra imaginaria contra quienes se atreven a pensar distinto.

Esta dinámica crea una asimetría pavorosa, una lucha profundamente desigual entre el poder político y quienes tienen el mandato constitucional de fiscalizarlo. Pongámonos por un momento en los zapatos de nuestras instituciones técnicas. Pensemos en un magistrado de la Sala Constitucional, en la Contralora General de la República o en un investigador de nuestras universidades públicas. Por la naturaleza misma de su investidura y de su deber con el país, ellos están obligados a ser rigurosos, prudentes y comedidos. Su trabajo requiere analizar cientos de páginas, contrastar leyes, hacer cálculos matemáticos y emitir informes técnicos basados en hechos comprobables.

¿Cómo puede un documento técnico de cien páginas competir en la mente del ciudadano contra un video editado de treinta segundos, lleno de música dramática, donde un líder carismático acusa a esa institución de ser enemiga del progreso? La respuesta es dolorosa: no puede competir. La rendición de cuentas tradicional es, por definición, lenta, técnica y a menudo aburrida para el gran público. No está diseñada para volverse viral. Por el contrario, el ataque gubernamental está optimizado milimétricamente para encender las pasiones. Las redes sociales alteran por completo la correlación de fuerzas: le otorgan un megáfono ensordecedor a quien tiene el poder de emocionar, y le apagan el micrófono a quien tiene el deber de controlar.

El resultado de esta asimetría es que nuestras instituciones de control se van quedando solas, arrinconadas no por la falta de argumentos legales, sino por su incapacidad estructural para ganar el concurso de popularidad en el que se ha convertido la política digital. El ciudadano, bombardeado diariamente por estos mensajes de confrontación, comienza a impacientarse con los tiempos que exige el Estado de derecho. Exige resultados inmediatos, exige que los problemas se resuelvan con la misma velocidad con la que desliza el dedo sobre la pantalla de su teléfono. Y cuando las instituciones le recuerdan que la ley exige procesos, revisiones y garantías, ese ciudadano, azuzado por el discurso oficial, termina viendo a la ley no como su protectora, sino como un estorbo burocrático que debe ser eliminado.

Esta transformación de la política en un espectáculo continuo de entretenimiento y confrontación nos roba algo inmensamente valioso: nuestra capacidad de ser ciudadanos activos.

Cuando la política se consume a través de una pantalla, nos convertimos en simples espectadores de un partido de fútbol, limitándonos a animar a nuestro equipo y abuchear al contrario. Creemos que estamos participando en la vida cívica porque le damos “me gusta” a una publicación o porque compartimos un meme burlón sobre el bando rival, pero en realidad, nos estamos alejando cada vez más del verdadero ejercicio democrático. La participación real mancha las manos, exige tiempo, requiere escuchar al que piensa distinto y demanda la paciencia de construir acuerdos imperfectos. El activismo de sillón y pantalla, en cambio, solo exige indignación instantánea.

Al convertirnos en espectadores cautivos de este circo digital, la barrera que separa la verdad de la mentira comienza a desdibujarse. Si el objetivo primordial de la comunicación política ya no es informar sobre los actos de gobierno, sino ganar la batalla diaria por la atención y la emoción del electorado, el hecho verificable pasa a ser un estorbo. El dato exacto se vuelve irrelevante frente a la historia que conmueve. Y es precisamente en este caldo de cultivo, donde la ira viaja más rápido que la razón y donde el gobernante no tiene filtros que lo detengan, donde nace el fenómeno más corrosivo de nuestra época, aquel que amenaza con disolver los cimientos mismos de nuestra convivencia: el reino de la post-verdad.

Un reino sombrío donde ya no importa lo que realmente sucedió, sino lo que la mayoría esté dispuesta a creer; donde la historia se reescribe todos los días al gusto de quien tiene el micrófono más grande. Hacia ese abismo de la desinformación íntima, que viaja ya no solo en las redes públicas, sino en el silencio de nuestros propios hogares, debemos dirigir ahora nuestra mirada.

A lo largo de los siglos, la humanidad ha convivido con la mentira. En el terreno de la política, la mentira tradicional siempre fue una herramienta lamentable pero predecible: el gobernante que ocultaba un error, el

candidato que exageraba sus virtudes o el funcionario que negaba un acto de corrupción. Sin embargo, por más destructiva que fuera, aquella mentira antigua guardaba un paradójico respeto por la verdad. Quien mentía sabía que estaba ocultando un hecho real, y su mayor temor era ser descubierto por la prensa, por los tribunales o por la historia. Había un pacto silencioso en la sociedad: todos aceptábamos que los hechos existían, que eran comprobables y que, tarde o temprano, la realidad terminaría imponiéndose.

Ese pacto se ha roto. Lo que hoy se esparce como una niebla espesa sobre Costa Rica y sobre gran parte del mundo democrático no es la mentira tradicional; es algo mucho más profundo y corrosivo a lo que venimos llamando la “post-verdad”. Para comprender el peligro que encierra esta palabra, debemos entender que en el régimen de la post-verdad, la verdad no se oculta; simplemente deja de importar. Lo relevante ya no es si una afirmación cuenta con pruebas, si los números cuadran o si la ley lo permite. Lo único que verdaderamente importa es si esa afirmación logra conectar con nuestras emociones, si valida nuestros prejuicios o si nos hace sentir parte de una tribu de indignados.

En este nuevo orden de las cosas, el hecho verificable ha sido despojado de su investidura. Ha dejado de ser el gran árbitro del debate público. Imaginemos un partido de fútbol donde los jugadores, al escuchar el silbato del árbitro sancionando una falta, deciden por mayoría de votos que el árbitro no tiene autoridad, que el reglamento es un invento de sus enemigos y que el partido continuará bajo sus propias reglas. El juego se convertiría, en cuestión de minutos, en una batalla campal. Eso es exactamente lo que le ocurre a una democracia cuando el Estado de derecho es sustituido por la voluntad emocional de la multitud.

Lo vemos a diario en la relación entre el poder político y las instituciones técnicas. Cuando un organismo de control, tras meses de estudio riguroso, publica un informe señalando que una obra gubernamental presenta irregularidades o que un decreto roza la inconstitucionalidad, la respuesta natural en una democracia sana sería discutir los argumentos técnicos. El gobierno presentaría sus propios estudios, los expertos debatirían, y la

ciudadanía escucharía ambas partes para formar su criterio. Pero en el ecosistema de la post-verdad, ese debate sereno es aniquilado antes de nacer. La respuesta inmediata desde el poder no es refutar el dato, sino destruir moralmente a la fuente que lo emite. Se acusa al contralor, al magistrado o al periodista de ser un traidor, un aliado de los corruptos del pasado, un privilegiado que no quiere que el país avance.

El movimiento es de una eficacia aterradora: al sustituir la discusión sobre el contenido por el ataque personal a la fuente, se logra que el ciudadano deje de mirar el problema real y enfoque toda su ira en el mensajero. Un dato técnico complejo sobre la deuda pública, sobre la inflación o sobre el desempleo rara vez puede competir contra una frase hiriente, corta y diseñada para despertar el enojo colectivo. Así, la post-verdad no necesita ganar el debate con argumentos; le basta con lograr que buena parte de la población llegue a la triste conclusión de que la verdad no existe, de que todo es una manipulación y de que ninguna institución es digna de confianza.

Pero sería un error imperdonable creer que este veneno viaja únicamente a través de los discursos oficiales o en las grandes plazas públicas de las redes sociales abiertas. El vector más letal de la desinformación en nuestra Costa Rica contemporánea opera en el silencio de lo cotidiano, lejos de los micrófonos y de las cámaras de televisión. Ha anidado en el espacio más sagrado que nos queda: la intimidad de nuestras conversaciones privadas, específicamente en los grupos familiares y vecinales de mensajería instantánea como WhatsApp.

Pensemos en la dinámica de nuestras familias. Todos tenemos ese grupo de chat donde compartimos las fotografías de los nietos, los saludos de buenos días, las recetas de cocina y las oraciones por el pariente enfermo. Es un espacio construido sobre décadas de amor, de confianza incondicional y de cuidado mutuo. Y es precisamente esa confianza la que la maquinaria de la post-verdad secuestra y utiliza como un caballo de Troya.

Un domingo por la mañana, en medio de los mensajes de cariño familiar, llega un audio reenviado. La voz suena agitada, urgente, afirmando con

absoluta seguridad que un grupo de diputados está planeando en secreto robarse las pensiones, que un magistrado acaba de recibir un soborno millonario, o que una ley perversa obligará a cerrar las iglesias. El mensaje, a menudo acompañado de fotografías recortadas o de documentos fuera de contexto, no es enviado por un político perverso ni por un troll anónimo de internet; es enviado por nuestra madre, por un hermano mayor, o por la tía que siempre nos ha cuidado con devoción.

Aquí radica el drama humano de la post-verdad: la persona que reenvía este mensaje no lo hace por maldad, ni con la intención de destruir la democracia. Lo hace por amor. Lo hace movida por el miedo, creyendo genuinamente que está protegiendo a los suyos de un peligro inminente. Pero al recibirlo de alguien a quien amamos, nuestras defensas intelectuales se desmoronan. Si la mentira apareciera en la portada de un periódico de dudosa reputación, la cuestionaríamos inmediatamente. Sin embargo, como nos la envía un ser querido, el peso de la autoridad afectiva se impone sobre el pensamiento crítico. “Si mi hermano lo manda, algo de cierto debe tener”, solemos pensar.

Esta fragmentación de la información en millones de conversaciones privadas, cerradas y encriptadas, crea un escenario de pesadilla para la verdad. Es un espacio inmune al escrutinio. Si un líder miente en televisión, un periodista de investigación puede desmentirlo al día siguiente; pero si una calumnia circula por cientos de miles de teléfonos a través de chats familiares, no hay periodista, ni juez, ni verificador de datos que pueda entrar a esos espacios para detenerla a tiempo. La corrección técnica siempre llega tarde, y muchas veces, nunca llega. La mentira se instala cómodamente en la sobremesa del domingo, y con ella, se instala la duda constante, la sospecha hacia el prójimo y el desprecio por nuestras instituciones republicanas.

Las consecuencias a largo plazo de esta dieta diaria de desinformación son devastadoras para el alma del país. Una sociedad no puede sobrevivir si pierde la capacidad de acordar un conjunto mínimo de hechos verificables. El debate democrático presupone que todos estamos mirando el mismo país, aunque tengamos ideas muy distintas sobre cómo arreglarlo. Si un grupo de costarricenses cree, guiado por los datos científicos y los

informes técnicos, que está lloviendo, y el otro grupo de costarricenses cree, guiado por las emociones y los audios de WhatsApp, que el sol brilla resplandeciente, es imposible que ambos grupos se pongan de acuerdo para construir un techo.

Cuando perdemos la verdad compartida, dejamos de ser una nación y nos convertimos en un archipiélago de trincheras aisladas, donde cada grupo consume únicamente la información que alimenta su propia paranoia, convencido de que los demás están ciegos, corrompidos o manipulados. En este estado de embriaguez emocional, el ciudadano deja de exigirle al gobernante planes de vivienda, programas de salud o mejoras en la educación; le exige, en cambio, que aplaste a los “enemigos” que habitan en los oscuros relatos de la post-verdad.

El doloroso abandono de la realidad no ocurre por falta de inteligencia en nuestro pueblo. El costarricense es sabio, es trabajador y tiene un profundo sentido de la justicia. Caemos en estas trampas digitales porque estamos agotados, porque venimos de años de promesas incumplidas y porque, en el fondo, todos deseamos explicaciones sencillas para problemas que son angustiantemente complejos. Es mucho más fácil creer que nuestro sufrimiento económico es culpa de una pequeña élite de villanos conspiradores que puede ser derrotada con un decreto, que aceptar que la crisis de nuestras pensiones o el deterioro de nuestra infraestructura requieren años de sacrificios, consensos aburridos y trabajo intergeneracional.

Y así, seducidos por la inmediatez de la pantalla y arrastrados por la corriente de los afectos manipulados, hemos ido dejando morir el arte más noble de nuestra tradición cívica: la capacidad de sentarnos a conversar.

Porque cuando la verdad ya no importa, y cuando el que está al frente no es visto como un conciudadano equivocado sino como un enemigo peligroso, el diálogo deja de tener sentido. Esa

es la verdadera tragedia que precede a las peores horas de cualquier democracia, el momento en el que las palabras pierden su valor de puente y se convierten en simples piedras para lanzar. Hacia el colapso de ese diálogo constructivo, y hacia la urgente necesidad de rescatarlo, debemos

dirigir ahora nuestra reflexión.

De los escombros de nuestras plazas públicas vacías y del humo cegador que produce la desinformación en nuestras pantallas, emerge la consecuencia más dolorosa para nuestra convivencia republicana: el colapso del diálogo constructivo. Podría parecer que la palabra “diálogo” se ha desgastado de tanto pronunciarla en discursos vacíos, pero en el corazón de una democracia sana, el diálogo no es una simple cortesía de salón; es el oxígeno mismo que permite que la maquinaria del país siga respirando.

Para que exista un verdadero diálogo constructivo, se requieren dos condiciones humanas fundamentales, dos actos de humildad que hoy parecen escasear. La primera es reconocer que quien está sentado al otro lado de la mesa, por más distinta que sea su bandera, tiene una cuota de legitimidad en su postura. La segunda es sentarse con la disposición genuina de cambiar de opinión si el argumento del otro resulta ser más sólido y beneficioso para el bien común. Lamentablemente, ninguna de estas dos condiciones sobrevive con facilidad en un entorno que ha sido intoxicado por el populismo, por la urgencia de las redes sociales y por la ceguera de la post-verdad.

Lo que hemos presenciado en los últimos años, con especial dolor durante el ciclo político que va de 2022 a 2026, es la sustitución del puente por la trinchera. Tradicionalmente, la relación entre quienes administran el gobierno y quienes legislan en la asamblea se basaba en el arte de la persuasión. La política era el oficio noble de tejer mayorías mediante acuerdos imperfectos pero necesarios. Sin embargo, ese patrón de negociación ha sido reemplazado por la confrontación pública permanente. Hoy, gobernar parece haberse convertido en sinónimo de librar una batalla de desgaste mediático, donde el éxito no se mide por las leyes que logramos aprobar juntos, sino por la capacidad de humillar al adversario frente a las cámaras y presentarlo como el enemigo del pueblo.

Cuando un mandatario recurre a los vetos sistemáticos, cuando se señala a los diputados con nombre y apellidos desde una conferencia de prensa

para exponerlos al escarnio, y cuando cualquier intento de control se califica de sabotaje, la política deja de ser un instrumento para resolver los problemas de los ciudadanos. Se convierte en un circo romano donde lo único que importa es quién recibe más aplausos y quién sangra más en la arena.

Pero el deterioro del diálogo no es una culpa que recaiga exclusivamente sobre los hombros de quienes ocupan el poder ejecutivo; es una enfermedad contagiosa que ha infectado también a sectores de la oposición y a ciertos grupos de la sociedad civil. Arrastrados por la misma dinámica de confrontación, muchos han caído en la tentación de responder a la descalificación con más descalificación. En este fuego cruzado, el espacio público se ha quedado peligrosamente vacío de aquellas voces sabias que intentan matizar, que buscan mediar o que proponen tender puentes. En la lógica de la polarización extrema, la prudencia es vista como tibieza, y quien intenta detener el pleito suele recibir las pedradas de ambos bandos.

El costo que pagamos por este colapso no es puramente estético, ni se limita a los malos modales de nuestros dirigentes. El precio real lo paga el país en su parálisis cotidiana. Olvidamos con demasiada frecuencia que el Estado no funciona gracias a grandes discursos heroicos, sino gracias a miles de pequeños acuerdos silenciosos que ocurren todos los días: acuerdos para aprobar un presupuesto que permita comprar medicinas, acuerdos para regular una carretera, acuerdos para nombrar a las autoridades técnicas que cuidan nuestros ahorros. Cuando el diálogo se muere y es reemplazado por la guerra permanente, esos acuerdos minúsculos e indispensables se vuelven casi imposibles de alcanzar. El resultado es una tragedia que el ciudadano sufre en carne propia: el aparato estatal se paraliza en la práctica, mientras la política se dramatiza en lo simbólico. Hablamos más fuerte que nunca, pero resolvemos menos problemas que antes.

Para dimensionar verdaderamente lo que estamos perdiendo, debemos hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás, hacia nuestra propia memoria histórica. Los costarricenses no somos un pueblo genéticamente predispuesto a la división. Todo lo contrario. Nuestro ADN cívico está

marcado por la capacidad de encontrar la paz en medio del conflicto. Hace apenas un cuarto de siglo, en 1998, este mismo país fue capaz de convocar a una Concertación Nacional. En aquel momento, la patria entera logró sentar en una misma mesa a partidos políticos rivales, a las iglesias, a los sindicatos, a las cámaras empresariales y a las organizaciones sociales.

Durante meses de negociaciones complejas y dolorosas, esos actores, que tenían visiones del mundo completamente opuestas, fueron capaces de construir una agenda de reformas para salvar al país, elevando la mirada por encima de las mayorías circunstanciales del gobierno de turno. Aquel ejercicio no fue perfecto, tuvo sus fallas y limitaciones, pero demostró ante el mundo entero que Costa Rica conservaba intacta la madurez cultural e institucional para dialogar. Nos probamos a nosotros mismos que éramos capaces de producir acuerdos que sobrevivieran a los ciclos electorales y que nos protegieran del abismo.

La distancia inmensa que existe entre aquella Costa Rica madura, capaz de concertar su futuro en una mesa redonda, y la Costa Rica de hoy, que intenta resolver sus diferencias a gritos a través de transmisiones en redes sociales, es la medida más clara de cuánto hemos retrocedido. No estamos hablando de un simple cambio en el estilo de hacer política; estamos hablando de la erosión acelerada de nuestra infraestructura espiritual y cultural. Perder el hábito de dialogar es, para una democracia, tan grave como perder la memoria para un ser humano: nos deja desorientados, sin saber quiénes somos ni cómo resolver las adversidades que la vida inevitablemente nos presentará.

A lo largo de estos primeros capítulos, hemos transitado por un paisaje melancólico. Hemos visto cómo los grandes partidos políticos dejaron de abrigarnos, cómo las instituciones morales y sindicales perdieron su capacidad de mediación y cómo el ciudadano moderno quedó solo, asustado y a merced de una pantalla de teléfono que lucra con su enojo. Hemos comprendido que, al desaparecer estos intermediarios y al romperse el diálogo, hemos dejado el campo libre para que germine la ilusión de que un solo líder, sin frenos ni contrapesos, puede salvarnos. Pero comprender nuestro dolor es solo el primer paso para sanarlo. No

podemos permitirnos el lujo de quedarnos estancados en el diagnóstico de la tristeza. Si el colapso de nuestros mediadores democráticos nos explica cómo llegamos a este estado de vulnerabilidad ciudadana, ahora nos corresponde examinar, con lupa ciudadana y ojo vigilante, cómo opera el poder cuando descubre que ya nadie le hace sombra. Porque cuando un liderazgo siente que el diálogo es innecesario y que el pueblo lo aplaude ciegamente, la tentación de acumular la autoridad absoluta se vuelve irresistible.

Dejamos atrás la erosión de las viejas instituciones, de las plazas vacías y de las conversaciones rotas, para adentrarnos en la maquinaria misma del Estado contemporáneo. Ha llegado el momento de desentrañar cómo se diseña la concentración del poder y cómo la sombra de la impunidad y el rechazo a las reglas del juego comienzan a amenazar la estructura misma de nuestra República. Si hemos de restaurar el valor de la palabra en Costa Rica, primero debemos entender las fuerzas que hoy intentan silenciarla.

Capítulo 4

LA MAQUINARIA DEL PODER

Cuando los puentes de una sociedad se derrumban, cuando los mediadores sociales pierden su fuerza y el diálogo ciudadano se apaga en medio del ruido, el terreno queda peligrosamente despejado para la fuerza más antigua e impredecible de la civilización: el poder absoluto. Para comprender cómo las democracias pierden su equilibrio, debemos alejarnos por un momento de la pasión de las noticias diarias y observar el poder político con la mirada pausada de la historia. Porque el poder, en su esencia más pura y primitiva, es como el agua de un río en invierno; no tiene moral ni intenciones propias, simplemente obedece a la ley física de expandirse, ocupando todo el espacio disponible hasta que encuentra un muro que lo detenga.



La arquitectura de una república sana se basa, precisamente, en construir esos muros de contención. A esos muros los llamamos contrapesos constitucionales. Sin embargo, la historia universal nos enseña que cuando una sociedad está herida, cansada y desilusionada de sus viejas instituciones, suele bajar la guardia. Es en ese instante de vulnerabilidad colectiva cuando comienzan a activarse, casi de manera silenciosa, los engranajes de una maquinaria diseñada para concentrar el control del Estado. Estudiar estos mecanismos como quien lee una guía sobre la naturaleza humana, nos permite identificar las señales de alerta antes de que la corriente arrase con la casa que tanto nos costó construir.

Primer Engranaje,

El primero de estos engranajes, y quizás el más complejo de abordar porque nace de la legitimidad misma, es lo que podríamos llamar “la tentación de la mayoría absoluta”. En el devenir de las naciones, ocurre a veces que un movimiento político logra capturar con maestría la frustración acumulada de un pueblo, obteniendo en las urnas un triunfo tan abrumador que le otorga el control casi total del parlamento. Este fenómeno, en principio, es un triunfo de la voluntad popular y debe ser respetado con reverencia. Pero es en la psicología de ese triunfo donde se esconde la primera gran trampa del poder.

Para el espíritu humano, es inmensamente difícil recibir una victoria aplastante y conservar la humildad.

La tentación natural del gobernante que cuenta con los votos suficientes para aprobar cualquier ley sin necesidad de alianzas, es dejar de negociar. ¿Para qué sentarse a la mesa con el adversario, para qué soportar la lentitud del debate legislativo, si la matemática le permite imponer su visión en solitario? Cuando un gobierno cede a esta tentación, empieza a confundir la legitimidad de su mandato con la posesión absoluta de la verdad.

Se olvida un principio fundamental del humanismo democrático: un país nunca es solamente la mitad que ganó la elección. Una nación es la suma indisoluble de todos sus habitantes, incluyendo a las minorías, a los que votaron distinto y a los que, desencantados, prefirieron no votar.

Cuando el legislativo se convierte en un simple espejo que obedece y aplaude la voluntad del palacio presidencial, perdiendo su vocación de asamblea plural, el Estado deja de representar a la patria entera para convertirse en el instrumento de una sola facción. El mandato de las urnas, que debió ser una herramienta para sanar al país, se convierte entonces en un martillo que silencia la pluralidad.

Segundo Engranaje,

Superada la tentación de la mayoría, el poder suele activar un segundo mecanismo, mucho más sutil y que ataca directamente el corazón de la tradición cívica: la incapacidad para soltar las riendas. A lo largo de los siglos, las repúblicas más estables descubrieron que la única forma de evitar la tiranía era garantizando que nadie fuera imprescindible. En nuestra propia herencia costarricense, la imagen más hermosa y digna de la democracia siempre fue ver a un expresidente entregar la banda, bajar las escalinatas del poder y volver a caminar por la calle como un ciudadano común, sujeto a las mismas leyes que el resto de sus vecinos. Esa disposición a desprenderse del mando absoluto y regresar a la llanura es el acto supremo de amor por las instituciones.

Pero cuando la maquinaria de la concentración se pone en marcha, el liderazgo se convence a sí mismo de que su presencia es indispensable para la salvación de la patria. Nace entonces el instinto de perpetuidad. Como las leyes de las repúblicas maduras suelen prohibir la permanencia indefinida en el máximo cargo, el poder busca caminos creativos para no irse del todo. Comienzan a diseñarse figuras atípicas, o roles desde la sombra, donde el líder que debería retirarse pasa a ocupar posiciones estratégicas para seguir dictando el rumbo del Estado.

Se busca crear una continuidad de influencia que esquive el espíritu de la Constitución. El mensaje que esta maniobra envía al alma de la nación es profundamente desalentador. Al resistirse a ceder el espacio, se asfixia el nacimiento de nuevos liderazgos, se estanca la renovación del pensamiento y se le dice al ciudadano que las instituciones no tienen valor por sí mismas, sino que son simples piezas de ajedrez que deben ser

reacomodadas para garantizar que la misma persona siga moviendo los hilos. Es la negación de la alternancia, disfrazada de sacrificio por el país.

Tercer Engranaje,

Cuando un movimiento político ha sucumbido a la tentación de ignorar a las minorías y ha demostrado su reticencia a abandonar el control, el terreno está fértil para el tercer mecanismo, que es, sin duda, el más peligroso de todos: el canto de sirena de la “refundación”. Todo proyecto que busca concentrar el poder necesita convencer al pueblo de que el pasado es una tierra de oscuridad total, y de que las reglas actuales son un estorbo para alcanzar el paraíso prometido. Es entonces cuando comienza a instalarse en el debate público la necesidad imperiosa de cambiar las reglas del juego.

Se empieza a sugerir la idea de una “nueva república”. Se argumenta que las constituciones viejas, aquellas que se forjaron con el sudor, la sangre y el diálogo de nuestros abuelos, están obsoletas y amarran las manos del gobernante. De pronto, figuras que fueron diseñadas para protegernos de las dictaduras —como la prohibición de la reelección presidencial continua— pasan a ser presentadas como obstáculos para el desarrollo. La retórica de la refundación apela a nuestras emociones más profundas, prometiéndonos que, si tan solo le permitimos al líder cambiar la ley suprema a su antojo, todos nuestros problemas desaparecerán.

Pero la historia humana es implacable con esta ilusión. Las páginas del pasado nos demuestran que cuando un gobernante propone rediseñar la Constitución porque siente que las reglas le quedan estrechas, rara vez lo hace pensando en la libertad de las próximas generaciones. Lo hace pensando en su propia supervivencia política. El mito de la “tercera república” o de la “refundación” termina, casi invariablemente, en la confección de un traje legal cortado a la medida de los intereses de quien detenta el poder en ese momento. Desmantelar los contrapesos bajo la excusa de la eficacia es como quitarle los frenos a un vehículo para que viaje más rápido; la velocidad puede ser embriagadora durante los primeros kilómetros, pero el accidente final es matemáticamente inevitable.

Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad moral de conocer estos mecanismos, no para llenarnos de paranoia, sino para cultivar una prudencia cívica que nos permita cuidar nuestra casa común. Reconocer la tentación de la mayoría absoluta, advertir el peligro de los liderazgos que se niegan a retirarse y desconfiar de las promesas de refundación constitucional, no significa ser enemigos del progreso. Significa, por el contrario, amar tan profundamente a nuestro país que nos negamos a arriesgar su paz a cambio de atajos peligrosos.

Las experiencias de nuestros países vecinos en América Latina nos ofrecen un espejo doloroso que no debemos ignorar. Hemos visto florecer asambleas que dejaron de debatir para dedicarse solo a aplaudir; hemos visto a líderes aferrarse al control desde la sombra hasta asfixiar a sus propias naciones; y hemos llorado la muerte de democracias enteras que se dejaron seducir por la promesa de reelecciones salvadoras y nuevas repúblicas. Conocer este inventario de las trampas del poder es la única forma de garantizar que, cuando el río amenace con desbordarse, nuestro dique institucional permanezca firme.

Sin embargo, el diseño de esta maquinaria de concentración tiene un propósito final que va más allá del simple ego de gobernar. El poder absoluto no busca solamente perpetuarse; busca, por encima de todo, protegerse a sí mismo de las consecuencias de sus propios actos. Es allí, en el corazón mismo de un Estado sin frenos ni contrapesos, donde se gesta el veneno más corrosivo para la esperanza ciudadana. Cuando la ley se debilita y el gobernante se vuelve intocable, se abre la puerta a un laberinto del cual es casi imposible salir: el círculo cerrado de la corrupción amparada por la impunidad. Para comprender cómo opera este escudo protector y cómo devora la confianza de los pueblos, debemos dar el siguiente paso en nuestra reflexión.

Para comprender el verdadero peligro de un poder que se concentra sin límites, primero debemos mirar de frente la herida más profunda de nuestras sociedades latinoamericanas: la corrupción. Durante décadas, el ciudadano común ha visto cómo los recursos que debían destinarse a curar a sus enfermos, a educar a sus hijos o a asfaltar los caminos por

donde transita su cosecha, se escurrían entre las grietas de la burocracia y el privilegio. La corrupción no es simplemente el robo de un dinero abstracto; es el robo de la esperanza. Es la gotera constante que pudre la confianza entre el pueblo y el Estado. Y es, precisamente, el dolor inmenso de esa traición lo que empuja a las sociedades a buscar líderes fuertes que prometan barrer con el pasado.

Aquí yace la gran paradoja de nuestro tiempo. Los proyectos políticos que buscan concentrar el poder rara vez se presentan ante el pueblo pidiendo permiso para ser autoritarios. Todo lo contrario: se presentan con la espada desenvainada, prometiendo ser los justicieros implacables que limpiarán la casa de toda la suciedad acumulada. El ciudadano, desesperado por ver justicia, les entrega su voto, su confianza y esa mayoría absoluta de la que hablamos anteriormente. Sin embargo, la tragedia de las repúblicas comienza cuando los nuevos salvadores, una vez instalados en la cúspide del Estado, descubren que el poder absoluto también trae consigo tentaciones absolutas.

Cuando las sombras de la duda comienzan a posarse sobre los nuevos liderazgos —cuando surgen preguntas sobre cómo se financiaron sus campañas, sobre el uso indebido de los fondos públicos o sobre favores otorgados desde las sombras—, una democracia sana reacciona activando sus defensas. Los fiscales investigan, los jueces piden explicaciones y la prensa levanta la voz. En un país donde nadie está por encima de la ley, el gobernante debería someterse a ese escrutinio con la misma humildad con la que un ciudadano común acude a los tribunales. Pero un poder que ha sido diseñado para no tener frenos, reacciona de una manera muy distinta. En lugar de someterse a la balanza de la justicia, decide utilizar el peso del Estado para quebrar la balanza.

Es en este momento crítico donde entra en juego una figura jurídica que fue creada para proteger a la democracia, pero que en manos equivocadas se convierte en su mayor amenaza: el fuero, o la inmunidad. Históricamente, las constituciones del mundo libre —incluyendo la nuestra— dotaron a los altos jerarcas de un escudo legal para evitar que fueran perseguidos, encarcelados o silenciados injustamente por sus adversarios políticos. La

inmunidad no fue concebida como una licencia para delinquir, sino como una armadura para que el gobernante pudiera tomar decisiones valientes por el bien del país sin temor a represalias infundadas. Era un privilegio del cargo, no de la persona.

Pero, ¿qué sucede cuando ese escudo sagrado se utiliza para esconderse de las investigaciones legítimas? Cuando las más altas autoridades del Estado se ven envueltas en investigaciones serias y justificadas por posibles actos de corrupción, el camino republicano exige que la Asamblea Legislativa levante ese escudo temporalmente, permitiendo que la justicia ordinaria haga su trabajo y decida si hay culpa o inocencia. Y es aquí donde el engranaje de la concentración de poder, del que hablamos en la primera parte, cierra su círculo perverso de una manera matemáticamente fría y desoladora.

Si el Ejecutivo cuenta con una fracción legislativa lo suficientemente grande y sumisa, el levantamiento de esa inmunidad se vuelve imposible. Se requieren mayorías calificadas para despojar del fuero a un alto funcionario. Por lo tanto, si el partido de gobierno tiene los votos necesarios para bloquear la decisión, las investigaciones judiciales quedan congeladas en el tiempo. La justicia deja de ser ciega y pasa a depender, dolorosamente, de la aritmética parlamentaria.

Imaginemos el impacto devastador que este espectáculo tiene en el alma del ciudadano común. El padre de familia que trabaja de sol a sol, y que sabe que si comete una pequeña infracción sentirá todo el peso y la inmediatez de la ley, observa por la televisión cómo los grandes jerarcas del país esquivan a los tribunales simplemente porque sus aliados políticos votaron para protegerlos. Observa cómo expedientes gravísimos, llenos de pruebas y señalamientos técnicos, terminan acumulando polvo en las gavetas porque el Congreso decidió actuar como el guardaespaldas del poder, en lugar de actuar como el representante del pueblo.

Es en esta dinámica donde comprendemos verdaderamente por qué existe tanta resistencia a soltar las riendas del poder. Cuando hablábamos de la tentación de perpetuarse en el gabinete, de esas figuras atípicas que se

niegan a abandonar los ministerios o los altos cargos, pensábamos que se trataba únicamente de un problema de ego o de ambición política. Pero la realidad suele ser mucho más oscura. En un ecosistema donde rondan las investigaciones judiciales, abandonar un alto cargo significa, automática y literalmente, perder el escudo de la inmunidad. Quedarse en el poder ya no es solo una cuestión de gobernar; es una táctica de supervivencia para no tener que rendir cuentas.

Al unirse la sombra de la sospecha con la imposibilidad legal de investigar, se consolida el monstruo más destructivo para la moral de un país: la impunidad. Y debemos entender que la impunidad duele mucho más que la corrupción misma. La corrupción indigna, pero la impunidad resigna. Cuando una sociedad aprende, caso tras caso, que la rendición de cuentas no depende de la fuerza de las pruebas ni del daño causado a la patria, sino de cuántos diputados te protegen, algo sagrado se quiebra en su interior. Se instala en el imaginario colectivo una lección perversa: que las leyes son como una telaraña, diseñadas para atrapar a los insectos pequeños y débiles, pero que los insectos grandes y poderosos pueden atravesar y romper sin ninguna consecuencia.

Esa lección, una vez que penetra en el corazón de nuestras comunidades, erosiona el pacto social desde sus cimientos. ¿Con qué autoridad moral le pedimos al joven de nuestros barrios marginales que respete la ley, que estudie y que se gane el pan con honradez, si en las más altas esferas del país le estamos demostrando que el poder es sinónimo de intocabilidad? La impunidad de los gobernantes legitima la rebeldía del ciudadano.

Un país que no castiga a los poderosos pierde el derecho a exigir obediencia a los humildes.

Costa Rica, en un pasado no tan lejano, supo darle al continente entero una lección de dignidad en este ámbito. Hubo un tiempo en nuestra historia reciente donde la institucionalidad demostró que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera quienes habían ocupado la silla presidencial, estaba por

encima de los tribunales de justicia. Aquellos procesos, aunque dolorosos y traumáticos para la psique nacional, terminaron siendo un motivo de orgullo republicano. Demostramos que nuestras leyes funcionaban, que nuestros jueces eran valientes y que la banda presidencial no era un chaleco antibalas contra la verdad.

Hoy, ese legado histórico está bajo asedio. El contraste entre aquel país capaz de llevar a juicio a sus máximas figuras y el panorama actual, donde las inmunidades actúan como candados insuperables, nos revela la verdadera magnitud de la concentración de poder. Porque cuando el gobernante logra rodearse de un círculo impenetrable de lealtades políticas que lo blindan ante cualquier acusación, ya no necesita dar explicaciones. Le basta con recurrir al mismo discurso populista de siempre: calificar a los fiscales de perseguidores, acusar a los jueces de pertenecer a una conspiración oscura y convencer a sus seguidores de que cualquier investigación legal es, en realidad, un ataque contra el pueblo mismo.

Este círculo cerrado de impunidad genera una frustración inmensa en las instituciones que aún intentan cumplir con su deber constitucional. Cuando la Asamblea Legislativa abdica de su responsabilidad de control cruzado, todo el peso de defender el Estado de derecho recae sobre los últimos guardianes que quedan en pie: el Poder Judicial, los tribunales electorales, las contralorías y la prensa libre. Y es precisamente hacia ellos hacia donde el poder concentrado dirigirá toda su furia.

Un gobierno que se ha blindado políticamente no tolerará la existencia de instituciones técnicas o judiciales que se atrevan a cuestionar su voluntad. Al no poder destruirlas legalmente de un día para otro, iniciará una campaña de asfixia sistemática, un asedio constante para estrangularlas financieramente, minar su autoridad moral y someterlas al desprecio público. Cómo opera ese asedio, cómo resisten nuestras últimas trincheras institucionales y cuál es el alto precio que pagan por defender nuestra libertad, será el territorio que exploraremos en la última parte de este capítulo. Porque en la defensa de esos contrapesos finales, se juega, ni más ni menos, que la supervivencia de la República.

Cuando el círculo de la impunidad se cierra en las altas esferas del poder, protegiendo a los líderes detrás del escudo de sus alianzas políticas, el daño no se limita a los fríos pasillos del parlamento o a los expedientes de los tribunales. Ese blindaje, diseñado para la supervivencia de unos pocos, tiene una víctima silenciosa de la que rara vez se habla en los grandes debates nacionales, pero que sostiene sobre sus hombros el peso entero del país: el servidor público honesto.

Para comprender la magnitud de la tragedia que significa vivir bajo el manto de la impunidad, debemos bajar la mirada desde los palacios presidenciales hasta los escritorios de nuestra burocracia cotidiana. Pensemos en el auditor de un ministerio que descubre una anomalía en un contrato, en el ingeniero municipal que se niega a firmar un permiso ilegal, o en el médico de la seguridad social que denuncia el despilfarro en la compra de equipos. Históricamente, en Costa Rica, estos funcionarios de carrera sentían que, si actuaban con rectitud, la ley y las instituciones los respaldarían. Trabajaban con la certeza de que su deber principal era cuidar los recursos sagrados del pueblo, sin importar qué partido estuviera gobernando.

Pero, ¿qué sucede en la psicología de este trabajador cuando observa que, en las más altas cumbres del Estado, las reglas no aplican? Cuando el funcionario honesto ve que un líder político comete una falta grave y, en lugar de ser investigado, es protegido por la aritmética legislativa o premiado con la inmunidad de un nuevo cargo, su mundo moral se desmorona. El mensaje que desciende desde la cúpula del poder hacia las bases del Estado es devastador:

*Hacer lo correcto
se ha vuelto peligroso.*

El servidor público aprende rápidamente una lección perversa de supervivencia. Aprende que si denuncia al poderoso, no recibirá una medalla, sino una persecución implacable; será trasladado de su puesto, señalado públicamente como un saboteador o asfixiado con procesos administrativos. Y ante el miedo natural de perder el sustento de su familia, opta por el silencio. Es entonces cuando la maquinaria del Estado sufre

una parálisis invisible. No es una huelga de brazos caídos declarada por un sindicato; es la parálisis del miedo. Los técnicos dejan de advertir sobre los errores, los abogados evitan firmar dictámenes comprometedores y los proyectos se estancan en un mar de indecisiones, porque nadie quiere asumir el riesgo de contradecir a un poder que ha demostrado no tener límites ni rendir cuentas.

La concentración del poder y su consecuente impunidad terminan por transformar la naturaleza misma de las instituciones. Un ministerio, que fue creado para servir al agricultor, a la madre trabajadora o al estudiante, comienza a funcionar como un escudo protector para el gobernante. La lealtad técnica hacia el país es sustituida por la lealtad ciega hacia el líder. Quienes ascienden en esta nueva estructura ya no son los profesionales más capaces o los de trayectoria más intachable, sino aquellos que están dispuestos a guardar silencio, a mirar hacia otro lado y a aplaudir las decisiones del poder, por más perjudiciales que estas sean para la nación. Esta degradación del servicio civil es una de las heridas más profundas y difíciles de sanar en cualquier república.

Sin embargo, para que esta maquinaria de poder y este círculo de impunidad logren sostenerse en el tiempo, necesitan algo más que el control de las instituciones; necesitan la complicidad pasiva de la sociedad. Y el método más efectivo para lograr que un pueblo tolerante y pacífico acepte la impunidad como algo normal, es someterlo a la estrategia del agotamiento moral.

Si un gobierno protagoniza un solo escándalo de corrupción al año, la sociedad entera se indigna, sale a las calles, los medios de comunicación investigan a fondo y el ciudadano exige respuestas. Pero, ¿qué pasa cuando la maquinaria produce un escándalo nuevo cada semana? ¿Qué ocurre cuando las declaraciones polémicas, los insultos a los adversarios, los cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos y los choques institucionales se convierten en el pan nuestro de cada día? La respuesta humana a esa avalancha de ruido no es la rebelión; es el cansancio.

El ciudadano costarricense, que ya tiene suficientes preocupaciones intentando llevar el sustento a su hogar, pagando sus deudas y cuidando de sus hijos en un entorno cada vez más violento e inseguro, simplemente no tiene la energía emocional para indignarse todos los días.

Frente a un bombardeo constante de confrontación y sospechas, el mecanismo de defensa de la mente humana es la desconexión. El costarricense apaga el noticiero, silencia los debates políticos y decide enfocarse únicamente en su supervivencia individual.

Es en ese preciso instante de desconexión ciudadana cuando la concentración del poder logra su victoria más absoluta. Al saturar el espacio público con ruido, logran que lo inaceptable se vuelva rutinario. La impunidad deja de ser un escándalo que nos quita el sueño y se convierte en el paisaje de fondo de nuestras vidas. Empezamos a escuchar en las calles, en los autobuses y en los mercados esa frase lapidaria que anuncia la muerte del espíritu republicano: “todos son iguales, todos roban, ya nada importa mientras me dejen trabajar”. Ese cinismo es el veneno más letal que puede ingerir una democracia. Cuando el ciudadano acepta la frase “roban, pero hacen”, está renunciando voluntariamente a su dignidad como soberano. Está aceptando cambiar sus derechos fundamentales, su libertad y la transparencia del Estado, por la ilusión de la eficacia a corto plazo. Es cierto que un liderazgo autoritario, al no tener que respetar los controles técnicos ni las licitaciones públicas, puede inaugurar una carretera o construir un edificio con mayor rapidez. Pero el costo oculto de esa obra no se paga únicamente en la moneda de los sobreprecios; se paga con el alma de la patria. Porque un puente construido sobre los cimientos de la corrupción y la falta de transparencia, es un puente que tarde o temprano colapsará, llevándose consigo la confianza de las futuras generaciones.

Nos enfrentamos, entonces, a un desafío que trasciende la política y se adentra en el terreno de la ética ciudadana. El gran reto de nuestra época no es solamente evitar que el poder se concentre, sino evitar que nuestro corazón se acostumbre a la oscuridad. Debemos negarnos, con una rebeldía serena pero inquebrantable, a perder nuestra capacidad de asombro frente a lo incorrecto. No podemos permitir que la impunidad se normalice en la mesa de nuestros hogares. Cada vez que aceptamos en

silencio que un jerarca esquivé la ley, estamos enseñándoles a nuestros hijos que la honradez es un valor inútil, y que en Costa Rica el éxito pertenece a quienes saben burlar las reglas.

Para romper este círculo asfixiante, debemos recuperar la memoria de lo que somos. Los costarricenses fuimos forjados en el yunque de la igualdad ante la ley. A diferencia de otras sociedades donde el abolengo, el dinero o la fuerza militar dictaban quién era intocable, nosotros construimos una nación donde el presidente de la República, el maestro de escuela y el campesino valían exactamente lo mismo frente a un juez. Esa igualdad no fue un regalo del azar; fue una conquista ganada a pulso por abuelos que entendieron que la verdadera paz solo florece donde hay justicia pareja para todos. Recuperar ese legado exige un despertar cívico profundo. Exige que el ciudadano entienda que el poder concentrado nunca es su amigo, aunque hable en su nombre y le prometa castigar a sus viejos enemigos.

Todo poder absoluto, tarde o temprano, se vuelve contra el pueblo que lo encumbró.

Las herramientas que hoy pueden parecerle al ciudadano frustrado como estorbos burocráticos — la Contraloría, la Fiscalía, los tribunales independientes y la prensa libre— son, en realidad, los únicos escudos reales que lo protegen frente a la arbitrariedad.

Cuando un gobernante logra consolidar su influencia y blindarse con la impunidad, descubre que el camino hacia el control absoluto tiene, sin embargo, un último obstáculo. Descubre que en las repúblicas maduras existen instituciones que no fueron diseñadas para ganar elecciones, sino para defender la Constitución, y que sus miembros no suelen ceder ante el aplauso fácil. La historia nos advierte que, en esta etapa, el poder concentrado suele emprender una guerra de asfixia contra esos últimos guardianes técnicos y jurídicos. Llegamos así a la comprensión de una de las fases más delicadas en la vida de cualquier democracia: el asedio a los contrapesos constitucionales y el papel vital del Poder Judicial como última trinchera.

Capítulo 5

EL ASEDIO A LOS CONTRAPESOS

Si imaginamos a nuestra nación como un gran vehículo en el que viajamos todos juntos hacia el futuro, el poder ejecutivo es, sin lugar a duda, el motor que nos impulsa hacia adelante. Es la fuerza vital que construye carreteras, que diseña políticas de salud, que recauda los impuestos y que propone soluciones para los dolores más urgentes de la sociedad. Cuando un país está sumido en la pobreza, la desigualdad o la inseguridad, es natural y humano que los pasajeros de ese vehículo le exijan al conductor que acelere, que llegue rápido al destino prometido y que no se detenga ante nada.

Sin embargo, los sabios arquitectos de las democracias modernas comprendieron una verdad fundamental sobre la naturaleza humana: un motor inmensamente poderoso, colocado en un vehículo que carece de frenos, no es un instrumento de progreso; es una tragedia inminente. A esos frenos indispensables, a esos sistemas de dirección y amortiguación que evitan que el vehículo se desbarranque en la primera curva de la historia, los llamamos “pesos y contrapesos constitucionales”.



Estas instituciones de control —las contralorías, los tribunales independientes, las asambleas legislativas y los órganos electorales— no fueron diseñadas para ser populares. Su vocación no es recibir los aplausos de las plazas ni ganar concursos de simpatía. Su misión sagrada es hacer pausas. Su trabajo consiste en levantar la mano en medio de la euforia gubernamental y decir: “esperemos un momento, revisemos los planos, aseguremos que los fondos se están usando correctamente y verifiquemos que esta decisión no atropella los derechos de nadie”. En el fragor de la política, esta pausa técnica suele resultar profundamente incómoda para quien tiene prisa por gobernar.

Es en esta fricción natural entre la velocidad que desea el poder y la prudencia que exige la ley donde los proyectos de corte autoritario encuentran su excusa perfecta para iniciar el asedio. Cuando un gobernante comienza a sentir que los contrapesos le estorban, rara vez confiesa públicamente que su objetivo es acumular poder absoluto. En su lugar, recurre a una narrativa sumamente seductora para el ciudadano que sufre. Se apropia del dolor del pueblo y declara que las instituciones de control no lo están frenando a él, sino que están frenando el desarrollo del país.

El manual de la erosión democrática nos enseña que el ataque contra estos guardianes republicanos rara vez se realiza de forma frontal o violenta en sus primeras etapas. En el siglo veintiuno, las instituciones no se cierran con candados ni se clausuran con tanques en las calles; se asfixian lentamente en los escritorios. El mecanismo más efectivo y silencioso para dismantelar un contrapeso incómodo es el estrangulamiento presupuestario.

Pensemos en el órgano técnico encargado de vigilar el uso de los fondos públicos, aquel que asegura que los impuestos del ciudadano humilde no terminen en los bolsillos de contratistas corruptos. Si un liderazgo político desea neutralizar a este guardián sin alterar una sola coma de la Constitución, le basta con recortar sistemáticamente su presupuesto año tras año. Se le exige a la institución que asuma más tareas de fiscalización, que revise presupuestos más grandes y complejos, pero se le otorgan proporcionalmente menos recursos para contratar a los auditores,

ingenieros y abogados necesarios para realizar ese trabajo.

Este estrangulamiento financiero se disfraza, casi siempre, bajo el noble manto de la “austeridad estatal” o la “eficiencia del gasto”. Pero el resultado práctico es una agonía institucional. Cuando el órgano fiscalizador advierte que se dirige hacia un cierre técnico por falta de recursos, el poder ha logrado su cometido: paralizar el control por la vía fiscal, logrando en las hojas de cálculo lo que sería políticamente escandaloso lograr por decreto. Para la ciudadanía, esta asfixia suele pasar desapercibida, porque ocurre en el árido terreno de los recortes financieros, pero el daño a la República es devastador. Un Estado sin auditores independientes es como un banco con las bóvedas abiertas y los guardias de seguridad amordazados.

Avanzando en la escala del asedio, encontramos un segundo objetivo que suele despertar la mayor de las furias en los proyectos que buscan perpetuarse: el árbitro electoral. En la historia contemporánea de Costa Rica, el tribunal encargado de organizar nuestras elecciones ha sido, con toda justicia, uno de los pilares de mayor prestigio institucional, considerado por muchos como un verdadero cuarto poder de la República. Su prestigio no es un adorno; es la única garantía de que nuestras transiciones de poder se realicen en paz y de que la voluntad del pueblo, depositada en una urna de cartón, sea respetada religiosamente.

Cuando el instinto de concentración del poder se topa con un tribunal electoral que mantiene su independencia y que se atreve a señalar excesos o injerencias indebidas en las campañas políticas, la reacción autoritaria sigue un guión predecible. Se inicia una campaña feroz para sembrar la duda en el corazón de los votantes. Desde las más altas tribunas, se acusa a los magistrados electorales de parcialidad, de complotar con la vieja clase política o de interferir en la voluntad popular.

El peligro de este ataque trasciende por mucho la ofensa a los magistrados de turno. Atacar al árbitro electoral es sembrar dinamita en los cimientos mismos de la paz social. Si un liderazgo convence a sus seguidores de que la institución que cuenta los votos está corrompida o sesgada, está preparando el terreno psicológico para desconocer cualquier resultado

adverso en el futuro. Es una táctica de tierra arrasada: si no gano el juego, destruyo la credibilidad del tablero. Y la historia de nuestros vecinos latinoamericanos nos grita una advertencia desgarradora:

Para que este asedio contra la fiscalización de los fondos públicos y contra la autoridad del árbitro electoral logre su cometido, el poder necesita neutralizar primero a un contrapeso de naturaleza distinta, uno que no pertenece formalmente al Estado, pero sin el cual ninguna democracia puede sobrevivir: la prensa libre y la sociedad civil organizada.

Cuando una sociedad pierde la fe en la limpieza de sus elecciones, el único camino que le queda para resolver sus diferencias es la violencia en las calles.

Podemos pensar en los medios de comunicación independientes y en las organizaciones ciudadanas como el escudo exterior de nuestra fortaleza institucional. Las contralorías, los tribunales y las asambleas son los muros de piedra, pero es la prensa libre la que enciende las antorchas para iluminar a los enemigos que se acercan en la oscuridad. Cuando un ecosistema mediático investiga, hace preguntas incómodas y expone las contradicciones del gobernante, le otorga a los contrapesos formales el respaldo ciudadano que necesitan para actuar.

Sabiendo esto, el poder que busca la hegemonía despliega todo su arsenal comunicacional para debilitar económicamente a los medios independientes, someterlos a un acoso verbal constante y presentarlos como enemigos del pueblo. Al erosionar la autoridad moral del periodismo, se aísla a las instituciones formales. Un contralor o un magistrado electoral, sin el respaldo de una prensa que explique la importancia de sus fallos al público, queda completamente solo y vulnerable ante los ataques de la maquinaria gubernamental.

Este es el paisaje desolador que precede a los colapsos democráticos. Instituciones asfixiadas económicamente, árbitros electorales difamados

sistemáticamente y una prensa independiente arrinconada por el descrédito. Y sin embargo, cuando este asedio parece estar a punto de derribar todas las puertas de la República, el poder descubre que aún existe una última línea de defensa, un bastión final donde se atrincheran los derechos más sagrados del ciudadano.

Esa última fortaleza, la que verdaderamente separa a una nación libre de una dictadura, es un sistema de tribunales independientes. Cuando los demás controles han sido burlados, neutralizados o silenciados, todas las miradas de la sociedad se vuelven hacia sus jueces. Es allí, en las cortes de justicia y en los tribunales constitucionales, donde se librará la batalla decisiva por el alma de la nación. Porque un Poder Judicial firme tiene la capacidad milagrosa de detener, con la sola fuerza de una firma en un papel, al ejército más grande, al decreto más arbitrario y a la voluntad más avasalladora del gobernante más popular.

Entender cómo el poder intenta doblegar a los jueces, cuáles son las señales tempranas de la captura judicial y por qué proteger la toga del magistrado es proteger nuestra propia libertad individual, nos adentrará en el núcleo mismo de este capítulo. Porque si perdemos la trinchera de la justicia, ya no quedará nadie a quien acudir cuando el Estado decida tocar a nuestra puerta en medio de la noche.

Cuando todas las demás líneas de defensa de una democracia han sido rebasadas, cuando los partidos políticos han enmudecido, cuando las asambleas legislativas han cedido su voluntad al gobernante de turno y cuando el ruido de la post-verdad ha confundido a la opinión pública, el ciudadano queda solo en medio de la tormenta. Frente a él se alza la maquinaria colosal del Estado: ministerios con presupuestos incalculables, cuerpos policiales, decretos fulminantes y un poder comunicacional capaz de aplastar cualquier disidencia. En ese instante de absoluta vulnerabilidad, el ciudadano no tiene ejército, no tiene megáfonos ni cuenta con arcas llenas de oro. Su única armadura, su último refugio en la tierra, es un pedazo de papel donde están escritos sus derechos, y un juez dispuesto a hacerlos valer.

Para comprender por qué el asedio al Poder Judicial es la fase más dramática y definitoria en la erosión de una república, primero debemos dimensionar la belleza poética y humana que encierra un tribunal independiente. Una sala de justicia no es simplemente un salón de madera con magistrados vestidos de negro; es el único lugar en el mundo donde el poder se detiene, se despoja de sus privilegios y se somete a la misma balanza que el ciudadano más humilde. Es el milagro civilizatorio por el cual un campesino, una maestra o un trabajador informal pueden sentar en el banquillo de los acusados al Estado mismo, y ganarle la partida si la ley y la razón están de su lado.

En la historia de nuestra patria, el máximo guardián de ese milagro ha sido nuestra jurisdicción constitucional. Pensemos por un momento en lo que ha significado este tribunal para la vida cotidiana de las familias costarricenses. No se trata de debates académicos en las nubes. Hablamos de la madre que, ante la negativa de un hospital a entregarle un medicamento de alto costo que puede salvar la vida de su hijo, escribe su angustia en una hoja de cuaderno, la presenta ante los magistrados y logra, con la fuerza de la Constitución, doblegar la burocracia estatal. Hablamos de la protección de nuestras reservas ecológicas frente a intereses desmedidos, y de la garantía de que ninguna minoría será aplastada por los prejuicios de la mayoría.

A lo largo de las décadas, nuestros tribunales han demostrado su independencia al frenar decretos y leyes que violaban los derechos fundamentales, sin importar si el presidente de turno era de una corriente ideológica o de otra. Esa neutralidad, esa maravillosa capacidad de fallar contra el gobierno cuando la ley así lo exige, es el superpoder de la justicia. Pero es precisamente ese superpoder el que resulta intolerable para un proyecto político que basa su existencia en la promesa de que el líder encarna la voluntad única e incuestionable del pueblo.

Cuando el gobernante asume que su mandato está por encima de las leyes, el juez independiente deja de ser visto como un árbitro necesario y pasa a ser calificado como un enemigo de la patria. La literatura política universal que estudia cómo mueren las democracias ha identificado con

escalofriante precisión las señales de alerta que anuncian el inicio de la captura judicial. Es un manual de tres pasos que, lamentablemente, hemos visto aplicarse con éxito en países hermanos, y cuyas sombras debemos aprender a reconocer antes de que oscurezcan nuestro propio horizonte.

Señal Primera,

La primera señal es el intento de controlar los nombramientos judiciales. Un poder que rechaza los límites intentará, por todas las vías políticas posibles, influir en quienes tienen la tarea de elegir a los magistrados. El objetivo es sutil pero letal: sustituir el mérito técnico y la trayectoria jurídica intachable por el requisito de la lealtad política. Cuando un país permite que sus jueces sean elegidos por su afinidad con el gobernante y no por su conocimiento de la ley, está firmando su propia sentencia. Un juez leal al poder es una tragedia para la justicia, porque antes de leer la Constitución, levantará el teléfono para preguntar qué decisión le conviene al palacio de gobierno. Y en ese instante exacto, la balanza se inclina, y el ciudadano común pierde su escudo.

Señal Segunda,

La segunda señal, aún más agresiva cuando los tribunales resultan indomables, es la alteración deliberada del diseño de las cortes. En otras latitudes lo hemos visto ocurrir de la noche a la mañana: si un tribunal supremo de cinco magistrados emite fallos incómodos para el presidente, el gobierno impulsa una reforma relámpago para aumentar el número de magistrados a diez, llenando las nuevas sillas con juristas afines a su movimiento. Esta maniobra, que diluye matemáticamente a las voces independientes, es el equivalente a cambiar las reglas del juego a mitad del partido porque el marcador no nos favorece. No es una reforma; es una toma hostil de la justicia.

Señal Tercera,

La tercera señal es, quizás, la que genera el clima más asfixiante para el Estado de derecho: la utilización instrumental del ministerio público y

de la persecución penal. En una democracia erosionada, la justicia deja de ser un faro ciego y se convierte en una espada teledirigida. Se abren investigaciones rápidas y espectaculares contra los críticos, los periodistas y los adversarios políticos, con el fin de intimidarlos y quebrar su espíritu. Paralelamente, las investigaciones contra los aliados del gobierno, contra los financistas de sus campañas o contra sus ministros, sufren de una parálisis crónica; los expedientes se “pierden”, los fiscales son removidos o las pruebas son desestimadas.

Pero en la era de la polarización digital y el populismo, el asedio al Poder Judicial ha incorporado una táctica aún más dolorosa: la presión de la calle dirigida desde la cúpula del poder. En sociedades sanas, si un gobernante está en desacuerdo con la investigación de un fiscal general o con la sentencia de un juez, recurre a los mecanismos de apelación que la misma ley provee. En una democracia enferma, el gobernante convoca a las masas.

Hemos visto, en el panorama contemporáneo, el surgimiento de un fenómeno que hiela la sangre de cualquier demócrata: el poder ejecutivo encabezando o estimulando marchas y protestas de simpatizantes para exigir la renuncia de fiscales que investigan a sus propios jerarcas, o para intimidar a los magistrados antes de una votación crucial. Someter a un Poder Judicial a ese tipo de presión pública, callejera y cargada de hostilidad, tiene un costo incalculable para la autoridad moral del Estado. Incluso si el juez es valiente y termina resistiendo el acoso, la semilla de la duda ya ha sido sembrada.

Cuando el gobernante lanza a sus seguidores contra los tribunales, está logrando que una parte de la ciudadanía deje de ver las sentencias como resoluciones técnicas y comience a leerlas como simples episodios de una guerra política. Si el juez falla a favor del gobierno, la oposición gritará que hubo sumisión; si falla en contra, los seguidores del gobierno gritarán que se trató de un sabotaje judicial. En medio de esos gritos cruzados, la verdad jurídica muere. El tribunal pierde su sacralidad y desciende al barro de la contienda política, convirtiéndose en una trinchera más donde nadie cree en la buena fe del otro.

Es comprensible que, desde la pasión de la simpatía política, los controles judiciales parezcan un estorbo. Cuando aplaudimos a un líder porque sentimos que por fin nos escucha, es una tentación muy humana desear que nadie le ponga obstáculos. Podemos llegar a pensar que si los jueces estorban al líder que amamos, entonces esos jueces deben ser doblegados o removidos.

Si hoy, embriagados por el entusiasmo del momento, permitimos que se destruya la independencia del Poder Judicial, si aplaudimos cuando los jueces son sometidos a los caprichos del Ejecutivo, estamos entregando el único escudo que nos protegerá en el futuro. La espada que hoy afilamos con regocijo para que el poder corte las cabezas de nuestros adversarios, será la misma espada que, el día de mañana, estará apuntando a nuestros propios cuellos cuando el gobierno cambie de manos y nosotros seamos los que pensemos distinto.

La independencia de los tribunales no es, por lo tanto, un privilegio diseñado para proteger a un bando político sobre otro. No es una herramienta de la oposición, ni es un obstáculo para el progreso. Es una garantía estructural, ciega e imparcial, para absolutamente todos los habitantes del país.

Defender su independencia, incluso cuando sus fallos nos incomodan, es el acto supremo de madurez ciudadana.

Al observar cómo la maquinaria de concentración despliega sus fuerzas contra los árbitros electorales, contra los contralores y contra las togas de los magistrados, nos acercamos al momento más peligroso de esta lenta erosión. Porque cuando un liderazgo ha logrado difamar a la prensa, paralizar a los partidos, evadir las rendiciones de cuentas y arrinconar al Poder Judicial, el paso final no es un misterio; es la conclusión lógica de quien ya no desea jugar el partido. Nos enfrentamos, entonces, al límite último de la República: el momento en que se rechazan las reglas democráticas mismas. Hacia ese umbral oscuro nos dirigimos en la última parte de este análisis, para comprender qué sucede cuando la Constitución deja de ser un pacto sagrado y pasa a ser tratada como un simple borrador desechable.

Llegar a la conclusión de que los jueces de la República representan nuestra última trinchera de libertad, nos obliga a detenernos en una reflexión profunda sobre la fragilidad de esa muralla. Solemos imaginar al Poder Judicial como una fortaleza inexpugnable, sostenida por gruesos pilares de mármol y por la solemnidad de sus magistrados. Pero la verdad, mucho más humana y delicada, es que la fuerza de un tribunal no reside en sus edificios ni en el grosor de sus códigos de leyes. La independencia judicial se sostiene, única y exclusivamente, sobre un hilo invisible: la creencia compartida de toda la sociedad de que los fallos deben ser respetados.

Cuando esa creencia se quiebra, la fortaleza de mármol se desmorona como un castillo de arena. Por eso, el asedio contra los contrapesos del que hemos venido hablando alcanza su punto más crítico cuando el poder de turno decide que ya no está dispuesto a acatar las sentencias que le incomodan. Al no poder desobedecer abiertamente la ley sin provocar una ruptura constitucional inmediata, el gobernante que busca la concentración absoluta recurre a la táctica del descrédito moral. Si no puedo ignorar al juez, debo destruir su reputación ante los ojos del pueblo.

Y es aquí donde debemos reconocer el inmenso peso que recae sobre los hombros de quienes visten la toga. Un magistrado o un fiscal honesto se enfrenta a un dilema aterrador. Sabe que si emite una resolución apegada a la técnica jurídica pero contraria a la voluntad del poder popular del momento, será expuesto en la plaza pública digital. Su rostro circulará en las redes sociales acompañado de insultos, se cuestionará su honradez y su familia sufrirá el escarnio. El Estado, que debería protegerlo, se convierte en su principal agresor.

¿De dónde saca fuerzas un juez para resistir este nivel de presión? La respuesta nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos: el juez solo resiste si siente que la sociedad civil lo respalda. Cuando un fiscal investiga la corrupción en las altas esferas, o cuando la jurisdicción constitucional frena un decreto arbitrario, no lo hacen por un capricho personal. Lo hacen en nombre de ese pacto sagrado que firmamos todos los costarricenses para vivir en paz. Pero si al momento de recibir los ataques del poder político, los colegios de abogados callan, las universidades guardan silencio y los

ciudadanos miran hacia otro lado, el juez queda absolutamente huérfano.

La soledad del servidor judicial es la soledad de la democracia misma. En los países donde los tribunales terminaron cayendo bajo el control del autoritarismo, el proceso rara vez ocurrió en un solo día. Fue una sucesión de pequeños silencios. Un magistrado destituido aquí, un fiscal presionado allá, un presupuesto recortado al ministerio público más adelante. Y la sociedad, agotada o distraída, dejó pasar cada ofensa pensando que no le afectaría directamente. Cuando el ciudadano común se dio cuenta de que los jueces ahora respondían al teléfono del palacio presidencial, ya era demasiado tarde: sus propios derechos habían quedado a la intemperie.

Hagamos el esfuerzo de pensar en lo que significa perder la imparcialidad de nuestros tribunales en el día a día. Dejemos de lado las grandes disputas entre los poderes del Estado y bajemos al terreno de lo cotidiano. Pensemos en un ciudadano que decide emprender un pequeño negocio y que, por negarse a pagar un soborno a un funcionario municipal, sufre la clausura injusta de su local. En una democracia sana, ese ciudadano acude al juez contencioso administrativo y sabe que tiene esperanza. Pero en un sistema donde la justicia ha sido asediada y capturada por el poder político, el funcionario corrupto siempre ganará, porque el juez sabrá que castigar al leal al partido de gobierno le costará su propia carrera.

Pensemos en el agricultor al que le expropian sus tierras de forma arbitraria para un proyecto gubernamental, o en el trabajador al que despiden por no aplaudir en un mitin político. Sin tribunales independientes, la ley de la fuerza sustituye a la fuerza de la ley. La asfixia de los contrapesos institucionales, por lo tanto, no es un debate exclusivo de los abogados o de los políticos en la capital; es un asalto directo a la tranquilidad de cada familia costarricense que, sin saberlo, duerme tranquila cada noche confiando en que, si mañana sufre una injusticia, habrá un juez valiente dispuesto a escucharla.

Nos corresponde, entonces, asumir nuestra cuota de responsabilidad como sociedad civil. Defender al Poder Judicial no significa afirmar que sus magistrados son infalibles o que el sistema no requiere reformas

urgentes para ser más ágil y cercano a la gente. Significa, por el contrario, entender que la mejora de la justicia debe hacerse desde el respeto y la deliberación técnica, y nunca desde la intimidación o el estrangulamiento presupuestario. Significa tener la madurez cívica de acatar un fallo judicial adverso con serenidad, y de exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo mismo.

En nuestra Costa Rica, esa tradición de respeto por la toga ha sido uno de nuestros orgullos más hondos. Cuando miramos el mapa de América Latina y vemos repúblicas enteras sumidas en la violencia porque sus instituciones de justicia fueron cooptadas por intereses políticos o por el crimen organizado, comprendemos el valor incalculable de lo que poseemos. Nuestro Poder Judicial, con sus imperfecciones, sigue siendo un faro de resistencia técnica. Pero ese faro requiere que alimentemos su llama con nuestra convicción democrática constante.

Cuando el asedio se vuelve sistemático y el gobernante descubre que no puede someter la voluntad de los jueces, de los contralores o de los tribunales electorales mediante la asfixia económica o el insulto público, la concentración del poder se enfrenta a una encrucijada definitiva. Al chocar contra el muro inquebrantable de la legalidad, el liderazgo de corte absolutista llega a una conclusión peligrosa: si no puedo doblegar al árbitro, entonces debo cambiar el reglamento.

Es en ese instante de frustración institucional donde el poder dirige su mirada hacia la raíz misma de nuestra convivencia. Al no poder gobernar por encima de la Constitución, intentará reescribirla, saltándose los procedimientos y atacando la legitimidad del documento que nos une. Se entra, así, en un terreno oscuro donde se rechazan las reglas mismas del juego democrático.

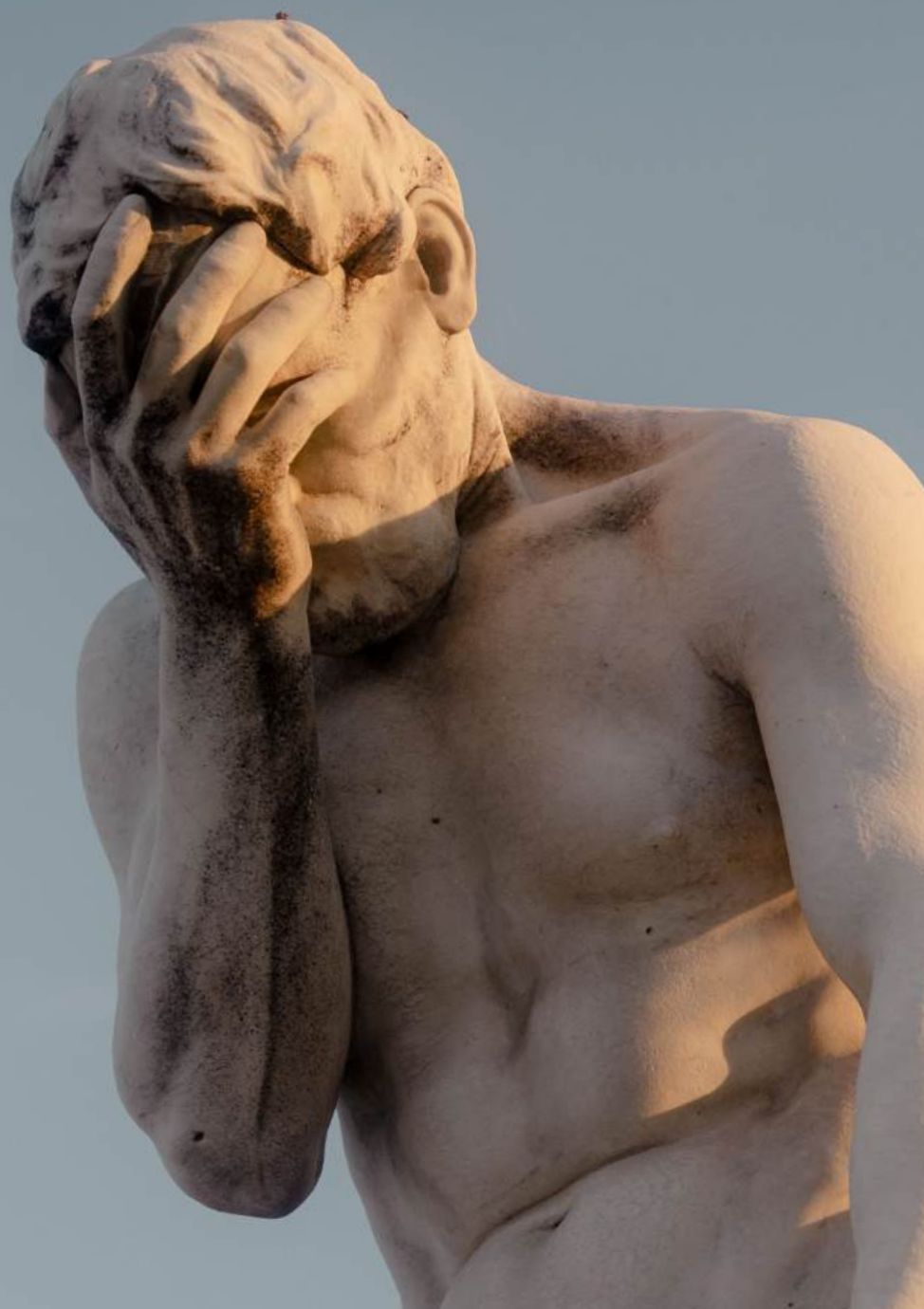
Llegamos al final de la exploración de nuestros contrapesos, para abrir la puerta al último mecanismo de esta maquinaria. Debemos analizar qué sucede cuando la ambición de gobernar cruza la frontera de las urnas y decide amenazar las bases de nuestra República. Hacia esa profunda reflexión, hacia el entendimiento de que ganar una elección no otorga

el derecho a destruir el país, nos dirigimos ahora en nuestro siguiente capítulo.

Capítulo 6

MÁS ALLÁ DE LAS URNAS

Existe un momento de profunda gravedad en la vida de toda democracia, un punto de inflexión silencioso que no se anuncia con estruendos, pero que define de manera inexorable el destino de las generaciones venideras. Ocurre cuando el instinto natural de concentrar el poder choca, de frente y sin remedio, contra el muro de la legalidad. Hasta ahora, hemos reflexionado sobre cómo los liderazgos que buscan el control absoluto intentan evadir a los guardianes del Estado: paralizan el diálogo, asfixian presupuestariamente a los entes técnicos y deslegitiman la honra de los jueces. Sin embargo, cuando el poder descubre que, a pesar de sus embates, no puede quebrar el espíritu de la ley, su siguiente movimiento es el más arriesgado de todos: intenta desacreditar y cambiar las reglas mismas del juego.



Para comprender la inmensa amenaza que esto representa para la paz de una nación, debemos primero rescatar el verdadero significado de nuestra Constitución. En la prisa de los debates políticos diarios, solemos olvidar que la Carta Magna no es un simple documento técnico, ni un conjunto de artículos áridos para el uso exclusivo de los tribunales. Es, en su esencia más íntima, el abrazo que nos dimos como sociedad después de habernos herido. Es el tratado de paz definitivo que firmaron nuestros abuelos, comprometiéndose a que en Costa Rica el poder nunca más se usaría para aplastar al que piensa distinto, y a que la razón y el acuerdo siempre reinarían sobre la fuerza y la imposición.

La Constitución es el contrato social que nos permite dormir tranquilos. Es la certeza de que, sin importar quién ocupe temporalmente la silla principal del palacio de gobierno, nuestros derechos fundamentales, nuestra libertad de opinar sin miedo y la educación de nuestros hijos estarán a salvo. Pero este noble contrato tiene una vulnerabilidad humana y dolorosa: solo funciona si todos los actores políticos, tanto los que ganan como los que pierden, están dispuestos a respetarlo, especialmente en aquellos días en los que las reglas les impiden hacer su voluntad de manera inmediata.

El asedio final a una República comienza cuando un liderazgo, frustrado por la lentitud de los procesos democráticos y por los límites naturales de su mandato, empieza a sembrar en la ciudadanía el desprecio por ese pacto social. El estudio de los colapsos institucionales a lo largo de la historia nos muestra que este rechazo a las reglas nunca se presenta de frente como un ataque a la libertad; por el contrario, suele disfrazarse con los ropajes brillantes del progreso y la valentía. Desde las tribunas del poder, se empieza a instalar el relato de que las leyes actuales son una trampa, un chaleco de fuerza obsoleto diseñado por los corruptos del pasado para evitar que el nuevo líder pueda salvar a la patria.

Se le argumenta al ciudadano, apelando hábil y compasivamente a sus necesidades más urgentes, que la Constitución es un estorbo. “Para avanzar y darles las soluciones que merecen”, se pregona, “debemos refundar el país y barrer con estas ataduras legales”. Es en esta encrucijada donde la

sociedad enfrenta su mayor prueba de madurez cívica. Es profundamente legítimo, e incluso vital, que las naciones debatan y actualicen sus leyes para adaptarse a los retos del siglo veintiuno. Sin embargo, existe una frontera ética insalvable entre proponer una reforma meditada para fortalecer la convivencia, y desconocer la legitimidad de la ley simplemente porque esta le pone frenos a la ambición de quien gobierna.

Cuando el poder de turno trata a la Constitución como si fuera un borrador desechable, rompe la confianza que sostiene el andamiaje de la nación. Le enseña a la sociedad una lección devastadora: que las reglas solo deben respetarse cuando nos favorecen. Si el máximo representante del Estado insinúa constantemente que la ley suprema es ilegítima o absurda, ¿con qué autoridad moral le pedirá mañana al ciudadano común que pague sus impuestos, que respete las normas de convivencia o que honre sus deudas? La destrucción del respeto por la ley, cuando se promueve desde las más altas cumbres del poder, genera una cascada de cinismo que termina por envenenar las relaciones humanas en todos los rincones del país.

Este rechazo a las reglas del juego suele encontrar su justificación principal en una de las falacias más extendidas de nuestro tiempo: la creencia de que ganar una elección otorga un permiso ilimitado y absoluto para hacer y deshacer. Hacia esa ilusión óptica, y hacia la verdad ineludible de que la democracia es mucho más que el simple acto de abrir las urnas cada cuatro años, debemos dirigir ahora nuestra atención.

Para justificar el dismantelamiento de los contrapesos constitucionales y el rechazo a las reglas del juego, los liderazgos de vocación autoritaria suelen refugiarse detrás de un escudo que, a simple vista, parece impenetrable: el mandato de las urnas. Desde las tribunas del poder, se le repite a la ciudadanía una premisa que suena peligrosamente lógica: “Fuimos elegidos por la mayoría del pueblo; por lo tanto, cualquier institución, ley o juez que se oponga a nuestra voluntad, se está oponiendo a la democracia misma”.

Esta afirmación esconde una de las falacias más seductoras y destructivas de la historia política contemporánea: la ilusión de creer que celebrar elecciones es, por sí solo, sinónimo de vivir en una democracia plena.

El acto de votar es, sin duda, el ritual fundacional de cualquier sociedad libre. Es el momento sagrado en el que todos los ciudadanos, sin distinción de riqueza, educación o abolengo, valemos exactamente lo mismo frente a la urna de cartón. Pero la historia universal nos ha demostrado, con un rastro de lágrimas innegable, que las elecciones son una condición necesaria, pero jamás suficiente. Un país puede abrir sus centros de votación de manera impecable cada cuatro años y, sin embargo, estar vaciándose por dentro.

Si el ciudadano deposita su papeleta el domingo, pero el lunes amanece en un país donde la prensa independiente es asfixiada; donde los jueces fallan con miedo a las represalias del gobierno; donde las minorías son aplastadas por el desprecio oficial y donde las leyes se cambian al antojo del gobernante, entonces esa sociedad no vive en libertad. Vive en un sistema donde el autoritarismo ha aprendido a legitimarse mediante el ritual del sufragio.

Es en este punto de nuestra reflexión donde nos encontramos, de frente y sin intermediarios, con el verdadero núcleo de nuestra convivencia cívica: el Reto de la Palabra.

Solemos pensar que la democracia es el acto de votar, pero en realidad, la democracia es todo lo que ocurre en los mil cuatrocientos sesenta días que transcurren entre una elección y otra. Y durante esos cuatro años, el vehículo que sostiene la paz, el único instrumento que evita que nos destruyamos los unos a los otros, es la palabra.

La Constitución Política no es otra cosa que nuestra palabra empeñada. Es la palabra escrita de nuestros abuelos, quienes, tras conocer el dolor de la violencia, redactaron un pacto para garantizarnos que el poder siempre tendría límites. Cuando un gobernante desprecia la Constitución, cuando sugiere que las reglas del juego son un simple borrador que él puede borrar y reescribir a su antojo porque “ganó las elecciones”, lo que está haciendo en realidad es pisotear el valor de la palabra compartida. Está rompiendo la promesa fundamental que nos hace nación.

Pero el reto de la palabra no se limita al respeto por los textos legales; vive y respira en el ejercicio cotidiano del diálogo. Cuando a un líder se le otorgan los votos para gobernar, no se le entrega un título de propiedad sobre el país.

Ganar una elección no es adquirir una hacienda donde el presidente es el capataz y los ciudadanos son los peones; ganar una elección es recibir, temporalmente, las llaves de una casa que nos pertenece a todos. Y en esa casa común habitan millones de personas que no votaron por el ganador, cuyas voces, miedos y esperanzas tienen exactamente el mismo derecho a ser escuchadas.

El líder con convicciones profundamente republicanas asume su victoria sabiendo que su mayor deber es gobernar a través de la persuasión, el debate y la escucha. Entiende que el reto de la palabra implica sentarse con el adversario, reconocer la validez de sus argumentos y tener la humildad de ceder cuando el bienestar de

la patria así lo exige. En contraste, el líder seducido por el absolutismo interpreta su victoria como un cheque en blanco para silenciar a los demás. Sustituye la palabra compartida por el monólogo estridente. Ya no debate; dicta. Ya no persuade; impone. Ya no conversa con los ciudadanos; les grita desde un pedestal, convencido de que su voz es la única que tiene el derecho a resonar en el espacio público.

Cuando la política abandona el reto de la palabra y se refugia en la tiranía de la mayoría, el pacto social comienza a desintegrarse. Si a los sectores que quedaron en minoría —ya sean grupos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales o minorías sociales— se les niega sistemáticamente el derecho a influir en las decisiones del país, si se les cierra la puerta del diálogo y se les insulta por pensar distinto, la frustración ciudadana se acumula como el agua detrás de una represa agrietada. Una sociedad donde la palabra pierde su valor como puente, y donde el gobierno se comunica únicamente a través de la amenaza o la burla, es una sociedad condenada, tarde o temprano, al estallido.

Debemos recordar siempre la inmensa sabiduría de la alternancia democrática. La rueda de la historia nunca se detiene. Quienes hoy ostentan la mayoría abrumadora y disfrutan de la embriaguez del poder,

mañana serán oposición. Quienes hoy exigen que se eliminen los frenos constitucionales para poder avanzar más rápido, serán los primeros en llorar la ausencia de esos mismos frenos cuando sus adversarios ocupen la silla presidencial. Proteger las reglas del juego y defender el respeto irrestricto por la palabra del otro, no es un acto de debilidad frente al gobernante de turno; es el seguro de vida que compramos hoy para garantizar nuestra propia libertad en el futuro.

La democracia costarricense no se fundó sobre la base de hombres infalibles, ni sobre la ilusión de liderazgos mesiánicos que venían a refundar la patria a punta de decretos. Se fundó sobre el reconocimiento humilde de que todos podemos equivocarnos, y de que, precisamente por eso, necesitamos hablar entre nosotros, controlarnos mutuamente a través de las instituciones y respetar el pacto escrito que nos heredaron nuestros mayores.

Ceder ante la tentación de ignorar la Constitución simplemente porque el líder de turno nos agrada o porque nos promete soluciones inmediatas, es cambiar el oro de nuestra libertad por los espejismos de una promesa fugaz. Es renunciar al reto de la palabra, para someternos al silencio de la obediencia.

Y es aquí, al llegar al clímax de esta maquinaria de concentración de poder, cuando hemos visto cómo se intenta asfixiar el control, doblegar a los jueces y reescribir las reglas, donde debemos hacer un alto en nuestro camino. Si hemos descrito con tal crudeza las amenazas que se ciernen sobre nuestras instituciones, no ha sido para sembrar el desaliento, sino para despertar la conciencia. Porque el poder, por más concentrado que parezca, nunca es absoluto si un pueblo decide recordar su propia historia.

Para cerrar esta profunda reflexión sobre las maquinarias del Estado y prepararnos para entender las heridas sociales que las alimentan, debemos observar el horizonte con esperanza y plantearnos la pregunta fundamental:

¿Cómo resiste una República cuando las reglas del juego están bajo fuego?

Recorrer los oscuros pasillos por donde transita la concentración del poder puede dejarnos una profunda sensación de zozobra. Ante un panorama donde el Estado parece transformarse en una herramienta al servicio de unos pocos, la tentación más grande que enfrenta el ciudadano común es la resignación. Podríamos llegar a pensar que la batalla por las instituciones está perdida y que frente al peso del poder absoluto, la voz del individuo es apenas un susurro inútil en medio de la tormenta.

Sin embargo, la historia de las naciones libres nos enseña una lección maravillosa: las repúblicas no mueren cuando sus gobernantes intentan dismantelarlas; mueren únicamente cuando sus ciudadanos aceptan, en silencio, ese dismantelamiento. La verdadera fortaleza de una democracia no está construida con los ladrillos del parlamento, ni con el mármol de los tribunales de justicia. La fortaleza inexpugnable de un país reside en la reserva moral de su pueblo, en esa memoria cívica que late en el fondo del corazón de cada habitante.

Y si hay algo que el pueblo costarricense posee en abundancia, es precisamente esa memoria. No somos una nación que haya forjado su identidad en el culto a la guerra, ni en la sumisión ciega a los caudillos iluminados. Nuestro ADN cívico se construyó en las aulas de las escuelas, en las urnas electorales y en la firme creencia de que nadie es superior a la ley. A lo largo de nuestra historia, cuando las nubes del autoritarismo han amenazado con oscurecer nuestro cielo, el costarricense no ha recurrido a la violencia para defenderse; ha recurrido a la razón, al derecho y a la fuerza inquebrantable de la palabra.

Resistir cuando las reglas del juego están bajo fuego no exige de nosotros actos épicos e inalcanzables. La defensa de la República es, ante todo, un acto cotidiano. Resistimos cada vez que nos negamos a repetir un insulto en las redes sociales. Resistimos cuando le enseñamos a nuestros hijos que la honradez tiene valor, incluso si ven que en las altas esferas reina la impunidad. Resistimos cuando apoyamos al periodista valiente, al juez

independiente y al funcionario público que se niega a firmar un acto de corrupción. Cada vez que un ciudadano elige el diálogo constructivo por encima de la polarización destructiva, está colocando una piedra más en el muro que detiene el avance del autoritarismo.

Pero nuestro análisis de la maquinaria del poder estaría dramáticamente incompleto —y pecaríamos de una arrogancia intelectual imperdonable— si limitáramos nuestro esfuerzo únicamente a defender la teoría constitucional, ignorando el dolor que habita en las calles. Si queremos que el reto de la palabra triunfe, debemos mirar con la más profunda honestidad y compasión hacia el origen mismo de nuestra crisis.

Debemos hacernos una pregunta ineludible: ¿Por qué un pueblo con una tradición democrática tan hermosa como la nuestra comienza a coquetear con salidas populistas? ¿Por qué millones de compatriotas están dispuestos a escuchar a quienes les prometen soluciones de fuerza, aplaudiendo el desprecio por los tribunales y las leyes?

La respuesta no radica en la ignorancia de nuestra gente. Ningún pueblo renuncia voluntariamente a sus libertades por capricho. Lo hace empujado por un dolor insoportable, por un agotamiento profundo y por la sensación de que el Estado democrático ha roto su promesa más sagrada. La Constitución nos promete igualdad, justicia y bienestar, pero para cientos de miles de costarricenses, esa promesa se ha convertido en letra muerta.

No podemos pedirle al ciudadano que defienda con devoción el diseño de los poderes del Estado, si en su barrio el crimen organizado y el narcotráfico han sustituido la autoridad de la policía, dictando a qué hora deben encerrarse las familias en sus casas. No podemos exigirle a una madre que comprenda la lentitud de los procesos burocráticos institucionales, cuando lleva décadas esperando una vivienda digna mientras sus hijos crecen en la exclusión urbana. Es imposible pedirle paciencia democrática al adulto mayor que siente cómo su pensión se evapora, o al paciente que hace fila desde la madrugada en una clínica, soportando el dolor, porque el sistema de salud que alguna vez fue nuestro orgullo hoy se encuentra

desbordado. Y es profundamente injusto pedirle a la juventud que confíe en el debate legislativo, cuando el sistema educativo nacional ha dejado de ser la escalera de la movilidad social para convertirse en una fábrica de desigualdades.

Aquí radica el verdadero peligro para nuestra nación.

El populismo y la concentración de poder no nacen de la nada; son los síntomas de una enfermedad mucho más profunda. Son el grito de desesperación de un tejido social fracturado.

El hambre, el miedo, la desigualdad y la falta de oportunidades son los combustibles sociales más potentes que existen para incendiar la pradera de la democracia.

Durante demasiado tiempo, las élites políticas y los defensores de las instituciones cometieron el error de creer que la democracia se sostenía únicamente con buenas leyes y procesos electorales limpios. Olvidaron que la libertad, para que sea real y se arraigue en el corazón del pueblo, requiere un sustento material. Un Estado de derecho que no es capaz de garantizar la seguridad en las calles, el pan en la mesa y la dignidad en los hospitales, es un Estado de derecho que, tarde o temprano, será repudiado por sus propios ciudadanos.

Si hemos de salvar nuestras reglas del juego, si hemos de proteger los contrapesos y restaurar la autoridad moral de nuestras instituciones, la respuesta no puede limitarse a la defensa de la teoría jurídica. El verdadero reto que tenemos por delante es reconstruir la promesa social de Costa Rica. Debemos salir de los palacios de gobierno y de los salones de los tribunales, para adentrarnos en los territorios donde la vida duele.

Es momento de dejar atrás el análisis de los mecanismos del poder y enfrentar, con valentía y urgencia, las heridas abiertas de nuestra patria. Porque la democracia costarricense no se salvará en los discursos, se salvará cuando logremos devolverle a cada ciudadano la certeza de que

este país, con sus leyes y sus instituciones, es el único hogar capaz de garantizar el bienestar de su familia.

Hacia esas deudas históricas, hacia la violencia que nos arrebató la paz, hacia la exclusión que nos divide y hacia los inmensos retos de la salud y la educación, dirigimos ahora nuestro caminar. Solo comprendiendo la profundidad de estos combustibles sociales, podremos encontrar el agua necesaria para apagar el fuego y reconstruir, juntos, la casa de todos.

Capítulo 7

EL TERRITORIO FRACTURADO

Ninguna democracia puede sobrevivir sostenida únicamente en el aire de los discursos; requiere, de manera ineludible, echar raíces en el suelo físico que habitan sus ciudadanos. Cuando reflexionamos sobre el pacto social que nos mantiene unidos, solemos pensar en leyes, en elecciones y en tribunales, pero olvidamos con demasiada frecuencia que ese pacto tiene una dimensión material de cemento, tierra y asfalto. La promesa de la igualdad ante la ley pierde todo su significado si, al salir de la urna de votación, el ciudadano regresa a una geografía que lo margina y lo asfixia. Es en el territorio, en la forma en que planificamos nuestras ciudades y albergamos a nuestras familias, donde la República experimenta su primera y más dolorosa fractura.



Durante décadas, permitimos que el país creciera a dos velocidades. Mientras ciertas zonas concentraban la inversión, la infraestructura y el progreso, una inmensa parte de la población fue empujada hacia las periferias y los márgenes. Nuestra propia realidad nos devuelve un reflejo implacable: enfrentamos un déficit habitacional de más de ciento cincuenta mil viviendas, condenando a miles de familias a sobrevivir en condiciones de hacinamiento estructural, sin acceso a los servicios más elementales. En nuestra región metropolitana, proliferan cientos de asentamientos informales donde habitan multitudes de compatriotas. Esta exclusión no es un simple accidente del destino ni un castigo inevitable; es la consecuencia directa de una omisión institucional profunda. La ausencia crónica de planes reguladores actualizados en la inmensa mayoría de nuestros cantones ha provocado que el crecimiento urbano se rija por la inercia, y no por la búsqueda del bienestar común. Al no existir una política que reserve suelo bien ubicado y accesible, las familias de menores ingresos se ven forzadas a levantar sus hogares en laderas inestables o en los márgenes de los ríos, alejados de las fuentes de empleo digno y del transporte adecuado. Hemos levantado muros invisibles en nuestras ciudades. Y cuando el Estado renuncia a ordenar el territorio, creando vacíos de autoridad y de esperanza, otras fuerzas se apresuran a ocupar ese espacio.

Es imposible entender la crisis de seguridad que hoy nos desgarrar sin observar primero el abandono de esos territorios. Costa Rica, con su posición geográfica estratégica y su infraestructura portuaria moderna, ha pasado a convertirse en un centro logístico regional para el tránsito internacional de drogas. Sin embargo, estas poderosas redes transnacionales no habrían podido operar con tanta eficacia y letalidad si no hubieran encontrado un ejército de reserva dispuesto a nutrir sus filas: nuestros propios jóvenes, criados en esos asentamientos donde la promesa de la movilidad social nunca llegó.

Para un muchacho que crece rodeado de escasez, observando el agotamiento de sus padres y sintiéndose invisible para el sistema, el narcotráfico no representa únicamente una fuente de ingresos rápidos. Le ofrece algo mucho más seductor: le otorga un falso sentido de pertenencia, identidad y, sobre todo, una autoridad inmediata en su

cuadra que el Estado fue incapaz de brindarle. Las consecuencias de esta infiltración se escriben hoy con una violencia que nos paraliza. El país ha visto cómo las cifras de homicidios rompen récords históricos año tras año, impulsadas abrumadoramente por las disputas territoriales entre estructuras criminales organizadas. La violencia dejó de ser una noticia excepcional para convertirse en el paisaje cotidiano de provincias enteras. Y es precisamente aquí, en medio del duelo y la sangre, donde el dolor social muta hasta convertirse en el combustible más inflamable para el autoritarismo.

El ciudadano que debe enterrar a sus muertos, el comerciante que trabaja bajo el yugo de la extorsión o la madre que teme por la vida de sus hijos cada vez que cruzan la puerta, no tiene espacio emocional para debatir sobre la pureza de la división de poderes. El miedo cotidiano exige certezas inmediatas. Frente a la angustia incesante de la balacera, la promesa de una “mano dura” implacable se vuelve irresistible para las mayorías. En su desesperación por recuperar el derecho elemental a caminar en paz, la sociedad comienza a ver los contrapesos institucionales —la independencia judicial, los debidos procesos, las defensorías— no como escudos que protegen su libertad, sino como obstáculos burocráticos que protegen al delincuente.

Este es el triunfo más perverso de la criminalidad sobre la República: logra convencer a un pueblo aterrorizado de que, para poder estar seguro, su única opción es entregar sus libertades y concentrar el poder en manos de quien prometa limpiar las calles a cualquier costo.

Cuando el miedo camina por nuestras aceras y la violencia altera el pulso de las comunidades, la democracia se enfrenta a su prueba psicológica más severa. El ciudadano común, abrumado por una zozobra que amenaza su tranquilidad y la de su familia, exige, con justa razón, respuestas inmediatas. La angustia no sabe esperar los tiempos pausados que requieren las verdaderas reformas estructurales. En ese clima de urgencia colectiva, el sistema político, ansioso por demostrar autoridad frente a un electorado asustado, suele ceder a la tentación más antigua del poder: ofrecer la ilusión de la fuerza implacable como la única respuesta frente a problemas que

son profundamente complejos.

A lo largo de la historia, cuando las naciones atraviesan estos umbrales de inseguridad, el éxito del Estado tiende a medirse peligrosamente por la severidad de sus castigos antes que por su capacidad de sanar el tejido social. Comienza a instalarse la creencia de que el simple endurecimiento de las penas o la edificación de prisiones cada vez más imponentes bastarán, por sí solas, para disuadir a quienes han hecho del crimen su modo de vida. Es un reflejo humano y profundamente comprensible buscar símbolos de orden frente al caos, pero reducir la política de seguridad a una carrera por ver quién impone los castigos más severos, ignorando el rescate de las comunidades y la prevención, es intentar curar una enfermedad estructural combatiendo únicamente sus síntomas.

Detrás de esta ilusión de control absoluto, se esconde una falla de diagnóstico profunda. Castigar el delito con la máxima firmeza es un deber irrenunciable de cualquier Estado de derecho, pero creer que el punitivismo por sí solo resolverá la crisis es no entender la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentamos.

Las redes del crimen organizado que operan hoy en nuestro territorio no son simples pandillas juveniles motivadas por la rebeldía; son corporaciones transnacionales inmensamente rentables y sofisticadas. Operan con lógicas de mercado, miden riesgos, optimizan rutas y, sobre todo, cuentan con un presupuesto que supera, por mucho, los recursos de nuestras instituciones de seguridad. Cuando el Estado logra desarticular a un cabecilla o cuando encierra a docenas de sicarios en una megacárcel, no está destruyendo la organización; simplemente está creando vacantes en un negocio millonario. Y mientras existan jóvenes en nuestras periferias marginadas sin opciones de vida digna, el narcotráfico nunca tendrá problemas para reclutar reemplazos dispuestos a morir por ocupar esos puestos vacíos.

La mano dura es, en el mejor de los casos, una contención temporal, un torniquete aplicado sobre una herida abierta. Pero si no tratamos la infección profunda —la desigualdad, la exclusión y la falta de

oportunidades— el paciente terminará sucumbiendo.

Más grave aún es el costo oculto que esta urgencia por la firmeza punitiva impone sobre la cultura cívica de cualquier República. En la desesperación legítima por encontrar soluciones rápidas frente a la criminalidad, comienza a germinar en la opinión pública una idea sumamente peligrosa: la sospecha de que los derechos humanos, los procesos judiciales imparciales y las reglas de fiscalización son, en realidad, escudos diseñados para proteger a quienes delinquen. Cuando el miedo colectivo dicta la pauta del debate nacional, la paciencia democrática se agota, y la sociedad misma empieza a ver al juez que exige pruebas irrefutables, o a la institución técnica que audita los fondos de seguridad, no como los guardianes de la libertad de todos, sino como obstáculos incomprensibles que retrasan la paz prometida.

La trampa es de una sutileza aterradora. En nombre de la seguridad, el ciudadano empieza a consentir el desmantelamiento de los mismos contrapesos que lo protegen a él. El país entero cede, pedazo a pedazo, su libertad, sin advertir que las leyes excepcionales y los poderes ilimitados que hoy se le otorgan al gobernante para combatir al narcotraficante, son exactamente las mismas herramientas institucionales que mañana, bajo otro gobierno o bajo el mismo convertido en tiranía, podrán ser utilizadas para silenciar al adversario político, encarcelar al periodista crítico o reprimir al ciudadano que protesta pacíficamente. El dique institucional, una vez roto para dejar pasar la urgencia punitiva, no puede ser reconstruido a voluntad cuando la amenaza cambia de rostro.

Pero el daño que el crimen organizado le inflige a la sociedad costarricense no se agota en la violencia homicida ni en la tentación autoritaria que esta despierta. Hay una segunda forma de destrucción, mucho más silenciosa, que no requiere de balas ni de sangre, y que opera corroyendo las bases mismas de nuestra convivencia económica y comunitaria. Es la penetración del dinero ilícito en las entrañas de nuestros barrios y en la economía formal.

Cuando el Estado fracasa en planificar el territorio y en ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos, el narcotráfico asume el rol de proveedor y prestamista. En muchas de nuestras comunidades más vulnerables, el crédito fácil y rápido ya no lo otorga la banca nacional; lo otorga el usurero vinculado a las redes criminales. Si una madre soltera necesita dinero de emergencia para comprar los útiles escolares de sus hijos o reparar el techo de su humilde vivienda, y las instituciones formales le cierran las puertas por no tener un salario estable, terminará acudiendo al préstamo informal. Ese dinero, que parece un salvavidas en medio de la tormenta, se convierte rápidamente en una cadena de esclavitud, cobrado bajo amenazas de muerte y sometiendo a la familia entera al terror.

A una escala mayor, observamos cómo los inmensos recursos generados por el tránsito logístico de la droga buscan desesperadamente blanquearse en la economía legal. Negocios que aparecen de la noche a la mañana, inversiones inmobiliarias inexplicables y empresas de fachada comienzan a proliferar. Esto no solo constituye un delito financiero; destruye la ética del trabajo honesto. ¿Cómo le explicamos al pequeño emprendedor costarricense, que se esfuerza diariamente por pagar sus impuestos, cumplir con la seguridad social y competir lealmente, que su vecino está prosperando sin esfuerzo porque cuenta con el respaldo de capitales oscuros? La inyección de dinero sucio distorsiona los precios, asfixia al empresario legítimo y le grita a la juventud que el camino del esfuerzo pausado y honesto es el camino de los perdedores.

Esta doble pinza —la violencia que aterroriza en las calles y el dinero ilícito que corrompe la economía y compra voluntades— somete a las instituciones locales a una presión que nunca antes habían experimentado. Pensemos en las municipalidades, que deberían ser el primer frente de batalla para planificar el crecimiento ordenado y llevar dignidad a los asentamientos informales. Frente a la capacidad financiera y de intimidación del crimen organizado, los gobiernos locales se encuentran a menudo desbordados. Un funcionario municipal que intenta hacer cumplir las regulaciones o un regidor que se opone a un proyecto financiado con capitales de origen dudoso, sabe que está arriesgando su vida y la de su familia.

La respuesta nacional a esta crisis no puede seguir siendo la simple indignación reactiva. Si queremos que el “Reto de la Palabra” vuelva a tener sentido en Costa Rica, debemos comprender que ninguna sociedad aterrorizada puede dialogar de manera constructiva. El miedo es el enemigo absoluto de la democracia, porque el miedo aísla, silencia y divide.

La superación de esta fractura no se logrará únicamente desde los despachos policiales. El combate frontal al crimen organizado, la inversión en inteligencia, la profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad y la severidad en las penas son absolutamente imprescindibles, pero representan solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la más difícil y la única capaz de garantizar la paz a largo plazo, requiere que el Estado vuelva a ocupar el territorio que abandonó.

Significa entender que la política de vivienda no es simplemente un asunto de entregar bonos y construir casas en las periferias más alejadas, sino un desafío de integración urbana que debe reconectar a las familias con la ciudad, con el transporte público y con las oportunidades laborales. Significa aceptar que un plan regulador no es un trámite burocrático, sino el pacto espacial que garantiza que el desarrollo económico no ocurra a expensas de la exclusión de los más débiles.

El crimen organizado nos ha declarado una guerra que va mucho más allá del control de las rutas del narcotráfico; es una guerra por el control del tejido social costarricense. Para ganarla, debemos demostrarle a cada niño y a cada joven de este país, sin importar el código postal donde haya nacido, que la democracia no es un discurso vacío de los políticos en San José. Debemos demostrarles que nuestras leyes y nuestras instituciones tienen la capacidad real de protegerlos, de educarlos y de ofrecerles un camino digno, un camino que sea infinitamente más atractivo y seguro que la falsa promesa de las armas. Si fracasamos en esa tarea, ninguna cárcel, por inmensa que sea, será suficiente para contener el dolor de nuestro fracaso.

Para comprender a cabalidad por qué la semilla de la desilusión democrática ha encontrado una tierra tan fértil en nuestro país, es imprescindible que bajemos la mirada desde las abstracciones del poder político hacia el suelo físico que pisamos todos los días. La democracia no es únicamente un sistema de votaciones o un entramado de leyes; es, antes que cualquier otra cosa, una forma de convivencia. Y esa convivencia requiere un espacio, un territorio compartido donde los ciudadanos puedan encontrarse, reconocerse y vivir con dignidad. Sin embargo, cuando observamos la geografía de nuestras ciudades, lo que descubrimos no es el reflejo de un pacto social igualitario, sino el mapa de una profunda y dolorosa fractura.

A lo largo de las últimas décadas, amparados en el espejismo de un crecimiento macroeconómico que brillaba en los informes internacionales, permitimos que nuestra casa común se dividiera. Por un lado, se consolidó una Costa Rica próspera, conectada a los mercados globales, con desarrollos inmobiliarios de vanguardia y servicios de primer mundo. Por el otro, de manera silenciosa pero implacable, fue creciendo una Costa Rica olvidada, empujada hacia las periferias y los márgenes de nuestras zonas urbanas. Hoy, la frialdad de las estadísticas nos revela una herida que no podemos seguir ignorando: nuestro país arrastra un déficit de más de ciento cincuenta mil viviendas, condenando a un sector inmenso de la población a la carencia absoluta de un techo o a sobrevivir en condiciones de hacinamiento, con estructuras precarias y sin los servicios más elementales que exige la dignidad humana.

Esta realidad resulta particularmente desgarradora en el corazón mismo del país. La Región Central, que alberga a más del sesenta por ciento de nuestra población y que funciona como el motor económico de la nación, es también el escenario de nuestra mayor deuda social: concentra casi dos tercios de todos los asentamientos informales del territorio nacional. Hablamos de más de trescientos precarios, donde habitan hacinadas más de ciento veinte mil personas, y que, paradójicamente, constituyen la zona que menos apoyo proporcional ha recibido de los programas estatales de vivienda durante la última década.

Detrás de estas cifras no hay un castigo de la naturaleza ni una fatalidad inevitable. Lo que hay es una abdicación histórica del Estado en su

deber fundamental de ordenar y planificar el territorio. La proliferación de estos asentamientos invisibles es el síntoma de una parálisis técnica e institucional severa: de los ochenta y cuatro cantones que conforman nuestra geografía, casi la mitad carece de planes reguladores vigentes, y muchos de los que existen han quedado dolorosamente obsoletos frente a la velocidad del crecimiento poblacional.

Cuando un Estado renuncia a planificar sus ciudades, entrega el destino de sus habitantes más vulnerables a la inercia implacable del mercado. Y la lógica del mercado del suelo es de una dureza aritmética: el metro cuadrado en las zonas urbanas céntricas, cerca de las fuentes de empleo, de los hospitales y de las rutas principales de transporte, alcanza precios prohibitivos que resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de las familias trabajadoras. Ante la imposibilidad de acceder a la ciudad formal, el ciudadano de escasos recursos no desaparece; simplemente es expulsado hacia los márgenes. Se ve forzado a levantar sus paredes de lata y madera en las laderas inestables de las montañas o en los cauces peligrosos de los ríos, porque esos terrenos descartados por el desarrollo formal son los únicos que su pobreza le permite habitar.

Es en estas coordenadas de exclusión donde debemos buscar el verdadero combustible del descontento ciudadano. Pensemos en la madre de familia que habita en uno de estos asentamientos no planificados. Su jornada comienza en la madrugada, caminando por callejones sin asfaltar ni iluminación, para tomar múltiples autobuses que la llevarán a limpiar oficinas en el centro de la ciudad. Vive con la angustia constante de que la próxima tormenta se lleve su casa, o de que sus hijos sean reclutados por las redes del narcotráfico que han encontrado en su barrio el refugio perfecto ante la ausencia del Estado.

Para esta madre, el histórico Bono Familiar de Vivienda —que durante generaciones fue un orgullo nacional y un motor de equidad— se ha convertido en un laberinto burocrático casi indescifrable. El diseño original de nuestras políticas habitacionales fue exitoso para una época más sencilla, pero hoy choca contra una realidad urbana infinitamente más compleja: el encarecimiento del suelo, la expansión del alquiler informal y la necesidad urgente de adaptar las comunidades al cambio climático.

La arquitectura institucional encargada de velar por este derecho se ha fragmentado, diluyendo las responsabilidades entre múltiples entidades sin una rectoría clara, dejando a miles de familias atrapadas en listas de espera que parecen no avanzar jamás.

Como bien lo han advertido nuestras instituciones de defensa ciudadana, entregar una casa no es lo mismo que construir una ciudad. Un techo de interés social pierde su propósito liberador si se construye en un lote aislado a decenas de kilómetros de donde se encuentra el trabajo, la escuela o el centro de salud, condenando a sus habitantes a la pobreza de tiempo y perpetuando el ciclo de la marginación.

Y es aquí donde la crisis urbana se funde, de manera inquebrantable, con la crisis democrática. Cuando un problema estructural de esta magnitud se arrastra de gobierno en gobierno sin encontrar una solución integral, la frustración se acumula en el alma de los excluidos. Una familia que lleva veinte años esperando que el Estado resuelva su situación habitacional, mientras observa cómo los discursos políticos van y vienen sin alterar un centímetro de su realidad, termina por perder la fe en las instituciones democráticas.

La incapacidad crónica para planificar la ciudad y garantizar el derecho a un entorno seguro abona el terreno para la antipolítica. Al ciudadano que se siente abandonado por el sistema tradicional, que vive marginado de la prosperidad que ve en las pantallas, la idea de dismantelar los

contrapesos institucionales no le genera terror. Por el contrario, cuando aparece un liderazgo que le ofrece romper las reglas del juego, saltarse la burocracia y prometerle, con la fuerza de una consigna, la dignidad inmediata que el Estado le ha negado durante décadas, ese ciudadano estará dispuesto a entregarle su confianza absoluta.

El autoritarismo nunca entra por la puerta principal de las repúblicas prósperas e igualitarias; se filtra, silenciosamente, por las grietas de la desigualdad urbana

Sanar el territorio fracturado de nuestra patria es, por lo tanto, una misión de rescate democrático. Requiere que dejemos de ver el ordenamiento territorial como un frío asunto de permisos municipales, para entenderlo como el diseño mismo de nuestra paz social. Significa comprender que la verdadera seguridad ciudadana no se alcanza únicamente construyendo muros más altos alrededor de los barrios acomodados, sino derribando los muros invisibles de la exclusión y volviendo a integrar a nuestras periferias al tejido vital de la nación.

Sin embargo, el derecho a una vivienda digna y a una comunidad segura es apenas el cimiento sobre el cual se levanta el proyecto de vida de cualquier ser humano. Una vez que aseguramos el techo, la mirada de la sociedad debe dirigirse hacia las herramientas que permiten que el individuo prospere, se desarrolle y viva sin el temor al desamparo en la enfermedad o en la vejez. Y es al posar nuestra mirada sobre esos pilares fundamentales del pacto social costarricense donde descubrimos que el asedio no se limita a nuestras instituciones políticas ni a nuestros barrios olvidados.

El desgaste silencioso que amenaza a nuestra República ha comenzado a carcomer también las grandes conquistas del Estado social de derecho. El hospital público que solía abrazarnos en el dolor, el aula escolar que representaba la promesa inquebrantable de la movilidad social para el hijo del trabajador, y el fondo de retiro que garantizaba el descanso tras una vida de esfuerzo, se encuentran hoy sometidos a tensiones estructurales que amenazan con desdibujar la esencia misma de nuestra identidad nacional.

Para comprender la magnitud de la tormenta perfecta que se cierne sobre nosotros y el desencanto que alimenta la polarización de nuestros días, debemos, ineludiblemente, adentrarnos en las grietas de esos tres santuarios de la dignidad costarricense: la salud, la educación y las pensiones. Hacia ese diagnóstico doloroso, pero indispensable para la sanación de nuestra patria, encaminamos ahora nuestros pasos.

Capítulo 8

EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO SOCIAL

Los invito a hacer un pequeño ejercicio de memoria, uno que apela a lo más íntimo de nuestra identidad. Piensen por un momento en sus abuelos. Piensen en la tranquilidad con la que aquella generación enfrentaba el horizonte, sabiendo que, sin importar cuán humilde hubiera sido su salario, el país les tenía reservada una red invisible de protección. Esa red no era un regalo del cielo; era el Estado social de derecho. En Costa Rica, acordamos hace décadas que el acceso a un médico, el derecho a un pupitre escolar y la garantía de una vejez digna no serían privilegios reservados para quien pudiera comprarlos, sino derechos sagrados por el simple hecho de haber nacido en esta tierra.

Ese fue nuestro verdadero milagro.



Pero, les pregunto con la mayor franqueza: cuando ustedes miran hoy hacia su propio futuro, o hacia el de sus hijos, ¿sienten esa misma tranquilidad?

Si la respuesta que asoma a su mente es un nudo en el estómago, usted no está solo. Ese miedo es el síntoma más claro de que las tres grandes columnas que sostenían nuestra paz social —las pensiones, la educación y la salud pública— están sufriendo un desgaste estructural profundo. Y el peligro mayor no reside únicamente en que estas columnas se agrieten, sino en la forma en que la política contemporánea, seducida por el aplauso fácil y la confrontación de corto plazo, ha decidido enfrentar —o más bien, ignorar— este colapso.

Detengámonos primero en el reloj de arena que marca nuestro futuro más ineludible:

EL SISTEMA DE PENSIONES

Imaginemos el fondo de jubilaciones como una gran balanza comunitaria. En un extremo, colocamos el dinero que aportan los trabajadores activos; en el otro, el dinero que reciben quienes ya descansan tras una vida de labor. En la década de 1970, esa balanza era un prodigio de estabilidad: por cada costarricense que disfrutaba de su pensión, había treinta trabajadores activos cotizando mes a mes. Hoy, les ruego que presten atención a esta cifra, esa proporción ha caído drásticamente a apenas cinco trabajadores por cada pensionado. Y la matemática demográfica, que es sorda a los discursos políticos, nos advierte que hacia mediados de siglo esa cifra podría desplomarse a menos de tres cotizantes por cada jubilado.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Por un lado, por razones que deberíamos celebrar: vivimos muchos más años, lo cual es un triunfo deslumbrante de nuestra civilización y de nuestra medicina. Por el otro, nacen menos niños, reduciendo la base de futuros trabajadores. Pero a estos factores demográficos se suma una herida puramente política y económica: la informalidad laboral.

Cerca del cuarenta por ciento de nuestra fuerza de trabajo se gana el pan fuera de la formalidad, sin cotizar al sistema de seguridad social. Es aquí donde nuestro país se encuentra atrapado en un laberinto que parece no tener salida. Si el Estado intenta salvar el fondo de pensiones elevando las cuotas y los impuestos sobre los salarios, encarece de tal manera la contratación formal que termina empujando a más empresas y trabajadores hacia la informalidad. Es una trampa perfecta: subir las cotizaciones para salvar el sistema termina reduciendo el número de personas dispuestas o capaces de pagar por él.

Frente a un panorama de esta gravedad,
¿Qué respuesta nos ofrece el modelo político del populismo y la polarización?

Hagamos un ejercicio de honestidad brutal. Un liderazgo político que vive de la popularidad semanal, que mide su éxito por los “me gusta” en las redes sociales y que necesita mantener a su electorado en un estado de euforia constante, es estructuralmente incapaz de resolver una crisis de pensiones. ¿Por qué? Porque salvar el sistema de jubilaciones exige, inevitablemente, tomar decisiones que duelen. Exige sentarse frente al país y decirle la verdad: que probablemente tendremos que trabajar más años, cotizar durante más tiempo y recibir una pensión proporcionalmente menor a la que recibieron nuestros padres.

Ese mensaje no arranca aplausos en una plaza pública. No se puede comprimir en un video viral para atacar a la oposición. Exige sacrificios compartidos, negociación paciente con sindicatos, empresarios y partidos, y una visión de Estado a veinte o treinta años plazo. Requiere de un líder dispuesto a quemar su capital político hoy, sabiendo que los frutos de su valentía solo serán disfrutados por generaciones que aún no han nacido y bajo el mandato de presidentes futuros.

En contraste, el líder seducido por la lógica populista prefiere anunciar la construcción de una obra monumental o lanzar un ataque destructivo contra un juez o un periodista, porque esas acciones le garantizan la aclamación inmediata de sus seguidores. Frente a la bomba de tiempo

de las pensiones, la reacción del poder concentrado es mirar hacia otro lado, postergar el debate y dejar que el problema le estalle en las manos al siguiente gobierno.

Podríamos pensar que el ahorro individual complementario es la salvación. Y ciertamente, los fondos obligatorios de capitalización individual son una herramienta vital de nuestro sistema mixto. Pero, le pregunto: ¿podemos exigirle a una familia de clase media empobrecida, que apenas llega a fin de mes lidiando con el alto costo de la vida y las deudas, que destine voluntariamente una parte mayor de sus ingresos a un fondo que solo verá dentro de treinta años? La evidencia nos demuestra que no. La urgencia del presente devora cualquier intento de planificar el futuro, sobre todo cuando el Estado ha fallado en fomentar la educación financiera y en crear empleos formales.

Lo que está en juego con nuestras pensiones no es solamente una hoja de cálculo actuarial. Es la promesa de que, después de entregarle nuestros mejores años a la construcción de este país, no seremos abandonados a la miseria en el ocaso de nuestras vidas. Cuando el ciudadano comprende que el Estado no tiene el coraje político para garantizar ese retiro digno, el contrato social se resquebraja.

Y sin embargo, mientras la crisis de las pensiones es una tormenta que se acumula amenazante en nuestro futuro, hay otra columna del Estado social que ya se está derrumbando en nuestro presente, frente a nuestros propios ojos, cobrándose un precio incalculable en el talento y la esperanza de nuestros jóvenes.

Para entender por qué nuestras escuelas y colegios, que alguna vez fueron el gran orgullo de la República y el verdadero motor de nuestra igualdad, se han convertido hoy en una fábrica de exclusión, debemos adentrarnos en el segundo gran fracaso de nuestro tiempo. Le invito a acompañarme en la siguiente reflexión, porque en las aulas vacías y en los aprendizajes perdidos de hoy, se está escribiendo, con tinta indeleble, la pobreza de la Costa Rica del mañana.

EL SISTEMA EDUCATIVO

Cierren los ojos un instante y viajen a su propia época de estudiante. Piensen en el patio de su escuela pública. Si usted creció en la Costa

Rica del siglo pasado, recordará que en ese rectángulo de cemento ocurría el milagro más hermoso de nuestra democracia: el hijo del médico, la hija del pulpero y el hijo del agricultor vestían el mismo uniforme, jugaban con la misma bola y recibían clases del mismo maestro. Ese uniforme no era una simple prenda de vestir; era el gran igualador social. Nos decía, sin necesidad de palabras, que sin importar en qué cuna habíamos nacido, el Estado nos garantizaba la misma línea de salida en la carrera de la vida.

Ahora, abran los ojos y miremos juntos nuestra realidad actual.

¿Sienten ustedes que esa línea de salida sigue siendo la misma para todos?

La respuesta es una herida abierta en el centro de nuestro pacto social. Hoy, el sistema educativo costarricense no es el gran igualador, sino una maquinaria que profundiza las desigualdades. Y lo más doloroso es que esta crisis no es un fenómeno natural, sino el resultado de un abandono sistemático. Durante cuatro décadas, el país mantuvo un compromiso financiero sagrado con sus aulas, pero en los últimos años hemos presenciado la mayor contracción del financiamiento educativo desde la década de 1980. La inversión como proporción de nuestra economía ha caído dramáticamente, retrocediendo hacia niveles que comprometen el funcionamiento básico de los centros de estudio.

¿Y cuál es el resultado de este estrangulamiento?

Las cifras nos gritan una verdad que debería quitarnos el sueño. Nuestros estudiantes han experimentado caídas severas en las pruebas internacionales de aprendizaje, especialmente en áreas vitales como las matemáticas. Pero no necesitamos mirar exámenes internacionales para entender la tragedia; basta con escuchar a los investigadores nacionales que nos advierten algo devastador: una cantidad alarmante de nuestros jóvenes en secundaria tiene un nivel de comprensión lectora y de razonamiento matemático equivalente al de un niño de escuela primaria.

Les pido que dimensionen lo que esto significa para un muchacho de quince años. Si no puede comprender lo que lee, si no puede resolver un problema matemático básico, ¿qué futuro laboral le estamos ofreciendo en la era de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento? Le estamos entregando un pasaporte directo a la precariedad o, peor aún, lo estamos empujando hacia las garras del crimen organizado que exploramos en el capítulo anterior.

Frente a una emergencia de esta magnitud, que hipoteca el destino del país entero, *¿Cómo han reaccionado los modelos políticos fundados en el populismo?*

Aquí es donde la incapacidad del liderazgo confrontativo para gobernar a largo plazo queda expuesta en toda su crudeza. Mientras las aulas se caían a pedazos y los aprendizajes se desplomaban, la conducción del sistema educativo operó durante años sin una ruta estratégica clara, sumida en decisiones erráticas y carentes de sustento técnico. El órgano constitucional diseñado para proteger la educación de los vaivenes políticos —el Consejo Superior de Educación— fue debilitado y asfixiado, reducido en la práctica a un simple departamento subordinado al poder de turno.

Pero lo más revelador de este modelo de gestión no es lo que dejó de hacer, sino en qué decidió gastar su tiempo y su energía política. Mientras el país enfrentaba esta catástrofe académica, el debate oficial se centró en normativas para regular la apariencia física de los estudiantes, debatiendo sobre uniformes, tatuajes y expresiones identitarias. Piénsenlo un segundo: se invirtió una valiosísima capacidad regulatoria en discutir la estética de los jóvenes, una medida que no tiene absolutamente ninguna relación comprobada con la mejora de sus calificaciones.

¿Por qué ocurre esto? Porque el populismo se alimenta de gestos simbólicos de alto impacto mediático. Generar una polémica sobre la disciplina estética asegura titulares, enciende debates apasionados en redes sociales y moviliza emociones de forma inmediata. Diseñar un plan de nivelación en matemáticas o recuperar la infraestructura escolar, en cambio, es un trabajo técnico, silencioso y aburrido que no genera “me

gusta” en internet. El poder concentrado prefiere siempre el espectáculo de la anécdota antes que la complejidad de la política pública.

El costo humano de esta improvisación es desgarrador. En medio de esta ausencia de rumbo, se recortaron dramáticamente los programas de equidad, disminuyendo en más de un tercio las becas para los estudiantes en condición de pobreza extrema. Al retirar ese apoyo económico al estudiante más vulnerable, el Estado no solo le está quitando un plato de comida o el pasaje del autobús; le está enviando un mensaje letal: tu país te ha abandonado.

El daño que se le ha infligido a nuestra educación pública es tan profundo que su reparación no será tarea de un solo gobierno. Los especialistas nos advierten que, incluso si mañana mismo decidiéramos aumentar agresivamente el presupuesto, nos tomaría más de una década simplemente recuperar los niveles de inversión y calidad que teníamos hace apenas unos años. Para sacar a la educación del hoyo en el que ha caído, necesitaremos atravesar múltiples ciclos electorales manteniendo un mismo rumbo.

Y volvemos, inevitablemente, a nuestro argumento central: ¿es posible sostener un esfuerzo de rescate a diez o quince años plazo en un país donde los líderes políticos se niegan a dialogar? ¿Es posible salvar la educación si cada nuevo gobierno llega con la intención de destruir lo que hizo el anterior para refundar el sistema desde cero? La respuesta es un rotundo no. Solo el diálogo, ese “reto de la palabra” que nos obliga a sentarnos con quienes piensan distinto para trazar políticas de Estado, puede devolverle a nuestros jóvenes la promesa de la escuela pública.

Hemos visto cómo la tormenta demográfica amenaza nuestro retiro en la vejez, y hemos palpado cómo la desinversión le roba el futuro a nuestros jóvenes en las aulas. Pero el Estado social costarricense, ese abrazo solidario que nos define como nación, tiene todavía un tercer pilar, uno que nos acompaña en nuestros momentos de mayor fragilidad física y emocional:

NUESTRO SISTEMA DE SALUD

Cuando el cuerpo enferma,
cuando el dolor aparece y la vida
pende de un hilo, el ciudadano no
acude a una urna electoral ni a un

tribunal de justicia; acude a la ventanilla de un hospital público. Para comprender cómo la confrontación institucional y la falta de planificación están llevando al límite la paciencia de nuestro pueblo, les propongo que abramos ahora la puerta de nuestras clínicas y observemos, con absoluta franqueza, el calvario de quienes aguardan por una cura en las salas de espera de nuestra patria.

Les pido que hagan un esfuerzo de imaginación y se pongan en los zapatos de un compatriota nuestro, un adulto mayor que ha trabajado toda su vida y que hoy sufre un dolor constante. Imagínense levantarse de madrugada, a oscuras, para tomar un autobús y hacer fila a las puertas de una clínica bajo la lluvia fría de la mañana. Imagínense la desesperanza que lo invade cuando, después de meses de incertidumbre, la ventanilla le devuelve una cita médica programada no para la próxima semana, ni para el próximo mes, sino para dentro de año y medio.

Silogramosconectarconelpánicoquesienteese paciente, comprenderemos que la crisis de nuestro sistema de salud no es un simple debate sobre cifras administrativas; es una herida abierta en el corazón de nuestra empatía nacional.

Los datos que nos ofrecen las autoridades de salud son, de por sí, desoladores. Nos hablan de más de un millón de personas aguardando en listas de espera para una consulta, un examen diagnóstico o una cirugía. Estamos hablando de miles de ciudadanos cuyas vidas están puestas en pausa, esperando más de cuatrocientos días por una intervención quirúrgica o más de quinientos días por una revisión especializada. Detrás de la abstracción estadística de estos números hay padecimientos cardíacos que no pueden esperar, dolores crónicos que asfixian la rutina diaria y enfermedades silenciosas que avanzan inexorablemente mientras el paciente se encuentra atrapado en un laberinto burocrático.

Esta crisis representa un fracaso colectivo que no puede atribuirse a la mala fe de un solo actor. Es el resultado acumulado de una compleja telaraña de problemas técnicos e institucionales: una fuga silenciosa pero constante de médicos especialistas debido a la falta de incentivos laborales adecuados; una gestión deficiente de los recursos que permite que quirófanos vitales permanezcan cerrados durante meses por falta de mantenimiento; y una deuda histórica inmensa del Estado con el sistema de salud, que asfixia artificialmente la capacidad de invertir en infraestructura y contratación. A este panorama se suman los intentos fallidos de modernización tecnológica, donde la improvisación en la implementación de sistemas informáticos ha llegado a paralizar las atenciones clínicas, demostrando que los atajos en política pública suelen costar muy caros.

Pero la verdadera tragedia frente a esta emergencia sanitaria no radica únicamente en la complejidad de sus causas, sino en la manera en que el estilo de gobierno fundamentado en la confrontación política decide afrontarlas.

Les pregunto: ¿Puede una crisis médica de esta magnitud resolverse desde una tarima, a través de consignas virales o desacreditando a los profesionales de la salud? ¿Se acorta una lista de espera al destituir abruptamente a los gerentes técnicos de un hospital o al señalar públicamente a las instituciones de control?

La respuesta que nos devuelve el manual del Estado es implacable. Reducir los cientos de miles de días de espera en los quirófanos exige exactamente el tipo de medicina que el populismo y la post-verdad desprecian. Exige, en primer lugar, un respeto profundo por el conocimiento técnico: sentar a la mesa a administradores, médicos y planificadores financieros para coordinar meticulosamente la red hospitalaria. Requiere de disciplina fiscal sostenida durante múltiples gobiernos para honrar las deudas del Estado. Y demanda, sobre todo, una visión de largo plazo para diseñar incentivos laborales y planificar la formación y retención del talento especializado que atenderá a nuestra población envejecida dentro de veinte años.

Ninguna de estas soluciones cabe en un titular estridente ni prometen resultados mágicos para el siguiente ciclo electoral. Y es aquí donde el ciudadano se encuentra frente al precipicio de la desilusión. Cuando un paciente observa que el debate público se consume en choques estériles entre los poderes del Estado, mientras su cita médica se sigue postergando indefinidamente, el desencanto se transforma en rabia. Quien padece dolor y se siente ignorado por el sistema, pierde rápidamente el interés en defender la arquitectura de la República. Es sumamente difícil pedirle a un enfermo que valore la importancia de la división de poderes o el escrutinio de la prensa libre, cuando la democracia parece incapaz de garantizar el alivio más elemental a su sufrimiento.

Al cerrar esta revisión de nuestras grandes deudas sociales, el paisaje que se abre ante nosotros puede resultar abrumador. Hemos recorrido las calles fracturadas por la violencia y la falta de planificación urbana; hemos auscultado el sistema educativo que empuja a nuestros jóvenes hacia la exclusión; hemos advertido la bomba de tiempo que amenaza nuestras pensiones; y, finalmente, hemos palpado el dolor crónico que satura nuestros hospitales. Estos son los verdaderos combustibles sociales de nuestra crisis institucional. El deterioro de estos pilares es lo que empuja a un pueblo pacífico a coquetear con salidas autoritarias y a buscar la salvación en voces que prometen barrer con todo.

Sin embargo, sería una traición al espíritu mismo de nuestra historia costarricense concluir este análisis rindiéndonos ante la desesperanza. Nuestra democracia ha estado al borde del abismo en otras épocas, y siempre ha encontrado en sí misma la fuerza para resistir. Pero para que esa resistencia sea efectiva hoy, debemos tener el valor de mirar nuestro propio reflejo sin filtros y evaluar, con la cabeza fría, qué es lo que verdaderamente estamos arriesgando.

Si queremos salvar nuestra paz social y reconstruir el tejido de nuestro Estado, es imperativo que pasemos del diagnóstico a la acción. Es hora de realizar un balance sereno de la tormenta, escuchar a quienes cuestionan nuestras certezas y asumir las responsabilidades ineludibles que recaen tanto en los líderes que nos gobiernan como en cada uno de nosotros.

Con esta convicción inquebrantable, cruzamos ahora el umbral hacia la última etapa de nuestro recorrido. Hacia ese balance necesario y hacia las lecciones impostergables que debemos abrazar si aspiramos a preservar nuestra libertad.

*La democracia no se salva
únicamente en las urnas;
se salva todos los días,
asumiendo nuestra cuota de
responsabilidad ciudadana.*

Capítulo 9

BALANCE DE LA CRISIS

Quienes hayan caminado con nosotros hasta estas páginas podrían sentir la tentación de cerrar el libro con un suspiro de fatalismo. Hemos recorrido los pasillos donde el poder intenta concentrarse, hemos visto cómo se agrietan los pilares de nuestras instituciones y hemos palpado, con dolor, las heridas abiertas de nuestra desigualdad social. Frente a este paisaje, sería muy fácil caer en la desesperanza y dictar una sentencia apocalíptica sobre el fin de nuestra República.

Pero les propongo que hagamos un alto en el camino. Demos la vuelta a la moneda. Para que este ensayo sea verdaderamente útil —y para honrar el reto de la palabra que nos hemos propuesto— debemos sacudirnos la comodidad de tener siempre la razón. Sería profundamente deshonesto desde el punto de vista intelectual presentar este panorama como una narración absoluta, pintada únicamente en blanco y negro, sin reconocer las fisuras de nuestro propio argumento.



En la política, como en la vida, la luz y la sombra conviven. Existen voces serias, analistas lúcidos y un sector inmenso de la ciudadanía que miran este mismo panorama y llegan a conclusiones muy distintas a las nuestras. Y si queremos defender la democracia, nuestro primer deber no es silenciar a esas voces, sino escucharlas con el mayor de los respetos.

¿Qué nos dicen quienes matizan esta alarma institucional?

¿Qué ven ellos que quizás nosotros, en nuestro celo por defender los contrapesos, podríamos estar perdiendo de vista?

El primer argumento que se levanta desde la otra orilla es de un pragmatismo demoledor. Nos dicen que un Poder Ejecutivo fuerte, e incluso confrontativo, no es una anomalía maligna, sino una herramienta estrictamente necesaria para enfrentar crisis reales que los gobiernos de corte tradicional dejaron sin resolver durante décadas.

Hagamos el ejercicio de darles la razón por un instante. ¿Acaso no es cierto que el Estado costarricense se ha caracterizado muchas veces por una lentitud exasperante? ¿No es verdad que hemos visto obras de infraestructura vitales paralizadas durante años por telarañas burocráticas, y que la ineficiencia ha asfixiado el progreso? Desde esta perspectiva, la concentración de poder en el Ejecutivo no se percibe como una amenaza autoritaria, sino como un martillo necesario para romper el hielo de la inoperancia. Nos argumentan que un gobierno fuerte es un instrumento cuya peligrosidad no reside en su existencia, sino en el uso que se le dé.

A este pragmatismo se suma un segundo argumento, aún más urgente y emocional: el terror en las calles. Quienes defienden la necesidad de un liderazgo sin ataduras institucionales nos recuerdan que la inseguridad ciudadana, impulsada por la brutalidad del narcotráfico, somete al Estado de derecho a una prueba inédita. Nos dicen, mirándonos a los ojos, que la exigencia popular de “mano dura” no nace de un capricho antidemocrático

o de una fascinación por las dictaduras, sino de un miedo real, cotidiano y asfixiante.

Bajo esta lectura, exigirle a un presidente que resuelva la crisis de homicidios más grave de nuestra historia, pero al mismo tiempo negarle el margen de maniobra excepcional para actuar y atarle las manos con controles institucionales lentos, resulta no solo poco realista, sino directamente contraproducente para la estabilidad de la nación.

Pero el argumento más poderoso de quienes matizan la crisis no habita en la filosofía, sino en la frialdad de las hojas de cálculo. Hay resultados concretos que se ponen sobre la mesa como trofeos incontestables. Quienes defienden el modelo de un Ejecutivo fuerte señalan con orgullo la reducción del déficit fiscal heredado de administraciones anteriores, la mejora en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias internacionales y el mantenimiento de una macroeconomía que ha logrado permanecer estable a pesar de todo el ruido y la turbulencia política.

Estos logros son verificables. Están ahí, impresos en los reportes financieros del país. Y sus defensores argumentan, con total legitimidad, que estos éxitos económicos deberían pesar en la evaluación histórica de la época tanto o más que las preocupaciones institucionales que hemos venido documentando. Nos dicen: el país avanza, las cuentas se ordenan, ¿de qué colapso democrático nos están hablando? Incluso, hay quienes nos recuerdan con cautela que las democracias dependen también de la capacidad del poder para autolimitarse, y que, a fin de cuentas, nuestro país aún no ha perdido su condición democrática ni ha sufrido los colapsos traumáticos que han devastado a otras naciones de la región.

Aquí está el debate servido. Este es el verdadero reto de la palabra: enfrentar el mejor argumento de nuestro interlocutor.

No podemos, ni debemos, negar los logros macroeconómicos ni la necesidad absoluta de recuperar la seguridad. Sin embargo, es precisamente en este cruce de caminos donde debemos elevar la mirada y hacer la pregunta más difícil de todas.

Quienes alertamos sobre los riesgos de la concentración de poder no negamos la enfermedad; lo que cuestionamos, con todas nuestras fuerzas, es la receta del remedio.

El núcleo de nuestra objeción es este: una economía estable que se construye sobre los escombros de los contrapesos democráticos es una estabilidad prestada. Es un edificio deslumbrante construido sobre una falla sísmica.

Cuando aplaudimos que las cuentas fiscales mejoren a costa de asfixiar presupuestariamente a las instituciones que controlan al poder, o cuando celebramos la autoridad asumiendo que los jueces independientes son un estorbo, estamos firmando un cheque en blanco con el destino del país. La historia económica y política de América Latina está empedrada de “milagros económicos” temporales liderados por caudillos que dismantelaron las instituciones. ¿Saben ustedes cómo terminan siempre esas historias? Con el colapso. Porque esa estabilidad depende exclusivamente de la voluntad y la disciplina de la persona que hoy ocupa la silla presidencial.

¿Qué pasará mañana, cuando un nuevo liderazgo, sin esa misma disciplina fiscal, pero amparado en las mismas herramientas de poder sin límites que hoy aplaudimos, asuma el control del país? Al haber erosionado las instituciones de control, ese futuro gobernante no encontrará ningún freno para endeudar a la nación, expropiar, o destruir la economía. Las instituciones fuertes son el seguro a todo riesgo que nos protege de la inevitable imperfección humana de quienes nos gobiernan.

Por lo tanto, la verdadera encrucijada de nuestra época no es tener que elegir trágicamente entre el orden y la libertad. Esa es una disyuntiva falsa y venenosa. El desafío supremo de Costa Rica, el que pondrá a prueba nuestra madurez histórica, es demostrar que somos capaces de responder con una eficacia rotunda al crimen y a la ineficiencia, pero sin sacrificar ni un milímetro de los contrapesos institucionales que nos definen como una democracia excepcional en el istmo.

Hemos escuchado a las voces que matizan. Hemos reconocido los éxitos y comprendido los miedos. Pero ahora, despojados de ingenuidades y frente a frente con la realidad, es momento de definir con precisión quirúrgica qué es lo que verdaderamente nos estamos jugando si permitimos que la erosión institucional continúe su marcha silenciosa. No hablaremos de teorías lejanas, sino de lo que podría ocurrirle a usted, ciudadano, si un día despierta y descubre que los guardianes de la República han desaparecido.

Llegados a este punto de nuestra reflexión, debemos resistir una tentación muy humana, propia de nuestra época de ansiedades inmediatas: la tentación de convertirnos en adivinos. Ninguno de nosotros, ni el analista más agudo ni el ciudadano más informado, posee una esfera de cristal para dictaminar con certeza matemática si nuestra República logrará atravesar este ciclo de turbulencia con sus cimientos intactos, o si, por el contrario, terminaremos sumándonos a la dolorosa lista de naciones latinoamericanas que dejaron marchitar su libertad.

Pero aunque no podamos predecir el futuro, la historia universal sí nos ha entregado un mapa sumamente detallado sobre cómo ocurren estas tragedias. Y la primera lección de ese mapa desafía todo lo que Hollywood y los libros de historia del siglo pasado nos enseñaron sobre el colapso de las naciones.

Les invito a cuestionar una imagen que todos llevamos grabada en la memoria colectiva. Cuando pensamos en la muerte de una democracia, solemos imaginar un evento estruendoso, cataclísmico y repentino. Imaginamos tanques de guerra avanzando por las avenidas principales, un parlamento clausurado a medianoche, generales leyendo bandos marciales en la televisión en blanco y negro, y líderes opositores exiliados de madrugada. Creemos que perderemos nuestra libertad de un solo golpe, en un solo día, y que, por lo tanto, mientras no veamos soldados en las calles, todo debe estar bien.

Esa es la ilusión óptica más peligrosa del siglo veintiuno.

Las democracias contemporáneas casi nunca mueren de un ataque al corazón; mueren por una enfermedad degenerativa, lenta y silenciosa.

Lo que verdaderamente nos estamos jugando hoy no es el riesgo de un golpe de Estado espectacular ni una ruptura visible del orden constitucional. El peligro real es infinitamente más sutil, como la termita que devora las vigas de madera de una casa desde adentro,

dejando intacta la pintura exterior hasta el día en que el techo se desploma. Hablamos de una colonización gradual de los espacios institucionales, un desgaste acumulativo, gota a gota, de la autoridad moral que sostienen nuestros organismos de control. Es un proceso donde el poder se concentra progresivamente en un liderazgo personalista, sin necesidad de derogar la Constitución, simplemente vaciándola de sentido.

¿Y cómo ocurre este vaciamiento en la vida diaria?

Ocurre en el territorio de nuestra mente y de nuestras palabras. El colapso inicia cuando una ciudadanía, agotada por sus propios problemas cotidianos, comienza a acostumbrarse a que el desacuerdo político ya no se resuelva por la vía del argumento, sino mediante la descalificación pública sistemática.

Deténganse un momento y piensen en la conversación pública que consumimos a diario. Cuando el insulto reemplaza al dato, cuando la burla sustituye a la propuesta, y cuando presentar al adversario como un enemigo de la patria se vuelve la norma, estamos presenciando la muerte del diálogo. Y en este libro lo hemos dicho hasta el cansancio:

Cuando este acostumbramiento a la hostilidad se normaliza, cruzamos una frontera invisible. El riesgo mayor ya no es la próxima ley que pueda aprobar el gobierno, ni el próximo decreto polémico.

La democracia es diálogo. Es el reto de la palabra. Si aceptamos que la palabra se degrade hasta convertirse en un simple proyectil para destruir al otro, estamos preparando el terreno para que la fuerza bruta ocupe el lugar de la razón.

El verdadero daño, el que cuesta generaciones reparar, es la pérdida colectiva de la expectativa de que las cosas deberían hacerse de otra manera.

Esa pérdida de expectativa es el anestésico del autoritarismo. Es el momento en que el ciudadano enciende el noticiero, escucha que un juez independiente fue amenazado o que una institución técnica fue asfixiada sin recursos, y simplemente se encoge de hombros, pensando: “Bueno, así es la política”. Cuando la arbitrariedad deja de indignarnos porque se ha vuelto rutinaria, cuando lo anormal se convierte en paisaje, la democracia ha perdido su escudo principal: nuestra capacidad de asombro. Las instituciones pueden estar formalmente escritas en las leyes, pero si la sociedad ya no espera que funcionen con independencia, se convierten en cáscaras vacías.

Para dimensionar hacia dónde conduce este camino de anestesia cívica, no necesitamos recurrir a la ficción; basta con mirar el espejo del mundo. Las trayectorias de otras naciones que atravesaron exactamente estas mismas presiones nos ofrecen un catálogo de destinos posibles.

En un extremo de la balanza, encontramos tragedias consumadas como las de Venezuela o Hungría. Allí observamos a liderazgos que llegaron al poder por la vía electoral, aclamados por mayorías legítimas, pero que, con el paso inexorable del tiempo, utilizaron esa misma legitimidad para copar los tribunales de justicia, capturar a los árbitros electorales y silenciar implacablemente a la prensa crítica. Hoy, en esos países, las urnas siguen abriéndose de vez en cuando, pero la alternancia en el poder se ha vuelto un imposible matemático.

En un punto intermedio, vemos naciones como Turquía, donde las instituciones democráticas siguen formalmente vigentes en el papel, pero han sido vaciadas de cualquier independencia real tras años de purgas burocráticas y presión sostenida desde el Ejecutivo. Son democracias zombis; caminan y aparentan vida, pero carecen de alma republicana.

Y, sin embargo, en el otro extremo del horizonte, brilla la esperanza de la resiliencia. Países como Brasil o Corea del Sur nos han demostrado

que cuando las instituciones judiciales y los tribunales electorales son genuinamente robustos, tienen la capacidad milagrosa de contener a un liderazgo que intenta desconocer resultados electorales o concentrar el poder de manera indebida, incluso en los momentos de mayor asfixia institucional.

¿En qué lugar de este mapa se encuentra nuestra Costa Rica?

A la luz de los mecanismos de concentración de poder que hemos analizado, nos ubicamos en una posición intermedia, un territorio de frontera. Nuestros contrapesos han sido presionados hasta el límite, pero ninguno ha sido todavía neutralizado de forma definitiva. Conservamos un Poder Judicial que dicta sentencias incómodas y un Tribunal Electoral que no se doblé. Estamos exactamente en ese punto crítico, en el filo de la navaja, donde la balanza todavía puede inclinarse hacia la consolidación de nuestra libertad o hacia la lenta noche del autoritarismo.

Esta posición de fragilidad compartida nos devuelve, como un bumerán, a la pregunta central de todo nuestro ensayo, una pregunta que el país entero, tarde o temprano, deberá responderse en la soledad de su conciencia.

¿Son los contrapesos institucionales —la prensa, los jueces, la Contraloría, la oposición— un obstáculo prescindible que nos impide gobernar con eficacia, y del cual deberíamos deshacernos para avanzar más rápido? ¿O son, por el contrario, la condición indispensable, el secreto profundo que le ha permitido a Costa Rica gobernarse a sí misma con paz, eficacia y sin derramamientos de sangre durante tantas generaciones?

De la respuesta que le demos a esa interrogante dependerá no solo el titular de mañana, sino el país en el que crecerán nuestros nietos.

Podríamos preguntarnos, con legítima preocupación, si el destino de nuestra democracia ya está escrito en piedra, condenado a repetirse en la misma espiral de deterioro que ha consumido a tantas naciones hermanas.

Les pido, con la mayor convicción, que rechacen ese fatalismo.

Si algo nos ha enseñado la lectura atenta de nuestra propia historia es que las sociedades libres no son meros espectadores pasivos frente al destino. No somos una hoja seca arrastrada por el viento del populismo. A pesar de los nubarrones que oscurecen nuestro horizonte, Costa Rica posee motivos genuinos, profundos y arraigados para mantener viva la esperanza. Y no hablo de un optimismo ingenuo o retórico, sino de herramientas institucionales y culturales que están vivas y operando en este mismo instante.

Detengámonos a contabilizar el arsenal cívico con el que contamos para defender nuestra casa común. En primer lugar, nuestras instituciones del Estado, a pesar de los recortes presupuestarios y las descalificaciones públicas, conservan una capacidad técnica real y envidiable. En los pasillos de nuestros ministerios, en las salas de nuestros tribunales y en los laboratorios de nuestras universidades públicas, siguen trabajando miles de funcionarios honestos y profesionales brillantes. Son hombres y mujeres que no rinden pleitesía al político de turno, sino que dedican sus vidas a defender la Constitución, a interpretar la ley con imparcialidad y a producir conocimiento basado en hechos verificables. Esa burocracia meritocrática, a menudo invisible y maltratada, es un muro de contención invaluable contra la arbitrariedad.

En segundo lugar, poseemos un patrimonio intangible de incalculable valor: una tradición cívica ininterrumpida de más de siete décadas sin rupturas autoritarias ni dictaduras militares. Esta no es una simple estadística para presumir en foros internacionales; es una memoria muscular colectiva. Significa que, a diferencia de otros países donde la violencia o el golpe de Estado son opciones presentes en el imaginario político, el costarricense lleva tres generaciones resolviendo sus conflictos fundamentales por la vía del derecho, el diálogo y el sufragio. Esa memoria histórica actúa como un anticuerpo natural; cuando el autoritarismo asoma la cabeza, nuestra sociedad lo reconoce como un elemento extraño a su ADN y, tarde o temprano, reacciona para expulsarlo.

En tercer lugar, nuestro país cuenta con un árbitro electoral que es, con toda justicia, una joya institucional a nivel continental: el Tribunal Supremo de Elecciones. En una época donde la duda y la sospecha son las armas preferidas de la polarización, este tribunal ha demostrado una solvencia inquebrantable, organizando comicios limpios, transparentes y técnicamente impecables incluso en los contextos políticos más asfixiantes y polarizados. Saber que los votos se cuentan con absoluta integridad, y que quien pierde una elección acepta su derrota sin incendiar el país, es el pilar maestro que sostiene toda la arquitectura de la República. Mientras ese pilar resista, la esperanza de la alternancia pacífica seguirá viva.

Y, por último, pero quizás lo más importante: nuestra sociedad civil, aunque pueda parecer fragmentada, agotada o distraída por las urgencias de la supervivencia diaria, conserva una formidable capacidad de organizarse y de exigir rendición de cuentas. Desde las asociaciones de desarrollo comunal en las zonas rurales, hasta los colegios profesionales, los sindicatos, los estudiantes universitarios y el periodismo independiente, el tejido social costarricense es denso y vibrante. No somos un pueblo de súbditos dispuestos a bajar la cabeza; somos un pueblo de ciudadanos que, cuando siente que sus derechos fundamentales están en juego, sabe cómo levantar la voz y hacer temblar los cimientos del poder.

La conjunción de estos cuatro elementos —instituciones técnicas, memoria cívica, un tribunal electoral independiente y una sociedad civil alerta— conforma nuestra verdadera “reserva democrática”. Es un seguro de vida que compramos a plazos durante casi ochenta años, y que hoy está rindiendo sus frutos.

Sin embargo, poseer estas herramientas no garantiza nuestra salvación si nos negamos a utilizarlas. Un escudo, por más resistente que sea el metal del que está forjado, es inútil si el guerrero decide dejarlo abandonado en el suelo.

La pregunta de fondo que este momento histórico le plantea a Costa Rica no es retórica ni filosófica; es una interrogante brutalmente práctica. No se trata de adivinar qué hará el gobernante de turno, sino de decidir qué haremos nosotros. ¿Vamos a permitir que la frustración acumulada por los problemas no resueltos nos convenza de que las instituciones

democráticas son un obstáculo prescindible para gobernar con eficacia? ¿O tendremos la sabiduría histórica para reconocer que esos contrapesos son, por el contrario, la condición misma que le ha permitido a este pequeño país centroamericano gobernarse con paz, libertad y progreso durante generaciones?

Si sucumbimos a la tentación de quemar la casa para calentarnos las manos durante una noche fría, despertaremos mañana sobre un montón de cenizas, gobernados por las leyes de la fuerza y no por la fuerza de la ley. Pero si tenemos la valentía de defender el reto de la palabra, de exigir acuerdos técnicos, de proteger la independencia del juez y de obligar al poder a rendir cuentas, saldremos de esta crisis no solo intactos, sino fortalecidos.

La decisión está en nuestras manos. Y para que esa decisión no se quede en una buena intención abstracta, debemos aterrizar en la realidad de nuestras acciones. Debemos preguntarnos, con absoluta claridad, cuáles son las obligaciones concretas que nos impone este momento. ¿Qué le corresponde aprender al líder político para no convertirse en un tirano? ¿Y qué nos corresponde asumir a nosotros, los ciudadanos de a pie, para no convertirnos en cómplices de la erosión democrática?

RESPONSABILIDADES DEL PODER Y EL VALOR DEL DIÁLOGO

Todo diagnóstico, por más riguroso y profundo que sea, corre el riesgo de convertirse en un simple lamento estéril si no va acompañado de una propuesta de enmienda. Dejamos atrás el tono de la urgencia y la confrontación para adoptar la serenidad de quien entiende que el futuro no se construye desde el reproche, sino desde la asunción compartida de responsabilidades.

La primera y más grande responsabilidad recae, ineludiblemente, sobre los hombros de quienes ostentan el poder. Dirigir los destinos de una nación es el encargo más sagrado que un pueblo puede otorgar, y exige una grandeza de espíritu que trasciende la simple habilidad para ganar una elección.



Las lecciones que la historia nos ha dejado sobre el ejercicio del poder no son un manual de tácticas políticas; son un código de ética republicana que todo líder, independientemente de su bandera ideológica, debe grabar en su conciencia si aspira a gobernar sin destruir la democracia que lo eligió.

Para abrazar ese código, el primer paso que debe dar quien asume la más alta magistratura es librar una batalla silenciosa en su propio interior. Es el desafío de conquistar la humildad frente al peso abrumador de la historia.

Cuando un líder se sienta en la silla presidencial, no hereda únicamente la administración de un presupuesto o el mando sobre los ministerios; hereda el tejido vivo de millones de existencias, con sus miedos, sus esperanzas y sus profundas contradicciones.

En la embriaguez del triunfo electoral, resulta inmensamente seductor creer que los aplausos de la plaza pública otorgan el monopolio de la verdad. Sin embargo, el verdadero estadista es aquel que, en medio de la ovación, tiene la sabiduría para reconocer su propio límite epistemológico. Entiende que nadie, ni el político más brillante ni el partido más organizado, posee un acceso privilegiado y absoluto a la respuesta correcta para cada uno de los problemas del país. Comprender que el conocimiento humano es fragmentario y que nuestra visión del mundo siempre será incompleta, no es un acto de debilidad política; es la máxima expresión de la madurez intelectual. De esta profunda humildad nace la herramienta civilizatoria más importante que ha inventado la humanidad para evitar su propia destrucción: el diálogo.

En los tiempos que corren, atravesados por la polarización y la prisa, la palabra “diálogo” ha sufrido un desgaste injusto. Se ha llegado a confundir el consenso con la claudicación. En un entorno donde las redes sociales premian la estridencia y castigan el matiz, sentarse a conversar con el adversario político suele ser interpretado, por los sectores más apasionados, como una traición a los propios principios. Pero exigir diálogo no significa pedirle a un líder que abandone sus convicciones, ni que diluya su programa de gobierno en nombre de una armonía artificial y complaciente.

El diálogo genuino es algo mucho más exigente y valiente. Significa tener

el coraje de sentarse a la mesa con quien observa el mundo desde la orilla opuesta, y admitir, con total honestidad intelectual: “Usted podría tener una pieza de la verdad que a mí me falta”. Significa reconocer que la oposición no es un enemigo que debe ser aplastado o silenciado, sino un interlocutor indispensable que nos ayuda a iluminar nuestros propios puntos ciegos.

Pero el valor del diálogo no habita únicamente en la esfera de la moralidad o de los buenos modales republicanos; posee un valor inmensamente práctico y terrenal para la supervivencia de una nación. Gobernar a través de la imposición, utilizando el peso aplastante de una mayoría circunstancial para pasar por encima de quienes piensan distinto, puede generar la ilusión de una victoria rápida. Un decreto se firma en un minuto. Una ley impuesta sin debate se celebra de inmediato. Pero las políticas públicas que nacen de la imposición están construidas sobre cimientos de arena.

La historia de nuestro continente está repleta de estas victorias fugaces que terminan convirtiéndose en péndulos de inestabilidad, donde cada nuevo presidente se dedica a destruir la obra de su antecesor. Y en ese vaivén destructivo, el único que paga el precio de la parálisis es el ciudadano.

Por el contrario, las políticas públicas que nacen del diálogo son como el roble: crecen despacio, exigen paciencia y sudor, pero resisten las peores tormentas. Cuando un país logra sentar a sus fuerzas políticas, a sus sindicatos y a sus cámaras empresariales para negociar, por ejemplo, una reforma educativa o un plan de rescate de sus pensiones, el acuerdo resultante trasciende al gobierno de turno. Sobrevive al cambio de presidente porque no es la imposición de una facción, sino el compromiso de una sociedad entera. La verdadera gobernabilidad, esa que transforma la vida de las futuras generaciones, no se logra ganando batallas campales en el parlamento, sino tejiendo redes de consenso que nadie tenga el interés ni la legitimidad de romper en el futuro.

Esta capacidad para conversar y acordar no es una teoría importada de otras latitudes; es, en el sentido más literal y hermoso de la palabra, la esencia misma de nuestra identidad patria.

Costa Rica es el producto de un diálogo monumental.

Si miramos hacia nuestro pasado, descubriremos que el acto fundacional de nuestra modernidad, el pacto que puso fin a la guerra civil de 1948 y que gestó nuestra Constitución actual, no fue el resultado de una victoria aplastante donde el ganador aniquiló al perdedor.

Fue, por el contrario, un acto de suprema madurez política, donde figuras de convicciones radicalmente opuestas decidieron sentarse a la mesa, en medio del dolor y de las heridas aún abiertas, para diseñar un marco institucional donde todos cupieran. Tuvieron la grandeza de entender que la paz solo sería duradera si los vencidos tenían un lugar digno en la nueva República. Esa decisión de convertir el conflicto en un acuerdo, y no en una revancha perpetua, es el verdadero secreto de nuestra excepcionalidad democrática.

A eso nos referimos cuando hablamos del reto de la palabra. La palabra es el puente que tendemos sobre el abismo de nuestras diferencias. Cuando un líder asume el poder y decide utilizar su voz no para dividir, sino para convocar; no para humillar al caído, sino para persuadir al escéptico, está honrando el encargo más profundo que le hizo la historia. Está demostrando que gobernar no es el arte de imponer la fuerza, sino el arte de armonizar las voluntades. Y sin embargo, la responsabilidad de mantener encendida esta llama no recae exclusivamente en las cúpulas del Estado.

Un liderazgo dialogante y respetuoso solo puede sostenerse si existe un pueblo que lo exija, lo valore y lo acompañe.

La democracia es una obra coral, y los ciudadanos no somos meros espectadores sentados en la butaca esperando a que los líderes resuelvan nuestros dilemas. Hacia esa inmensa responsabilidad compartida, hacia el papel fundamental que ustedes y yo debemos jugar para que el reto de la palabra no muera, dirigimos ahora nuestra reflexión.

Cuando analizamos las responsabilidades de quienes alcanzan la cúspide del Estado, solemos concentrarnos en la dimensión material de su mandato: la firma de los decretos, la ejecución de los presupuestos y la administración de las crisis. Sin embargo, existe una dimensión invisible en el ejercicio del poder que es, a largo plazo, mucho más determinante para la supervivencia de una República. Hablamos de la inmensa responsabilidad pedagógica que recae sobre la figura del estadista. Quien gobierna no solo administra los recursos de una nación; con cada una de sus palabras, con cada uno de sus gestos públicos, moldea el tono moral y cívico de la sociedad entera.

El líder democrático es, por definición, el primer educador del país. La forma en que un mandatario trata a quienes lo cuestionan, el lenguaje que utiliza para referirse a la prensa independiente o a los jueces, y el nivel de respeto que le otorga a las instituciones, no se quedan encerrados en los muros del palacio de gobierno. Ese tono desciende, como una cascada, hasta permear las conversaciones en las mesas familiares, en las aulas escolares y en los debates cotidianos de los ciudadanos. Si desde la más alta tribuna de la República se normaliza el desprecio, el insulto y la mofa hacia el adversario, la sociedad entera aprende que la crueldad es un método legítimo para resolver sus diferencias.

Es en este ámbito íntimo del comportamiento público donde el valor del diálogo enfrenta su prueba de fuego más severa. Y es aquí donde la historia nos exige distinguir entre el simple político de coyuntura y el verdadero estadista.

En la era contemporánea, el ejercicio del liderazgo está sometido a una presión ambiental sin precedentes: el ecosistema de la inmediatez digital. Las plataformas de comunicación modernas, diseñadas mediante algoritmos que se alimentan de la indignación humana, han transformado el espacio público en un coliseo romano. En este anfiteatro virtual, la estridencia se premia con visibilidad instantánea, mientras que la moderación es castigada con la irrelevancia. Para cualquier líder, la tentación de sucumbir a esta lógica es abrumadora. Resulta inmensamente más fácil, y electoralmente más rentable en el cortísimo plazo, lanzar un dardo envenenado que destruya la reputación de un opositor, que sentarse

a explicar los matices complejos de una política pública.

Frente a esta seducción del aplauso fácil, el código de ética republicana demanda del líder una cualidad que rara vez se enseña en las academias: la prudencia y el autocontrol. En los tiempos que corren, la verdadera valentía política ya no consiste en gritar más fuerte que el adversario, sino en tener el carácter suficiente para guardar silencio cuando el instinto pide confrontación. El estadista maduro es aquel que comprende que su deber no es alimentar las pasiones más bajas de su base electoral, sino elevar el nivel del debate nacional. Ejerce el autocontrol porque sabe que cada vez que convierte un desacuerdo técnico en una guerra moral, está dinamitando un puente que el país podría necesitar cruzar el día de mañana.

Este respeto reverencial por las formas democráticas nos conduce a otro de los grandes deberes del poder: la protección irrestricta de la diversidad política. Quien gana una elección asume el derecho legítimo de conducir la agenda del Estado, pero bajo ninguna circunstancia adquiere el derecho de borrar del mapa a quienes votaron por opciones distintas. Una nación no es un monolito de pensamiento único; es un mosaico complejo de visiones, intereses y temores.

La tentación del absolutismo comienza exactamente en el instante en que el gobernante confunde la fuerza de su mayoría electoral con la totalidad de la patria, convenciendo a sus seguidores de que la oposición no es una parte legítima del país, sino un enemigo interno que debe ser extirpado. Cuando el liderazgo político abandona el respeto por esa diversidad y se refugia en la tiranía de la mayoría, el pacto social comienza a desintegrarse. Si a los sectores que quedaron en minoría se les niega sistemáticamente el derecho a existir en el espacio público con dignidad, si se les cierra la puerta del diálogo y se les somete al escarnio por atreverse a pensar distinto, la frustración ciudadana se acumula peligrosamente en las sombras.

Y este abandono del diálogo tiene una consecuencia neurológica devastadora para el cuerpo cívico de la nación: la atrofia del músculo de la negociación. Las sociedades, al igual que los atletas, pierden las

habilidades que dejan de practicar. Si un país entero se acostumbra, año tras año, a que la única forma de relacionarse con el poder es a través de la sumisión incondicional o la guerra sin cuartel, terminará por olvidar cómo se construye un consenso.

Imaginen por un momento el peligro incalculable que esto representa. ¿Qué ocurrirá el día en que la República enfrente una crisis verdaderamente existencial, una emergencia de proporciones históricas que no pueda ser resuelta por la voluntad aislada de un presidente, sino que exige el sacrificio y la unión de todos los sectores vivos de la sociedad? Si para ese momento hemos dejado morir la cultura del diálogo, si hemos quemado todos los puentes de confianza institucional en nombre de la popularidad efímera, el país se encontrará completamente indefenso. Descubriremos, con terror, que en la hora de nuestra mayor necesidad ya no sabemos cómo sentarnos a la misma mesa sin despedazarnos.

Mantener vivo el diálogo no es, por lo tanto, una concesión de debilidad frente a los adversarios de turno. Es el ejercicio de entrenamiento indispensable para que la musculatura democrática de la nación esté fuerte y preparada para los desafíos del futuro. Es la garantía de que, pase lo que pase, seguiremos reconociéndonos en los ojos del otro como compatriotas, y no como enemigos.

En el inventario de las responsabilidades de un estadista, solemos contabilizar el manejo de la economía, la salvaguarda de la seguridad nacional y la provisión de infraestructura. Sin embargo, existe un patrimonio infinitamente más frágil y definitivo que recae bajo la custodia de quien ostenta el poder: el valor de la palabra pública. La democracia, antes de ser un entramado de leyes o un sistema de votaciones, es un acuerdo semántico. Es la fe compartida en que las palabras que utilizamos para comunicarnos significan lo mismo para todos.

Cuando reflexionamos sobre el título de este ensayo, “El Reto de la Palabra: La erosión silenciosa del diálogo en Costa Rica”, no lo hacemos desde la poesía, sino desde la supervivencia. La confianza es la infraestructura invisible de la República. Si un puente de concreto colapsa, el daño es trágico y evidente; pero si la confianza colapsa, el país puede lucir idéntico

en su geografía, mientras su alma se resquebraja de manera irreversible. Y esa confianza se construye, o se aniquila, a través del lenguaje que emana desde las más altas tribunas del Estado.

La mayor responsabilidad moral de un gobernante es proteger la integridad del idioma cívico. Quien tiene el privilegio de hablarle a la nación a través del megáfono del poder posee la capacidad de iluminar o de incendiar. Cuando el lenguaje oficial se corrompe y se utiliza sistemáticamente para sembrar la sospecha, para deshumanizar al crítico o para torcer la realidad, no solo se está cometiendo una falta de decoro; se está envenenando el pozo del cual bebe toda la sociedad. Si las palabras pierden su valor, si la promesa se vacía de contenido y si la acusación se lanza sin sustento, la moneda de cambio de la convivencia se devalúa hasta convertirse en polvo. Sin palabras confiables, el diálogo es una imposibilidad física.

Esta custodia del lenguaje nos lleva a confrontar uno de los fenómenos psicológicos más devastadores del ejercicio del poder: el aislamiento. En la antigüedad se le conocía como “el mal de palacio”, esa patología silenciosa que envuelve a los mandatarios en una burbuja hermética, donde la única voz que resuena es la de sus propios ecos.

El poder, por su propia naturaleza gravitacional, ahuyenta la franqueza y atrae la adulación. Quien gobierna se encuentra rápidamente rodeado de cortesanos dispuestos a aplaudir cada una de sus decisiones, filtrando la realidad para que el líder solo observe aquello que le resulta complaciente. En ese espejo trucado, el país siempre avanza, las críticas siempre son producto de conspiraciones malintencionadas y las crisis son siempre culpa de terceros.

Frente a esta ceguera institucional, el diálogo deja de ser una simple herramienta de negociación política para convertirse en el único salvavidas de la cordura del gobernante. Escuchar a quien no nos debe lealtad, sentarse frente al detractor que no busca complacernos, es el acto de supervivencia intelectual más importante de un estadista. Quien se niega a dialogar argumentando falta de tiempo o desdén por el adversario, en realidad está revelando un terror profundo a que la realidad exterior perfore la burbuja de sus certezas. Dialogar es, en el fondo, tener el

inmenso coraje de dejarse vulnerar por la verdad del otro.

Y es aquí donde debemos redefinir el concepto del coraje en la política contemporánea. En la era de la inmediatez y la sobreexposición, hemos llegado a confundir la valentía con la estridencia. Se aplaude como “fuerte” al líder que golpea la mesa, al que humilla a su interlocutor en público y al que se jacta de no ceder jamás ni un milímetro. Pero esa es la fortaleza de las fachadas de cartón. Destruir requiere muy poco esfuerzo; basta con dejar sueltas las pasiones más primitivas del ser humano.

La verdadera valentía, el heroísmo silencioso que sostiene a las naciones, es abrumadoramente difícil. Se requiere de un coraje colosal para soportar el ataque, contener el ego herido y, en lugar de devolver el golpe, extender la mano para buscar un punto de encuentro. Es infinitamente más exigente construir un puente sobre un río caudaloso que dinamitarlo desde la orilla. El gobernante que elige el camino de la moderación y la escucha activa sabe que no será aclamado por las tribus fanatizadas de las redes sociales, pero también sabe que su labor es la argamasa que evita que el edificio social se venga abajo.

La grandeza no reside en gobernar para el aplauso estridente del presente, sino en asumir el desgaste de coser las heridas de una sociedad fragmentada.

El estadista que comprende el valor del diálogo acepta su papel como tejedor de voluntades, consciente de que los hilos de la paz social son tan finos que un solo tirón de soberbia puede reventarlos para siempre.

Sin embargo, el destino de una República no puede pender de un hilo tan delgado como la virtud individual de quien ocupa la presidencia. La historia nos ha demostrado, una y otra vez, que los líderes fallan, que las tentaciones del absolutismo nublan las mentes más brillantes y que el poder, tarde o temprano, siempre intenta desbordar sus propios límites.

¿Qué ocurre entonces cuando el gobernante abdica de su responsabilidad semántica? ¿Qué sucede cuando el mal de palacio se instala, cuando los puentes del diálogo son dinamitados desde el poder y cuando las palabras se utilizan como dagas contra la disidencia?

Es en esa hora oscura, cuando los guardianes formales del Estado se ven acorralados, que debe entrar en escena la fuerza más indómita y definitiva de la democracia. Un escudo que no está escrito en las leyes, pero que late en el corazón de cada calle y de cada barrio. Hacia ese último bastión de resistencia, hacia la inmensa y a veces incomprensible responsabilidad de la ciudadanía, nos dirigimos ahora para cerrar esta obra y mirar el horizonte de frente.

Capítulo Final

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA



Cualquiera que camine hoy por las calles de nuestro país, que se siente a tomar un café en cualquier esquina de San José o que escuche las conversaciones en la fila del supermercado, puede sentirlo. Hay una tensión eléctrica en el aire, una pesadez invisible que se ha instalado en nuestra cotidianidad. La crisis institucional que hemos venido desmenuzando a lo largo de este libro dejó de ser hace mucho tiempo un tema reservado para los analistas políticos o los académicos; hoy es un nudo en el estómago del ciudadano común.

Lo sentimos en los grupos familiares de mensajes que de pronto se quedan en un silencio incómodo para evitar una pelea. Lo vemos en las amistades de toda la vida que se han fracturado porque el debate político se volvió un territorio minado, donde cualquier opinión distinta se castiga con el desprecio. Esa es la verdadera textura de la polarización. Cuando la política se degrada a un combate a muerte, la primera víctima no es un artículo de la Constitución, sino la paz de nuestras propias casas.

Y frente a este clima, frente a la sensación de que el país que dábamos por sentado se nos escurre entre los dedos, el costarricense suele hacerse una pregunta cargada de angustia:

¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a poner orden y a proteger la democracia?

Durante generaciones, nos acostumbramos a “tercerizar” nuestra ciudadanía. Crecimos con la reconfortante ilusión de que la libertad era un bien garantizado, una especie de servicio público que fluye ininterrumpidamente con solo acercarnos a las urnas a votar cada cuatro años. Asumimos que la tarea de proteger a la República le correspondía a “alguien más”: a los magistrados de la Sala Constitucional, a los técnicos de la Contraloría, a los diputados o al inquebrantable Tribunal Supremo de Elecciones. Veíamos a estas instituciones como fortalezas de piedra, diseñadas para resistir cualquier asedio sin que nosotros tuviéramos que levantar un dedo.

Pero las fortalezas no se defienden solas.

Si algo debe quedarnos grabado a fuego en este momento histórico, es que la respuesta a la pregunta de quién protege la democracia no tiene el nombre de un superhéroe ni el logo de un solo poder del Estado. La defensa de nuestra convivencia es, en la práctica, una inmensa responsabilidad distribuida, una sinfonía de actores donde cada uno debe tocar su instrumento con precisión para que la melodía no colapse.

Pensemos en esos guardianes silenciosos que hoy están bajo fuego. La democracia la protegen, en primer lugar, los partidos políticos cuando asumen la valiente tarea de ser verdaderos filtros de integridad y no simples taxis electorales, ofreciendo al país alternativas serias antes de que el descontento busque salidas fuera del sistema. La protegen los tribunales de justicia cada vez que un juez emite una sentencia apegada al derecho, tragándose el miedo y sabiendo que su fallo podría costarle una campaña de linchamiento en su contra. La protege el Parlamento cuando sus diputados deciden que el hemiciclo debe ser un espacio de debate constructivo y no un circo de insultos diseñado para alimentar las redes sociales. Y la custodia, de manera sagrada, nuestro organismo electoral, garantizando que el veredicto de las urnas sea siempre el árbitro indiscutible de nuestra paz.

Pero el círculo de protección es mucho más amplio y se extiende fuera de las paredes del gobierno. Los guardianes también son nuestras universidades públicas, que frente a la epidemia de la desinformación y las noticias falsas, tienen el deber ineludible de producir conocimiento técnico y evidencia científica para contrastar cualquier relato oficial. Son los medios de comunicación independientes, esos periodistas que asumen jornadas extenuantes, soportan la asfixia económica y toleran el insulto diario del poder, con el único fin de encender una linterna en los rincones donde la corrupción intenta esconderse. Son, incluso, los organismos internacionales de derechos humanos, que actúan como un espejo imparcial para recordarnos ante el mundo los compromisos que juramos defender.

Todos ellos conforman el escudo de Costa Rica. Pero aquí radica la verdad más cruda y urgente de nuestra época: si sumamos a todos estos actores, descubriremos que ninguno de ellos, por sí solo, puede soportar el peso

entero de la República. Un juez valiente, rodeado de partidos en ruinas, universidades silenciadas, una prensa acorralada y una población pasiva, terminará cediendo ante la presión de un poder que busca devorarlo todo.

La arquitectura de nuestra libertad es perfecta en su diseño, pero necesita sangre en sus venas. Y esa sangre somos nosotros.

El definitivo guardián de la democracia, el único capaz de sostener a todos los demás, es el ciudadano. No un ciudadano de papel, ni una estadística demográfica, sino la persona de carne y hueso que hoy siente la necesidad imperiosa de que su país no se hunda. Es el momento de mirarnos al espejo y comprender que la caballería no vendrá a rescatarnos; nosotros somos la caballería.

La resistencia ciudadana no se trata de lanzar piedras, incendiar las calles o devolver el odio con más odio. Esa es la trampa del terreno del fango y la violencia. La verdadera resistencia, la que hace temblar a quienes desean concentrar el poder, es un ejercicio de dignidad cotidiana.

Resistir es negarse a que la fatiga informativa nos venza. Es tener el coraje de apagar el algoritmo que nos enfurece, para abrir un libro, leer un fallo judicial o buscar la cifra exacta que desmienta la mentira. Resistir es acompañar al periodista acosado leyendo su trabajo, es respaldar al juez valiente cuando falla conforme a la ley —incluso si su sentencia va en contra de lo que nosotros deseábamos íntimamente— y es defender a la Contraloría cuando hace su labor técnica, entendiendo que las reglas deben aplicarse parejo o no son reglas en absoluto.

Y, por encima de todo, resistir es volver a ocupar los espacios que el miedo y la apatía nos robaron. Es inyectarle vida a nuestros cuerpos intermedios. Es el vecino que levanta la mano en la asociación de desarrollo de su cantón, el médico que milita activamente en su colegio profesional, el joven que organiza su comunidad y el trabajador que participa en su sindicato, no para defender privilegios mezquinos, sino para construir tejido social. Porque el autoritarismo detesta a los ciudadanos organizados. Prefiere individuos aislados, deprimidos y enfrentados entre sí, pegados a una pantalla de celular creyendo que su única forma de participación política

es escribir un comentario colérico en una red social.

Cuando el costarricense se levanta de su sofá, se organiza con sus pares y se niega a normalizar la violencia verbal; cuando exige transparencia sostenida y no perdona que un caso de corrupción se engavete simplemente porque ya no es noticia; en ese instante milagroso, el dique de la República se vuelve indestructible.

Nuestra libertad no depende de que nazca un político perfecto que no cometa errores. Depende de que exista un pueblo tan maduro, tan vigilante y tan celoso de sus derechos, que ningún líder, por carismático o temible que sea, se atreva a cruzar la línea roja.

Hay una tentación inmensa que nos acecha en estos días oscuros, un peso que se instala en los hombros del ciudadano honrado cuando llega a su casa después de una jornada agotadora: la tentación del cansancio. Frente al

ruido incesante de la política, frente a la hostilidad que satura nuestras pantallas y el fuego cruzado de las declaraciones públicas, el instinto más humano y comprensible es querer apagarlo todo. Deseamos silenciar el teléfono, cerrar la puerta al mundo exterior y refugiarnos en la burbuja de nuestros afectos más cercanos. Nos decimos a nosotros mismos: “Que los políticos se peleen, yo tengo facturas que pagar y una familia que sacar adelante”.

Esa fatiga cívica, ese deseo profundo de desentendernos de la suerte del país, es el síntoma más doloroso de la época que atravesamos. Pero debemos mirarnos a los ojos y decirnos la verdad, por más cruda que sea: la apatía de los buenos es el terreno donde el autoritarismo siembra sus victorias más definitivas.

Cuando el ciudadano de a pie, asqueado por la polarización, decide retirarse del espacio público y guardar silencio, ese vacío no permanece desocupado. Es llenado instantáneamente por los mercaderes del odio, por los extremistas y por aquellos que han convertido la división en su modelo de negocios. Rendirnos al cansancio es, en el fondo, entregarles las llaves de nuestro futuro a quienes menos aman a esta patria.

Para que la luz de nuestra República no se extinga, debemos invocar una

fuerza interior que trasciende las leyes y los reglamentos. Hablamos de una rebelión íntima, silenciosa pero indomable, que comienza con un rechazo absoluto y sin concesiones hacia la violencia política en todas sus formas. Y no nos referimos únicamente a la violencia física que mancha de sangre las calles; nos referimos a esa violencia sutil, insidiosa y venenosa que se disfraza de “franqueza” en el debate diario.

Cuando toleramos que un líder, un periodista o un simple vecino utilice el lenguaje para deshumanizar a quien piensa distinto, estamos presenciando el colapso de nuestra moral democrática. El instante en que normalizamos la incitación al odio contra un adversario, o aceptamos que se le etiquete como una escoria indigna de respeto, estamos renunciando, sin saberlo, a la posibilidad misma de resolver nuestras diferencias por la vía pacífica. La violencia verbal es la antesala de la tragedia física. Una sociedad que permite la humillación sistemática del otro pierde su alma y se condena a vivir en una trinchera de amargura permanente.

Imagine la grandeza de espíritu que requiere un ciudadano para salir a respaldar a la Sala Constitucional, no cuando falla a favor de sus ideales, sino precisamente el día en que emite una sentencia que le frustra el corazón. Aplaudir a los tribunales solo cuando nos dan la razón, y denunciarlos como corruptos o parcializados cuando fallan en contra nuestra, es exactamente el mecanismo que destruye la verdad institucional. Defender la majestad de la ley en ambos casos, tragándonos la amargura de la derrota, es el ejercicio real, doloroso y sublime de la ciudadanía democrática.

Esa misma grandeza es la que nos exige respetar, con devoción casi religiosa, los resultados electorales, especialmente los adversos. En un mundo donde las naciones se desangran por retener el poder a la fuerza, la capacidad de perder una elección, de reconocer la derrota sin cuestionar la legitimidad del proceso y de estrechar la mano del vencedor, es un milagro cívico. Esa alternancia pacífica del poder es el pilar maestro sin el cual ninguna democracia puede sostenerse en el tiempo. Cada vez que un candidato derrotado reconoce su caída frente a las cámaras, y sus seguidores regresan a sus casas en paz, Costa Rica vuelve a nacer. Ese es el patrimonio inmaterial que no podemos permitir que nadie nos arrebatte.

Sin embargo, para que este nivel de conciencia no sea un privilegio de pocos, sino el escudo de toda la nación, debemos asumir una tarea que hemos postergado imperdonablemente: la educación cívica de nuestras generaciones. Y no hablemos de la educación cívica como una materia aburrida que se aprueba de memoria en las aulas de secundaria para cumplir con un requisito. Hablamos de una inversión vital, desesperada y urgente en la comprensión de nuestra propia libertad.

Una sociedad que no comprende cómo funcionan los engranajes de su propia República es una sociedad vulnerable a los encantadores de serpientes. Debemos cultivar, tanto en la escuela como en la sobremesa de nuestros hogares, el conocimiento profundo que le permita a cualquier joven entender la diferencia abismal que existe entre un simple decreto del Ejecutivo y una ley aprobada por la Asamblea de la República. Debemos enseñarles a discernir entre una acusación política lanzada al viento y una condena judicial firme; a diferenciar el ruido pasajero de una encuesta de opinión, del mandato sagrado y vinculante de un resultado electoral.

Cuando un ciudadano domina estos conceptos, se vuelve invulnerable. Está mucho mejor preparado para resistir la manipulación de cualquier actor político, sea cual sea su bandera ideológica, que intente retorcer la realidad a su conveniencia. Invertir en esta alfabetización democrática no es un lujo curricular que podamos desechar frente a las urgencias económicas; es, en el momento que atraviesa nuestra patria, la inversión de más alto rendimiento democrático que podemos hacer para garantizar nuestra supervivencia.

Esta es la resistencia que nos exige el momento histórico. No es una lucha de espadas, sino una batalla de conciencias. Es el esfuerzo diario y silencioso de no rendirnos a la apatía, de cuidar nuestras palabras como si fueran un tesoro, de abrazar la ley cuando duele y de enseñar a nuestros hijos que la libertad no es un regalo, sino una conquista que se defiende cada mañana antes de que salga el sol.

“La esperanza de Costa Rica no está en encontrar quién tenga la última palabra, sino en que nunca dejemos de hablarnos.”



El Reto de la Palabra: La Erosión Silenciosa del Diálogo

Por: Jorge Woodbridge González



COSTA RICA:

RETO SIGLO21

Mientras el poder se concentra, las instituciones son cuestionadas y el debate público se transforma cada vez más en confrontación, los límites que sostienen nuestra democracia comienzan a erosionarse.

Jorge Woodbridge se atreve a mirar esa fractura y a preguntarnos qué estamos perdiendo cuando el insulto sustituye al argumento. Este libro recorre el debilitamiento de los partidos y otros mediadores sociales, el impacto de las redes y la cultura de la confrontación, la concentración del poder y el desgaste de las instituciones, pero también mira con honestidad el dolor y el descontento que alimentan esta crisis.

¿Qué sucede cuando un país deja de escucharse?

JORGE WOODBRIDGE GONZÁLEZ

Jorge Woodbridge ha participado en el desarrollo de Costa Rica desde algunos de los más altos niveles de la institucionalidad pública, económica y deportiva, destacando como Ministro de Economía, Ministro de Competitividad y Presidente de la Fedefútbol.

A lo largo de su trayectoria ha observado de cerca las fortalezas, contradicciones y transformaciones de la sociedad costarricense. Esa experiencia, sumada a su vocación analítica y a una profunda preocupación por el futuro democrático del país, lo lleva hoy a reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: la erosión del diálogo, la confianza y los principios que sostienen nuestra democracia.